ASUNTO	MATERIA Y SECRETARÍA/O	NORMATIVA, ACTO U OMISIÓN IMPUGNADO	PROBLEMÁTICAS JURÍDICAS	SENTENCIA (SENTIDO Y RATIO DECIDENDI)	VOTO	ARGUMENTO DEL VOTO	OBSERVACIONES PARA SEGUIMIENTO DEL ASUNTO
Contradicción de criterios 241/2023 Ponente: Ministro Pardo Rebolledo Resuelto: 08/01/24	Administrativa	Interés superior del menor justifica o no conceder la suspensión respecto de un derecho subjetivo cuya titularidad es precisamente la materia del fondo del amparo principal.	<p>Determinar si existe una contradicción entre los siguientes órganos jurisdiccionales:</p> <p>a) El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja "*****", determinó que debe concederse la suspensión provisional a un menor de edad, cuando alega violaciones a su derecho a la educación, a efecto de que la autoridad le otorgue el temario para preparar el examen global de conocimientos y de esta manera incorporarse a primer año de primaria.</p> <p>b) El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja "*****", determinó que el hecho de ser menor de edad no basta para conceder la suspensión definitiva, cuando lo que se reclama es la orden de disposición de un inmueble en calidad de tercero extraño a juicio, pues para ello se requiere exhibir además el título que sustenta el derecho posesorio reclamado, aunque sea de forma presuntiva o indiciaria.</p> <p>Los tribunales analizaron derechos humanos distintos a partir de circunstancias muy particulares y en procedimientos jurídicos de naturaleza diversa. Además, tampoco se advierte un punto de toque sobre la interpretación o aplicación de las reglas que rigen la</p>	<p>ÚNICO. No existe la contradicción de criterios denunciada.</p>	<p>Apartados de antecedentes, competencia, legitimación y criterios denunciados: A favor.</p> <p>Inexistencia de la contradicción de tesis: A favor</p> <p>Reolutivos: A favor.</p>	Sin comentarios.	<p>Apartados de antecedentes, competencia, legitimación y criterios denunciados: Unanimidad de votos.</p> <p>Inexistencia de la contradicción de tesis: Unanimidad de votos.</p> <p>Reolutivos: Unanimidad de votos.</p>
Contradicción de criterios 296/2023 Ponente: Ministro Gutiérrez Ortiz Mena Resuelto: 08/01/24	Penal	Conflicto competencial por materia suscitado entre tribunales colegiados de circuito especializados. Determinar si para resolver a favor de quien se surte la competencia debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado o a la especialización del órgano o autoridad que lo emitió.	<p>Posible conflicto competencial:</p> <p>a) La Primera Sala, en el recurso de queja promovido por la parte quejosa fue en contra de un acto dictado por un juzgado de distrito especializado en materia penal</p> <p>b) En el caso del conflicto competencial resuelto por la Segunda Sala, el acto reclamado lo emitió un juzgado de distrito con competencia mixta.</p>	<p>ÚNICO. No existe la contradicción de criterios, en los términos del apartado sexto de esta resolución.</p>	<p>Apartados de antecedentes y trámite de la denuncia, competencia, legitimación y criterios denunciados: A favor.</p> <p>Inexistencia de la contradicción de tesis: A favor</p> <p>Reolutivos: A favor.</p>	Sin comentarios.	<p>Apartados de antecedentes y trámite de la denuncia, competencia, legitimación y criterios denunciados: Unanimidad de votos.</p> <p>Inexistencia de la contradicción de tesis: Mayoría de siete votos a favor de la propuesta; el señor Ministro González Alcántara Carrancá, en contra del párrafo 38; y voto en contra de la señora Ministra Esquivel Mossa y de la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, quien anuncia voto particular.</p> <p>Reolutivos: A favor.</p>
Contradicción de criterios 365/2022 Ponente: Ministro Luis María Aguilar Morales. Resuelto: 08/01/24	Penal	Restricciones constitucionales. Determinar si son inoperantes o no los conceptos de violación o agravios que planteen la inconstitucionalidad o inconveniencia de una restricción, prohibición, limitación o excepción de carácter constitucional o si son susceptibles de estudio.	<p>Algunos criterios contendientes:</p> <p>a) El Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, en 5 juicios de amparo directo que estimó procedentes contra las sentencias definitivas, señaló que se examinaron de fondo los conceptos de violación sin que estuviera en tela de juicio si en los casos planteados operaba o no alguna restricción constitucional.</p> <p>b) El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que conoció de un amparo en revisión en materia penal, examinó un caso en el que operó una restricción constitucional relativa a la prisión preventiva oficiosa y puso de manifiesto que la prisión preventiva oficiosa se impuso al quejoso con fundamento en la jurisprudencia obligatoria del Pleno P./J. 20/2014, y determinó que la imposición de dicha medida cautelar se ajustaba a la prevención expresa que estableció la Constitución Federal en su artículo 19, párrafo segundo.</p>	<p>ÚNICO. No existe la contradicción de criterios, en los términos del apartado sexto de esta resolución.</p>	<p>Apartados de competencia, legitimación y criterios denunciados: A favor.</p> <p>Inexistencia de la contradicción de tesis: A favor</p> <p>Reolutivos: A favor.</p>	Sin comentarios.	<p>Apartados de competencia, legitimación y criterios denunciados: Unanimidad de votos.</p> <p>Inexistencia de la contradicción de tesis: Unanimidad de votos.</p> <p>Reolutivos: Unanimidad de votos.</p>
Contradicción de criterios 89/2023 Ponente: Ministro Alcántara Carrancá Resuelto: 09/01/24	Civil y Administrativa	Suspensión en amparo directo. Determinar si para conceder dicha medida cautelar el tribunal colegiado puede tomar en cuenta la apariencia del buen derecho o si sólo es aplicable para concederla en vía indirecta.	<p>Criterios contendientes:</p> <p>a) En el Amparo Directo no se necesita analizar la "aparición de buen derecho" para conceder la suspensión.</p> <p>b) Si bien tratándose de Amparo Indirecto sí procede analizar la "aparición de buen derecho" pues la suspensión se dicta en un momento procesal en el que el Juzgado de Distrito apenas tienen indicios de la existencia de un interés y de la naturaleza del acto, en Amparo Directo, ya se tiene pleno conocimiento del interés jurídico que puede llegar a tener el quejoso y de la existencia del acto reclamado, ya que la sentencia fue dictada por la misma autoridad que se pronuncia sobre la medida cautelar de suspensión por lo que no aplica la figura de "aparición de buen derecho".</p>	<p>PRIMERO. Existe la contradicción denunciada.</p> <p>SEGUNDO. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por este alto tribunal.</p> <p>TERCERO. Publíquese la tesis de jurisprudencia que se sustenta en la presente resolución, en términos de lo dispuesto en los artículos 219 y 220 de la Ley de Amparo.</p>	<p>Apartados de competencia, legitimación y existencia de la contradicción: A favor.</p> <p>Fondo: A favor.</p> <p>Reolutivos: A favor.</p>	Sin comentarios.	<p>Apartados de competencia, legitimación y existencia de la contradicción: Mayoría de ocho votos a favor de la propuesta; la señora Ministra Ortiz Ahn, en contra de los párrafos 53 al 59; el señor Ministro Pardo Rebolledo, en contra de los párrafos 34, 36, 37 y 63; y voto en contra de la señora Ministra Esquivel Mossa.</p> <p>Reolutivos: Unanimidad de votos.</p>
Contradicción de criterios 130/2023 Ponente: Ministro González Alcántara Resuelto: 09/01/24	Civil y Trabajo	Persona extraña a juicio por equiparación. Determinar si puede o no ostentarse con dicho carácter aquella que, teniendo conocimiento del juicio seguido en su contra, promueve amparo indirecto en contra de la falta de notificación personal de la reanudación del procedimiento por inactividad procesal.	<p>Criterios contendientes:</p> <p>a) Un tribunal colegiado de circuito conoció de un juicio de amparo en revisión en el que la parte quejosamreclamó la indebida notificación de la entonces audiencia trífase celebrada en un juicio laboral; esto, al considerar que se debió de notificar en forma personal por ser parte del juicio.</p> <p>b) El otro tribunal colegiado analizó un caso distinto. En aquel asunto, tenemos un recurso de queja interpuesto en contra del desahucio de plano de una demanda de amparo, en el que una parte quejosa reclamó la indebida notificación de la reanudación de un juicio después de un periodo prolongado de inactividad procesal (a su dicho) suficiente para que hubiera operado la caducidad de la instancia.</p>	<p>PRIMERO. El tribunal pleno no es competente para resolver la contradicción de criterios entre el segundo tribunal colegiado en materia civil del séptimo circuito y el primer tribunal colegiado en materia civil del séptimo circuito.</p> <p>SEGUNDO. El tribunal pleno es competente para conocer la contradicción de criterios entre el primer tribunal colegiado en materia de trabajo del segundo circuito y el primer tribunal colegiado en materia civil del séptimo circuito.</p> <p>TERCERO. Existe la contradicción denunciada.</p> <p>CUARTO. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por este alto tribunal. QUINTO. Publíquese la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resolución en términos de lo dispuesto en los artículos 219 y 220 de la Ley de Amparo.</p>	<p>Apartados de competencia, legitimación y criterios denunciados: A favor.</p> <p>Existencia de la contradicción: A favor.</p> <p>Estudio de fondo: A favor.</p> <p>Reolutivos: A favor.</p>	Sin comentarios.	<p>Apartados de competencia, legitimación y criterios denunciados: Unanimidad de votos.</p> <p>Existencia de la contradicción: Mayoría de cinco votos a favor de la propuesta.</p> <p>Estudio de fondo: Unanimidad de votos a favor de la propuesta; obligados por la mayoría y con anuncio de voto concurrente se expresan la señora Ministra Ortiz Ahn, el señor Ministro Pardo Rebolledo, la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, quien anuncia, incluso, voto concurrente; la señora Ministra Ríos Fajat también con precisiones y obligada por la mayoría.</p> <p>Reolutivos: Unanimidad de votos.</p>
Contradicción de criterios 523/2019 Ponente: Ministro Aguilar Morales. Resuelto: 11/01/24	Penal y Administrativa	Incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión. Determinar si procede tratándose de la suspensión provisional.	<p>Determinar si:</p> <p>1. ¿El incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión en amparo indirecto es procedente para revisar o asegurar el acatamiento de la suspensión provisional?</p> <p>2. ¿El recurso de queja interpuesto en contra del auto que resuelve sobre el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional debe quedar sin materia cuando, durante la tramitación del recurso, se emite la resolución que concede o niega la suspensión definitiva?</p>	<p>PRIMERO. Existe la contradicción denunciada.</p> <p>SEGUNDO. Deben prevalecer con carácter de jurisprudencia los criterios sustentados por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos precisados en el último considerando de esta resolución.</p> <p>TERCERO. Publíquese las tesis de jurisprudencia que se sustentan en la presente resolución en términos de lo dispuesto en los artículos 219 y 220 de la Ley de Amparo.</p>	<p>Apartados de competencia, legitimación y criterios denunciados: A favor.</p> <p>Existencia de la contradicción: A favor.</p> <p>Estudio de fondo 1: A favor.</p> <p>Estudio de fondo 2: En contra.</p> <p>Reolutivos: A favor.</p>	Sin comentarios.	<p>Apartados de competencia, legitimación y criterios denunciados: Unanimidad de votos.</p> <p>Existencia de la contradicción: Unanimidad de votos.</p> <p>Estudio de fondo 1: Unanimidad de votos.</p> <p>Estudio de fondo 2: Mayoría de nueve votos a favor de la propuesta; con voto en contra de la señora Ministra Baires Guadarrama y de la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, quien anuncia voto particular.</p> <p>Reolutivos: Unanimidad de votos.</p>
Contradicción de criterios 116/2023 Ponente: Ministro Pardo Rebolledo Resuelto: 11/01/24	Administrativa	Competencia en razón de la materia. Determinar que tribunal colegiado es competente para conocer del recurso interpuesto en contra de una resolución emitida en un juicio de amparo indirecto en el que se reclamó la inscripción del embargo de un inmueble en el registro público de la propiedad	<p>Criterios contendientes:</p> <p>a) La Segunda Sala concluyó que, tratándose de actos del registro público de la propiedad, es competente para conocer del asunto un tribunal colegiado en materia administrativa. En el caso concreto fue, como ya se decía, la inscripción de un embargo ante el registro público de la propiedad.</p> <p>b) La Primera Sala sostuvo una postura diversa, pues llegó a la conclusión de que, si bien el acto reclamado consistente en la inscripción de un embargo realizado por el registro público de la propiedad se trata de un acto Administrativo, lo cierto es que derivó de un pronunciamiento en un juicio ejecutivo mercantil, por lo que decidió que la competencia debería surtirse en favor de un tribunal colegiado en materia civil</p>	<p>PRIMERO. Si existe la contradicción de criterios denunciada.</p> <p>SEGUNDO. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia la tesis sustentada por este tribunal Pleno de la SCJN.</p> <p>TERCERO. Dese publicidad a la tesis en los términos del artículo 220 de la Ley de Amparo.</p>	<p>Apartados de competencia y legitimación: A favor.</p> <p>Existencia de la contradicción: A favor.</p> <p>Estudio de fondo: A favor con modificaciones.</p> <p>Reolutivos: A favor.</p>	<p>Estudio de fondo: Solamente un breve comentario en afilado a este conjunto de razones que damos Ministros Laynez y Aguilar. Creo que puede generar, incluso, un elemento de confusión el añadir el origen, más que ayudar a acotar la propia competencia en los tribunales colegiados. Creo que pone en duda la naturaleza del acto que, finalmente, va a terminar siendo Administrativa por ser registral.</p>	<p>Apartados de competencia y legitimación: Unanimidad de votos.</p> <p>Existencia de la contradicción: Unanimidad de votos.</p> <p>Estudio de Fondo: Unanimidad de votos a favor de la propuesta modificada; el señor Ministro González Alcántara Carrancá, en contra de algunas consideraciones con anuncio de voto concurrente; la señora Ministra Esquivel Mossa, el señor Ministro Aguilar Morales y la señora Ministra Presidenta Piña Hernández reservan su derecho a formular voto concurrente.</p> <p>Reolutivos: Unanimidad de votos.</p>

<p>Contradicción de tesis 158/2018 Ponente: Ministro Gutiérrez Ortiz Mena Nota: Se retiró en sesión 11/01/2024</p>	<p>Fiscal</p>	<p>Contradicción entre los criterios sustentados por la primera y segunda salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación</p>	<p>Retirada</p>	<p>Retirada</p>	<p>Retirada</p>	<p>Retirada</p>	<p>Retirada</p>
<p>Contradicción de criterios 298/2023 Ponente: Ministro Laynez Potisek Resuelto: 15/01/24</p>	<p>Administrativa</p>	<p>Recurso de inconstitucionalidad. Determinar si procede en contra del acuerdo mediante el que se declara fundada la resolución en que se declara fundada la denuncia de incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad (consumo ilícito del cannabis)</p>	<p>Criterios contendientes: a) Los asuntos analizados por la Primera Sala derivaron todos de una declaratoria general de inconstitucionalidad surgida de juicios de amparo en revisión en los que se declaró la inconstitucionalidad de un sistema de prohibiciones normativas administrativas que estaban previstas en la Ley General de Salud, y que impedia otorgar autorizaciones para analizar ciertas actividades relacionadas con el consumo individual y personal de la cannabis. b) La Segunda Sala analizó asuntos en los que el juez de distrito declaró fundada la denuncia de incumplimiento de declaratoria general provenientes de acciones de inconstitucionalidad, es decir, de un procedimiento de constitucionalidad distinto y, por su naturaleza, como control abstracto. En general, los efectos se limitan a declarar la invalidez de una disposición, de una porción normativa, de una norma y su exclusión del orden jurídico nacional.</p>	<p>PRIMERO. Es existente la contradicción de criterios entre la primera y la segunda salas de este alto tribunal. SEGUNDO. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sostenido por este Tribunal pleno, en los términos de la tesis redactada en el último considerando de esta resolución. TERCERO. Se ordena dar publicidad a la tesis, conforme a lo dispuesto en los artículos 219 y 220 de la Ley de Amparo.</p>	<p>Apartados de competencia, legitimación y criterios denunciados: A favor. Existencia de la contradicción: A favor. Estudio de fondo: En contra. Resolutivos: A favor.</p>	<p>Estudio de fondo: Voy a votar en contra del proyecto porque, de aprobarse, se estaría ampliando la procedencia del recurso de inconstitucionalidad a hipótesis que no se encuentran previstas en la Ley de Amparo, pues tener por cumplida declaratoria general de inconstitucionalidad no está expresamente dentro de las fracciones contempladas en el artículo 201 de la ley, que solo considera los casos en que se declare inconstitucional o improcedente la denuncia conforme al artículo (perforación) a la fracción IV y, en el supuesto de la fracción I, no actualiza tener por cumplida (bueno) un equivalente a tener por cumplida la jecutoria de amparo porque la declaratoria general de inconstitucionalidad tiene una naturaleza distinta, que se agota en dejar de aplicar la norma declarada inconstitucional, mientras que, en el caso de la ejecutoria de amparo, pues se pueden aplicar diversos actos que son anexas o que son de naturaleza distinta que, efectivamente, se puedan considerar, justificadamente, conforme a la norma. Ejecución.</p>	<p>Apartados de competencia, legitimación y criterios denunciados: Unanimidad de votos. Existencia de la contradicción: Mayoría de nueve votos a favor de la propuesta con voto en contra del señor Ministro Aguilar Morales y del señor Ministro Pérez Dayán. Estudio de fondo: Mayoría de seis votos a favor de la propuesta del proyecto, la señora Ministra Esquivel Mossa y la señora Ministra Ortiz Ahf, con consideraciones adicionales. Resolutivos: Unanimidad de votos.</p>
<p>Contradicción de criterios 172/2023 Ponente: Ministro Pardo Rebolledo Resuelto: 16/01/24</p>	<p>Administrativa</p>	<p>Documentales digitalizadas remitidas vía electrónica al expediente del juicio de amparo. Determinar si ante la omisión del oferente de manifestar bajo protesta de decir verdad que son copia íntegra e inalterada del documento impreso, se le debe prevenir para que la presente de forma física o, en su caso, para que realice la protesta relativa</p>	<p>Establecer qué consecuencias jurídicas se generan cuando en un juicio de amparo indirecto se presenta un documento electrónico para acreditar el interés jurídico o legítimo del quejoso, sin manifestar, bajo protesta de decir verdad, que es copia íntegra e inalterada del documento impreso.</p>	<p>PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente contradicción de criterios. SEGUNDO. Existe la contradicción entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. TERCERO. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos precisados en el considerando último de la presente resolución.</p>	<p>Apartados de competencia, legitimación y criterios contendientes: A favor. Existencia de la contradicción: A favor. Estudio de fondo: En contra. Resolutivos: A favor.</p>	<p>Considero que debe prevalecer el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, por lo que me separo de las consideraciones expresadas de los párrafos 57 a 77 del proyecto, toda vez que considero que los documentos digitalizados deben ser considerados como si se hubieran presentado en su versión física, y antes de demeritar el valor probatorio se debe requerir al oferente el documento fuente con el fin de favorecer el acceso a la justicia por sobre el cumplimiento de formalismos procedimentales.</p>	<p>Apartados de competencia, legitimación y criterios contendientes: Unanimidad de votos. Existencia de la contradicción: Mayoría de nueve votos a favor de la propuesta, con voto en contra de los señores Ministros Aguilar Morales y Pérez Dayán. Estudio de fondo: Mayoría de seis votos a favor de la propuesta del proyecto, obligados por la mayoría votan los señores Ministros Aguilar Morales y Pérez Dayán. Resolutivos: Unanimidad de votos.</p>
<p>Contradicción de tesis 217/2019 Ponente: Ministro Gutiérrez Ortiz Mena Resuelto: 16/01/24</p>	<p>Administrativa</p>	<p>Compensación económica. Determinar si los tribunales de amparo están facultados para imponer aquellas como medidas de reparación del daño en favor de las víctimas.</p>	<p>a) El único efecto posible del juicio de amparo, era la restitución de las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada. Su premisa fundamental se concretó a negar la procedencia de una compensación económica en el caso concreto. b) El otro tribunal sostuvo que ante la imposibilidad de dar un efecto restitutivo al amparo, lo procedente es darle un efecto resarcitorio. En concreto, con una indemnización económica a las víctimas de las violaciones a derechos humanos determinada en las sentencias.</p>	<p>ÚNICO. No existe la contradicción de tesis denunciada. (Resolutivo modificado por cambio de proyecto al alcanzar mayoría de votos)</p>	<p>Apartados de competencia, legitimación y criterios contendientes: A favor. Existencia de la contradicción: En contra. Resolutivos: A favor.</p>	<p>Sin comentarios.</p>	<p>Apartados de competencia, legitimación y criterios contendientes: Unanimidad de votos. Existencia de la contradicción: Mayoría de seis votos en contra de la existencia de la contradicción. Resolutivos: Unanimidad de votos.</p>
<p>Acción de inconstitucionalidad 135/2022 Ponente: Ministro Laynez Potisek Resuelto: 22/01/24</p>	<p>Administrativa</p>	<p>Invalidez de disposiciones de la Ley de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Quintana Roo</p>	<p>(Debe realizarse un análisis oficioso sobre la existencia de la consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas: ¿el procedimiento legislativo de la Ley cuestionada anula la ausencia de conceptos de invalidez?)</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se reconoce la validez de los artículos 11, 12, 20 párrafo 1°, 34, fracción I en su porción normativa "y finalidades" 60, fracción IV y 87, párrafo último de la Ley de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Quintana Roo, expedida mediante el Decreto número 246, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinticuatro agosto de dos mil veintidós, en términos del apartado séptimo de esta determinación. TERCERO. Se declara la invalidez de los artículos 13, 14, 15, párrafo 1° en su porción normativa "los resultados de la consulta indígena serán vinculantes para las partes" y 20, párrafos 2° y 3° de la Ley de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Quintana Roo la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Quintana Roo, de conformidad con lo establecido en los apartados séptimo y octavo de esta ejecutoria. CUARTO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad y legitimación: A favor. Causas de improcedencia y sobrestamiento: A favor. Estudio de fondo consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos: A favor de que es válida la consulta. Estudio parámetro de regularidad constitucional y convencional: A favor. Estudio de constitucionalidad de las normas que establece finalidades específicas de las consultas: A favor, con excepción del artículo 11 y del artículo 20, segundo párrafo, porque considero que no se afecta, ni se desnaturaliza el derecho de una consulta previa, libre, culturalmente adecuada y de buena fe e informada, a la que tienen derecho los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Y creo que, efectivamente, no se afecta, no se limita la protección que puedan brindar legislativamente la participación efectiva de estos pueblos y comunidades en el sentido en el que se plantea originalmente la redacción de estas normas.</p>	<p>Estudio de constitucionalidad de las normas que establece finalidades específicas de las consultas: Estaría de acuerdo en el sentido del proyecto, con excepción del artículo 11 y del artículo 20, segundo párrafo, porque considero que no se afecta, ni se desnaturaliza el derecho de una consulta previa, libre, culturalmente adecuada y de buena fe e informada, a la que tienen derecho los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Y creo que, efectivamente, no se afecta, no se limita la protección que puedan brindar legislativamente la participación efectiva de estos pueblos y comunidades en el sentido en el que se plantea originalmente la redacción de estas normas.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad y legitimación: Unanimidad de votos. Causas de improcedencia y sobrestamiento: Unanimidad de votos. Estudio de fondo consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos: Mayoría de nueve votos en el sentido de que es válida la consulta respectiva, con anuncio de voto concurrente del señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena y el señor Ministro González Alcántara Carrancá; con voto en contra de la señora Ministra Ortiz Ahf y de la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, quien anuncia voto particular. Estudio parámetro de regularidad constitucional y convencional: Unanimidad de votos. Estudio de constitucionalidad de las normas que establece finalidades específicas de las consultas: Mayoría de diez votos, por lo que se refiere al artículo 11 en los términos del proyecto; mayoría de diez votos, por lo que se refiere al artículo 12; y mayoría de diez votos, por lo que se refiere al artículo 87, párrafo último, dado que existe voto en contra de la señora Ministra Piña Hernández en las porciones normativas precisadas y, en el caso del artículo 12 por la invalidez de todo el artículo 12; por lo que se refiere a la propuesta de invalidez del artículo 20, párrafo segundo y tercer párrafo, con voto en contra de la señora Ministra Piña Hernández y con voto en contra de la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, que anuncia voto particular al respecto; y en términos generales en cuanto a la propuesta modificada, unanimitad de once votos, con voto en contra de la señora Ministra</p>
<p>Acción de inconstitucionalidad 132/2022 Ponente: Ministro Pardo Rebolledo Resuelto: 23/01/24</p>	<p>Administrativa</p>	<p>Invalidez de disposiciones de la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Baja California Sur</p>	<p>Invalidez de la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Baja California Sur al considerar que no se llevó a cabo una consulta válida a los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas.</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se declara la invalidez del Decreto número 2620, por el que se expidió la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Baja California Sur, publicado el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, en el Boletín Oficial de la entidad número 48 (extraordinario). TERCERO. Se vincula al Congreso del Estado de Baja California Sur para que, dentro de los doce meses siguientes a la notificación que se le haga de los puntos resolutivos de esta resolución, lleve a cabo, conforme a los parámetros fijados en esta decisión, la consulta a los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas y, posteriormente, emita la regulación correspondiente. CUARTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Baja California Sur, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartados de antecedentes, competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad, legitimación y causas de improcedencia y sobrestamiento: A favor. Estudio de fondo 1 consulta previa a pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas: A favor. Estudio de fondo 2: En el proyecto</p>	<p>Sin comentarios.</p>	<p>Apartados de antecedentes, competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad, legitimación y causas de improcedencia y sobrestamiento: Unanimidad de votos. Estudio de fondo 1 consulta previa a pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas: Unanimidad de votos. Estudio de fondo 2: Por lo que se refiere a la propuesta de postergación de efectos existe una mayoría de nueve votos; con voto en contra del señor Ministro González Alcántara Carrancá, la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, que anuncia voto particular al respecto; y en términos generales en cuanto a la propuesta modificada, unanimitad de once votos, con voto en contra de la señora Ministra</p>

<p>Acciones de Inconstitucionalidad 202/2023 y su acumulada 216/2023</p> <p>Ponente: Ministro González Alcántara Carrancá</p> <p>Resuelto: 23/01/24</p>	<p>Administrativa</p>	<p>Invalidez de disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas</p>	<p>Tema 1: Se propone declarar infundado el argumento relativo a que el Congreso local vulneró la veda electoral al emitir la ley electoral local.</p> <p>Tema 2: Se estudian los argumentos relativos a que el Congreso local vulneró el principio de legalidad porque incurrió su deber de fundar y motivar el decreto impugnado y emitió la ley electoral con igual contenido a la que se impugno en la acción de inconstitucionalidad 158/2020 y sus acumuladas.</p> <p>Tema 3: Estudia dos conceptos de invalidez que hicieron valer el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, en contra del artículo 52 de la ley electoral</p> <p>Tema 4: Modificación de fechas del proceso electoral.</p> <p>Tema 5: Requisitos para el registro de las candidaturas.</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada.</p> <p>SEGUNDO. Se reconoce la validez de los artículos 52, numeral 3, párrafo segundo, incisos a) y b); 100, numeral 1, 153, numeral 1 y 162, numerales 1, fracción I, y 3, fracción I, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, reformada mediante Decreto número 239, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, en términos del apartado VI de esta determinación.</p> <p>TERCERO. Se declara la invalidez del artículo 52, numerales 3, párrafo segundo, inciso c), fracción III, en su porción normativa: "será el dos por ciento del monto que corresponde al treinta por ciento del financiamiento que se distribuye de manera igualitaria a los partidos políticos, nacionales o 20 locales, según corresponda.", y 9, fracción I, en su porción normativa: "el dos por ciento del monto que corresponde al treinta por ciento del financiamiento que se distribuye de manera igualitaria a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como," de la ley de instituciones y procedimientos electorales del estado de Chiapas, de conformidad con lo establecido en el apartado VI de esta sentencia.</p> <p>CUARTO. La declaratoria de invalidez surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del estado de Chiapas, en la inteligencia de que la autoridad electoral administrativa deberá observar lo dispuesto a la ley general de partidos políticos para el caso de partidos políticos locales, como se puntualiza en el apartado VII de esta ejecutoria.</p> <p>QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad y legitimación: A favor.</p> <p>Causas de improcedencia y sobreseimiento: A favor.</p> <p>Tema 1: A favor del proyecto modificado, con consideraciones.</p> <p>Tema 2: A favor.</p> <p>Tema 3: A favor.</p> <p>Tema 4: A favor.</p> <p>Tema 5: En contra, por la invalidez del artículo 162, numeral 1, fracción I, y numeral 3, fracción I.</p> <p>Resolutivos: A favor.</p>	<p>Tema 1: Estoy de acuerdo con los Ministros al respecto en cuanto a la aplicación de la veda electoral y, simplemente, agregaré otra consideración, también distinta; no obstante que voy a votar a favor del proyecto, creo que no se acredita que no se encuentre debidamente fundado y motivado, que también se menciona, porque el proyecto contiene una exposición de motivos y claramente una fundamentación. Entonces, creo que esa otra consideración también la agregaré distinta, a pesar de que apoyo el sentido del proyecto.</p> <p>Tema 5. En el mismo sentido que la Ministra Loretta y los Ministros Aguilar y Pardo, creo que se trata de una norma desproporcionada, este artículo 162, numeral 1, en su fracción I, y numeral 3, en su fracción I, dado que está permitiendo que, efectivamente, autoridades distintas que las jurisdiccionales, como puede ser el propio partido político y la autoridad electoral local, pudieran estar impidiendo ejercicios de derechos humanos, tanto para votar como para ser votado sin posibilidad de que se repare en un mismo periodo electoral que sería un añadido a las argumentaciones que han dado la Ministra y los Ministros presentes, me parece así.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad y legitimación: Unanimidad de votos.</p> <p>Causas de improcedencia y sobreseimiento: Unanimidad de votos.</p> <p>Tema 1: Unanimidad de once votos; y por lo que se refiere a las consideraciones que la sustentan, mayoría de diez votos, la señora Ministra Esquivel Mossa vota a favor de las consideraciones originales; el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena anuncia voto concurrente, al igual que el señor Ministro Ortiz Ahí.</p> <p>Tema 2: Unanimidad de votos a favor de la propuesta. La señora Ministra Ortiz Ahí se separa del reconocimiento de validez implícito en los artículos 259 a 298, por falta, visto en la consulta; el señor Ministro Aguilar Morales, en contra del párrafo 74, la señora Ministra Presidenta Píla Hernández, con consideraciones adicionales.</p> <p>Tema 3: En el caso de validez, son mayoría de diez votos, con voto en contra del señor Ministro Aguilar Morales por lo que se refiere al inciso b); y voto en contra de la señora Ministra Ortiz Ahí por lo que se refiere al inciso a).</p> <p>Tema 4: Unanimidad de votos.</p>
<p>Declaratoria general de inconstitucionalidad 12/2022</p> <p>Ponente: Ministro Gutiérrez Ortiz Mena</p> <p>Nota: Se retiró 23/01/2024</p>	<p>Administrativa</p>	<p>Artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 1, párrafo último, de la ley federal de procedimiento contencioso Administrativo</p>	<p>Retirada</p>	<p>Retirada</p>	<p>Retirada</p>	<p>Retirada</p>	<p>Retirada</p>
<p>Declaratoria general de inconstitucionalidad 11/2022</p> <p>Ponente: Ministro Gutiérrez Ortiz Mena</p> <p>Resuelto 25/01/2024</p>	<p>Civil y Familiar</p>	<p>Declaratoria general de inconstitucionalidad en omisiones legislativas absolutas.</p>	<p>Omisión legislativa del Congreso de la Unión respecto a lo ordenado por los artículos segundo y cuarto transitorios del Decreto de reforma de 15 de septiembre de 2017, para:</p> <p>a) Expedir la legislación única a nivel nacional en materia procesal civil y familiar b) Adecuar las leyes generales y federales que así lo requieran al nuevo contenido de los artículos 16 y 17 constitucionales (referente al principio de oralidad y privilegiar el fondo sobre las formalidades procesales en los procedimientos seguidos en forma de juicio).</p>	<p>ÚNICO. Es improcedente la presente declaratoria general de inconstitucionalidad.</p>	<p>Apartados de competencia y legitimación: A favor.</p> <p>Improcedencia de la declaratoria general de inconstitucionalidad: A favor.</p>	<p>Sin comentarios.</p>	<p>Apartados de competencia y legitimación: Unanimidad de votos.</p> <p>Improcedencia de la declaratoria general de inconstitucionalidad: Unanimidad de votos.</p>
<p>Declaratoria General de Inconstitucionalidad 2/2023</p> <p>Ponente: Ministro Aguilar Morales</p> <p>Resuelto 25/01/2024</p>	<p>Civil</p>	<p>Declaratoria solicitada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre diversas disposiciones de la Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales del Estado de Jalisco</p>	<p>El Congreso local eliminó la figura de a cédula temporal, en concreto, se establece la expedición de cédulas profesionales definitivas en sustitución de aquellas de naturaleza temporal. Por lo que hace a la acreditación a la certificación profesional, se prevé un sistema normativo en el cual se eliminó la obligación de obtener una certificación profesional y se contempló que esta sería voluntaria.</p>	<p>ÚNICO. La presente declaratoria general de inconstitucionalidad ha quedado sin materia.</p>	<p>Apartados de competencia, legitimación, procedencia y antecedentes: A favor.</p> <p>Estudio: A favor con voto concurrente y aclaratorio.</p> <p>Resolutivos: A favor.</p>	<p>Estudio: Yo me manifiesto que voy a votar a favor del proyecto; sin embargo, me separo de algunas de las consideraciones y anuncio un voto concurrente y aclaratorio. Lo anterior, en atención a las razones siguientes: Estimo invasión de competencias por parte del Congreso de Jalisco, pues, si bien es cierto que, el Congreso local reformó algunas disposiciones declaradas inválidas, a fin de eliminar la figura de cédula temporal, lo cierto es que (tal y como se observa) de la lectura del artículo cuarto transitorio que quedó intacto, dicha figura persiste a pesar de la reforma, más aún, debe señalarse que no se elimina la denominada acreditación de la certificación temporal o la figura denominada así, pues, únicamente modifica su carácter de obligatorio a voluntario, incluso, se debe advertir que, no obstante que fueron declarados inconstitucionales los artículos 15, 59, 62, 63, 64 y 65, además del mencionado cuarto transitorio, quedaron intactos, quedaron tal cual estaban, de esta Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales del Estado de Jalisco, cuestión que, por sí misma, hace inaplicables los criterios establecidos por este Tribunal en Pleno, en las declaratorias generales de inconstitucionalidad 5/2017 y 6/2022, en los términos mencionados en el proyecto.</p> <p><i>En materia sustantiva acción de inconstitucionalidad subscrita.</i></p>	<p>Apartados de competencia, legitimación, procedencia y antecedentes: Unanimidad de votos.</p> <p>Estudio: Nueve votos a favor de la propuesta; la señora Ministra Batres Guadarrama anuncia voto concurrente y aclaratorio; con voto en contra del señor Ministro González Alcántara Carrancá, quien anuncia voto particular; y voto en contra de la señora Ministra Presidenta Píla Hernández, quien incluyó, voto en contra de los términos en que se lleva a cabo el cómputo del plazo respectivo, con voto particular.</p> <p>Resolutivos: Unanimidad de votos.</p>
<p>Amparo Directo en Revisión 962/2021</p> <p>Ponente: Ministra Esquivel Mossa</p> <p>Resuelto 29/01/2024</p>	<p>Propiedad intelectual</p>	<p>Ley de la Propiedad Industrial, vulnera el derecho de seguridad jurídica al establecer la imprescriptibilidad en el plazo para solicitar la nulidad de un registro marcarío.</p>	<p>Determinar si el artículo 151, fracción I y último párrafo de la Ley de la Propiedad Industrial, vulnera el derecho fundamental de seguridad jurídica, al establecer la imprescriptibilidad en el plazo para solicitar la nulidad de un registro marcarío otorgado en contravención a las disposiciones de la Ley.</p> <p>Tema 1. Previsión de carácter abierto por parte del artículo 151, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial</p> <p>Tema 2. Imprescriptibilidad para la sanción de la infracción prevista en este precepto</p>	<p>PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida.</p> <p>SEGUNDO. La justicia de la unión ampara y protege a la quejosa Autofinanciamiento México, sociedad anónima de capital variable, para los efectos establecidos por el tribunal colegiado de circuito.</p> <p>TERCERO. La justicia de la unión no ampara ni protege a la quejosa adherente Autofinanciamiento de Automóviles Monterrey, sociedad anónima de capital variable.</p>	<p>Apartados de competencia, oportunidad, legitimación y procedencia: A favor.</p> <p>Fondo: A favor.</p> <p>Resolutivos: A favor.</p>	<p>Fondo: Gracias, Ministra Presidenta, muy brevemente. Simplemente, me manifiesto en favor del proyecto. Creo se han vertido varios argumentos, no repetiré, pero estoy absolutamente de acuerdo con los Ministros, con el proyecto mismo y con los Ministros Pérez Dayán, la Ministra Ríos Farjat, me parece que, efectivamente, tiene relación con las nulidades, pero además, con la figura de la nulidad en el derecho administrativo, particularmente se recoge en la propia Ley Federal de Procedimiento Administrativo una facultad superior para todas las materias administrativas en la que le da a la autoridad un recurso permanente para poder emitir nulidades y la da a la autoridad administrativa también la facultad de hacerlo bajo el artículo 3°, que señala las causas</p>	<p>Mayoría de seis votos a favor de la propuesta; la señora Ministra Ríos Farjat, con consideraciones adicionales; voto en contra del señor Ministro González Alcántara Carrancá, el señor Ministro Ortiz Ahí, el señor Ministro Laynez Potisek, quien anuncia voto particular y el señor Ministro Presidente Aguilar Morales.</p> <p>Fondo: Mayoría de seis votos a favor de la propuesta; la señora Ministra Ríos Farjat, con consideraciones adicionales; voto en contra del señor Ministro González Alcántara Carrancá, el señor Ministro Ortiz Ahí, el señor Ministro Laynez Potisek, quien anuncia voto particular y el señor Ministro Presidente Aguilar Morales.</p> <p>Resolutivos: Unanimidad de votos.</p>
<p>Acción de Inconstitucionalidad 180/2021</p> <p>Ponente: Ministro Ortiz Mena</p> <p>Resuelto 29/01/2024</p>	<p>Penal</p>	<p>Invalidez de diversas disposiciones del Código Penal de Puebla (Unidades de Medida y Actualización)</p>	<p>El estudio se centra en determinar si la normativa impugnada transgrede el principio de proporcionalidad de las penas y la prohibición expresa de la multa excesiva, previstos en el artículo 22 de la Constitución Federal.</p> <p>Se transgreden los artículos 14 y 22 constitucionales, así como los artículos 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por establecer multas fijas.</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se declara la invalidez del artículo 261, fracciones I, en su porción normativa "y multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización", II, en su porción normativa "y multa de quinientas Unidades de Medida y Actualización", y III, en su porción normativa "y multa de quinientas Unidades de Medida y Actualización", del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, reformado mediante el decreto publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el ocho de noviembre de dos mil veintuno, la cual surtirá sus efectos retroactivos al nueve de noviembre de dos mil veintuno a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Puebla.</p> <p>TERCERO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Antecedentes y trámite de la demanda, competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad y el estudio de legitimación: A favor.</p> <p>Estudio de fondo: En contra.</p> <p>Efectos: En contra de la extensión de efectos.</p> <p>Resolutivos: A favor.</p>	<p>Estudio de fondo: Yo quisiera comentar que, recordando el criterio que ha tenido la Primera Sala en la jurisprudencia 114/2010, respecto de un problema de constitucionalidad de leyes en materia de penas y su sistema para su imposición, se debe atender a las razones expuestas por el legislador al crear la ley, y en ese sentido, en su exposición de motivos, los y los legisladores manifestaron su propósito de sancionar con rigidez el daño ocasionado al derecho a la libertad y el normal desarrollo psicoemocional de los menores de edad, por tratarse de una conducta grave, la violencia que atenta contra el principio constitucional del interés superior de la niñez, previsto en el artículo 42 Constitucional.</p>	<p>Antecedentes y trámite de la demanda, competencia, precisión de las normas reclamadas, la oportunidad y el estudio de legitimación: Unanimidad de votos.</p> <p>Estudio de fondo: Mayoría de ocho votos a favor de la propuesta; el señor Ministro Pérez Dayán, con diversas consideraciones; el señor Ministro Presidente Aguilar Morales, con razones adicionales; voto en contra de la señora Ministra Esquivel Mossa y la señora Ministra Batres Guadarrama.</p> <p>Efectos: existen seis votos en contra de la propuesta.</p> <p>Resolutivos: Unanimidad de votos.</p>

<p>Recurso de revisión en materia de seguridad nacional 10/2022</p> <p>Ministro González Alcántara</p> <p>Resuelto: 6/02/2024</p>	<p>Seguridad nacional</p>	<p>La publicidad de la denuncia presentada por la SEMARNAT a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en contra de la empresa CALCA, conforme a lo informado por su Titular mediante su cuenta de Twitter, ahora X.</p>	<p>El proyecto propone declarar infundado el recurso de revisión en materia de seguridad nacional interpuesto por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en contra de la resolución dictada por el INAI en el recurso de revisión *****.</p> <p>Los agravios formulados por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, a saber, que el INAI debió haber analizado la causal de reserva por causa de seguridad nacional respecto del escrito y anexos presentados ante la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ya que su difusión podría afectar la estrategia de defensa de un arbitraje internacional con un inversor extranjero que se desahogue ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones</p>	<p>PRIMERO. Es procedente pero infundado el presente recurso de revisión en materia de seguridad nacional.</p> <p>SEGUNDO. Se confirma la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dictada en el recurso de revisión ***** , adoptada en la sesión celebrada el diez de noviembre de dos mil veintidós.</p>	<p>Apartados de competencia, procedencia, legitimación, oportunidad, agravios y aspecto preliminar: A favor.</p> <p>Fondo: En contra.</p> <p>Resolutivos: A favor.</p>	<p>Fondo: Disiento con el proyecto, pues considero que el agravio de la autoridad recurrente resulta parcialmente fundado por las siguientes razones: Uno. Que el proyecto señala en el artículo 2, inciso d), del Acuerdo de Escazo, que dispone la obligación de los Estados de permitir el acceso a cualquier información medioambiental, incluyendo las relacionadas con riesgos ambientales y posibles impactos adversos que lo afectan o pueden afectar. Afirma que el artículo 5 del acuerdo retoma los parámetros reconocidos a nivel constitucional en materia de derecho de acceso a la información, aplicados específicamente para supuestos medioambientales con énfasis en que su interpretación deberá considerarse conforme a los objetivos generales que plantea este tratado internacional, lo que incluye la facilitación de la participación pública y la garantía del acceso</p>	<p>Apartados de competencia, procedencia, legitimación, oportunidad, agravios y aspecto preliminar: Unanimidad de votos.</p> <p>Fondo: mayoría de nueve votos a favor de la propuesta; el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena, en contra de consideraciones y anuncio de voto concurrente; la señora Ministra Esquivel Mossa, en contra de los párrafos 31 a 40 y anuncio de voto concurrente; el señor Ministro Pardo Rebolledo, en contra de consideraciones y por consideraciones distintas; la señora Ministra Ríos Farjat, en contra de consideraciones y con anuncio de voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, en contra de los párrafos 44 a 47; y la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, en contra de consideraciones, con anuncio de voto concurrente; voto en contra de las señoras Ministras Ortiz Ahif y Batres Guadarrama.</p> <p>Resolutivos: Unanimidad de votos.</p>
<p>Recurso de revisión en materia de seguridad nacional 12/2022</p> <p>Ministro González Alcántara</p> <p>Resuelto: 8/02/2024</p>	<p>Seguridad nacional</p>	<p>La publicidad de la denuncia presentada por la SEMARNAT a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en contra de la empresa CALCA, conforme a lo informado por su Titular mediante su cuenta de Twitter, ahora X.</p>	<p>El proyecto propone declarar infundado el recurso de revisión en materia de seguridad nacional interpuesto por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en contra de la resolución dictada por el INAI en el recurso de revisión *****.</p> <p>Los agravios formulados por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, a saber, que el INAI debió haber analizado la causal de reserva por causa de seguridad nacional respecto del escrito y anexos presentados ante la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ya que su difusión podría afectar la estrategia de defensa de un arbitraje internacional con un inversor extranjero que se desahogue ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones</p>	<p>PRIMERO. Es procedente pero infundado el presente recurso de revisión en materia de seguridad nacional.</p> <p>SEGUNDO. Se confirma la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dictada en el recurso de revisión ***** , adoptada en la sesión celebrada el treinta de noviembre de dos mil veintidós.</p>	<p>Mismo sentido de la votación en el recurso de revisión en materia de seguridad 10/2022.</p>	<p>Mismo sentido de la votación en el recurso de revisión en materia de seguridad 10/2022.</p>	<p>Apartados de competencia, procedencia, legitimación, oportunidad, agravios y aspecto preliminar: Unanimidad de votos.</p> <p>Fondo: Mayoría de nueve votos a favor de la propuesta, con el voto en contra de las señoras Ministras Ortiz Ahif y Batres Guadarrama.</p> <p>Resolutivos: Unanimidad de votos.</p>
<p>Recurso de revisión en materia de seguridad nacional 4/2022</p> <p>Ponente: Ministra Ortiz Ahif</p> <p>Quedó retirado este asunto el 8 de febrero de 2024</p>	<p>Seguridad nacional</p>	<p>Resolución de ocho de junio de dos mil veintidós, emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en el recurso de revisión *****.</p>	<p>Retirado</p>	<p>Retirado</p>	<p>Retirado</p>	<p>Retirado</p>	<p>Retirado</p>
<p>Recurso de revisión en materia de seguridad nacional 7/2023</p> <p>Ponente: Ministra Ortiz Ahif</p> <p>Resuelto: 8 de febrero de 2024</p>	<p>Seguridad nacional</p>	<p>Resolución emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales relacionada con la descalificación de los precios contenidos en la versión pública de los contratos celebrados en el 2022 sobre el sistema eléctrico de Baja California (CENACE).</p>	<p>La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal recurre a la resolución emitida por el INAI, mediante la cual determinó la descalificación de los precios contenidos en la versión pública de los contratos celebrados en el 2022 bajo la aplicación del protocolo correctivo para la adquisición de potencia en el sistema eléctrico de Baja California.</p> <p>Tema 1. Naturaleza y alcance del recurso de revisión en materia de seguridad nacional</p> <p>Tema 2. Marco normativo relativo al derecho de acceso a la información y al principio de seguridad nacional.</p>	<p>PRIMERO. Es procedente pero infundado el presente recurso de revisión en materia de seguridad.</p> <p>SEGUNDO. Se confirma la resolución impugnada.</p>	<p>Apartados de competencia, procedencia, legitimación, oportunidad, agravios y materia de la revisión: A favor.</p> <p>Aspecto preliminar: A favor.</p> <p>Fondo: A favor.</p> <p>Resolutivos: A favor.</p>	<p>Voto particular</p> <p>Fondo: Estoy de acuerdo con el proyecto porque reivindica la necesidad de proteger información que puede ser utilizada de manera inadecuada en el mercado limitado, pero un mercado de energía eléctrica, cuando la obligación del Estado Mexicano reside, en primer término, en garantizar el suministro de electricidad para la población en general, antes que la competencia económica bajo la cual se argumenta la solicitud de dar a conocer los precios de los contratos. Considero que la rectoría económica de la Nación y la planeación del Estado junto con el control del sistema eléctrico nacional, es un área estratégica protegida por nuestra Constitución y constituye una máxima histórica para nuestro país, reconocida en los artículos 27 y 28 constitucionales, principios que se materializan en la</p>	<p>Apartados de competencia, procedencia, legitimación, oportunidad, agravios y materia de la revisión: Unanimidad de votos.</p> <p>Aspecto preliminar: A favor.</p> <p>Fondo: Mayoría de ocho votos en contra de la propuesta y por confirmación; la señora Ministra Ríos Farjat anuncia voto concurrente; con voto a favor del proyecto de las señoras Ministras Esquivel Mossa, Ortiz Ahif y Batres Guadarrama, con anuncios de voto particular.</p> <p>Resolutivos: Unanimidad de votos.</p>
<p>Aclaración de sentencia Controversia Constitucional 121/2012.</p> <p>Ponente Ministra Ortiz Ahif</p> <p>En lista: 01/02/2024</p> <p>Retirada 12/02/2024</p>	<p>Administrativa</p>	<p>Determinar i) si es procedente la solicitud de aclaración de sentencia en una controversia constitucional y, si es necesario aclarar ii) las coordenadas bajo las cuales se encuentra el punto limítrofe señalado en la sentencia y iii) el nombre del punto geográfico considerado ("Cerro de los Martines" o "Cerro los Martines").</p>	<p>En lista</p>	<p>Retirada</p>	<p>Retirada</p>	<p>Retirada</p>	<p>Retirada</p>
<p>Acción de inconstitucionalidad 138/2022</p> <p>Ponente: Ministra Esquivel Mossa</p> <p>Resuelto: 12 de febrero de 2024</p>	<p>Penal</p>	<p>Invalidez del artículo 2 de la Ley para prevenir la tortura en el Estado de San Luis Potosí.</p>	<p>Declarar la invalidez del artículo 2° de la Ley para Prevenir la Tortura en el Estado de San Luis Potosí, porque define lo que debe entenderse por tortura y para ello, remite a lo dispuesto en el artículo 329 del código penal local. Sin embargo, a partir del once de julio de dos mil quince, las entidades federativas dejaron de tener competencia para definir el tipo penal de tortura y sus sanciones porque, desde entonces, tal atribución corresponde, de manera exclusiva, al Congreso de la Unión en términos del artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución General.</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se declara la invalidez del artículo 2 de la ley para prevenir la tortura en el Estado de San Luis Potosí, reformado mediante el decreto 0377, publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa el nueve de septiembre de dos mil veintidós, la cual surtirá sus efectos retroactivos al diez de septiembre de dos mil veintidós a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al congreso del estado de San Luis Potosí, en los términos precisados en los apartados VI y VII de esta ejecutoria.</p> <p>TERCERO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Competencia: A favor.</p> <p>Precisión de las normas reclamadas: A favor.</p> <p>Oportunidad, legitimación y causas de improcedencia y sobreseimiento: A favor.</p> <p>Fondo: A favor.</p> <p>Efectos: A favor.</p>	<p>Sin comentarios.</p>	<p>Competencia: Unanimidad de votos.</p> <p>Precisión de las normas reclamadas: Mayoría de diez votos a favor del proyecto, con voto en contra de la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, y anuncio de voto particular.</p> <p>Oportunidad, legitimación y causas de improcedencia y sobreseimiento: Unanimidad de votos.</p> <p>Fondo: Unanimidad de votos.</p> <p>Efectos: Mayoría de diez votos a favor de la propuesta. El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena, en contra de consideraciones, con anuncio de voto concurrente y por extender la invalidez al artículo 329. El señor Ministro González Alcántara Carranca, en contra de consideraciones, con anuncio de voto concurrente.</p>
<p>Acción de inconstitucionalidad 169/2022</p> <p>Ponente: Ministro Pérez Dayán</p> <p>Resuelto: 12 de febrero de 2022</p>	<p>Penal</p>	<p>Invalidez de los artículos 2 ter y 3 de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Nuevo León.</p>	<p>a) ¿El artículo 3 de la Ley transgrede los derechos a la seguridad jurídica y a la legalidad al establecer la supletoriedad de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, al Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley General de Víctimas?</p> <p>b) ¿El artículo 2 TER de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Nuevo León regula una cuestión que ya está contenida en la ley general, generando una doble regulación sobre un mismo supuesto jurídico, pues fue emitida por una autoridad que no se encuentra constitucionalmente habilitada para ello?</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se declara la invalidez de los artículos 2 ter y 3 en las porciones normativas que indican "de la ley general para prevenir y sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos", "el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, Ley General de Víctimas" de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Nuevo León, reformada mediante Decreto número 251 publicado en el periódico oficial de esa entidad federativa el 25 de noviembre de 2022, de conformidad con lo establecido en el apartado quinto de esta resolución.</p> <p>TERCERO. La declaración de invalidez decretada surtirá sus efectos retroactivos al 26 de noviembre de 2022 a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al congreso del estado de Nuevo León, de conformidad con su apartado sexto.</p> <p>CUARTO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, oportunidad, legitimación y causas de improcedencia: A favor.</p> <p>Fondo 1: A favor.</p> <p>Fondo 2: A favor.</p> <p>Efectos: A favor.</p> <p>Resolutivos: A favor.</p>	<p>Sin comentarios.</p>	<p>Apartados de competencia, oportunidad, legitimación y causas de improcedencia: Unanimidad de votos.</p> <p>Fondo 1: Unanimidad de votos.</p> <p>Fondo 2: Mayoría de diez votos a favor de la propuesta, con voto en contra del señor Ministro Aguilar Morales.</p> <p>Efectos: Unanimidad de votos.</p> <p>Resolutivos: Unanimidad de votos.</p>

<p>Controversia Constitucional 33/2021</p> <p>Ponente: Ministro Pérez Dayán</p> <p>Resuelto: 13 de febrero de 2024</p>	<p>Administrativa</p>	<p>Invalidez de diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.</p>	<p>¿El Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuenta con competencia para conocer de resoluciones que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado esta no satisfaga al reclamante, así como por las que se den por repetición e impongan la obligación a los servidores públicos de resarcir al Estado el pago correspondiente a la indemnización en los términos de la ley de la materia?</p> <p>¿Al regularse en los artículos 3, fracción IX, 35, fracción III, ambos de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y 24 de la Ley Federal Patrimonial del Estado, la competencia del juicio de nulidad no se contraviene alguna de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni mucho menos la esfera competencial del INAI?</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y e infundada la controversia constitucional.</p> <p>SEGUNDO. Se reconozca la validez de los artículos 3, fracción IX y 35, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; así como el numeral 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.</p> <p>TERCERO. Se reconozca la validez de la sentencia definitiva dictada por la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el juicio de nulidad 5069/19-17-07-5.</p> <p>CUARTO. Publíquese esta sentencia en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas y acto impugnado, existencia del acto y normas impugnadas, oportunidad, legitimación activa y legitimación pasiva: A favor.</p> <p>Causas de improcedencia y sobreseimiento: A favor.</p> <p>Parámetro de regularidad constitucional: A favor.</p> <p>Fondo: A favor.</p> <p>Efectos: A favor.</p>	<p>Sin comentarios.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas y acto impugnado, existencia del acto y normas impugnadas, oportunidad, legitimación activa y legitimación pasiva: Mayoría de diez votos a favor de la propuesta, con voto en contra del señor Ministro Pérez Dayán, por falta de legitimación pasiva.</p> <p>Causas de improcedencia y sobreseimiento: Mayoría de ocho votos a favor de la propuesta del proyecto, con voto en contra de los señores Ministros Aguilar Morales, Pérez Dayán y señora Ministra Piña Hernández.</p> <p>Parámetro de regularidad constitucional: Mayoría de diez votos a favor de la propuesta; la señora Ministra Esquivel Mossa, en contra de los párrafos 95 y 96, el señor Ministro Aguilar Morales, en contra del párrafo 127; la señora Ministra Ríos Farjat, en contra de algunas consideraciones; el señor Ministro Pérez Dayán vota obligado por la mayoría; y la señora Ministra Presidenta Piña Hernández vota en contra.</p>
<p>Controversia Constitucional 225/2022</p> <p>Ponente: Ministro Pérez Dayán</p> <p>Resuelto: 13 de febrero de 2024</p>	<p>Administrativa</p>	<p>Invalidez de diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.</p>	<p>Se sobresee por haberse resuelto la Controversia Constitucional 33/2022</p>	<p>PRIMERO. Se sobresee en la presente controversia constitucional.</p> <p>SEGUNDO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas, actos u omisiones reclamadas: A favor.</p> <p>Causas de improcedencia y sobreseimiento: A favor.</p> <p>Resolutivos: A favor.</p>	<p>Sin comentarios.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas, actos u omisiones reclamadas: Unanimidad de votos.</p> <p>Causas de improcedencia y sobreseimiento: Unanimidad de votos.</p> <p>Resolutivos: Unanimidad de votos.</p>
<p>Acciones de Inconstitucionalidad 106/2021 y su acumulada 108/2021</p> <p>Ponente: Ministro Laynez Potisek</p> <p>Resuelto: 13 de febrero de 2024</p>	<p>Penal</p>	<p>La invalidez del artículo 256 del Código Penal para el Distrito Federal respecto de la dirección o administración de una asociación civil que reciba fondos, recursos o apoyos públicos (delito de corrupción).</p>	<p>Las porciones normativas controvertidas que se analizan en este apartado se destacan en el texto del artículo 256.</p> <p>¿Pueden ser servidores públicos los particulares, administradores y directores de las asociaciones civiles? Incluir en la definición de "servidores públicos" a los particulares, son administradores y directores de las asociaciones civiles cuando estas reciben fondos, recursos o apoyos públicos.</p> <p>El artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no permite extender el concepto de "servidor público" a quienes no desempeñan un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la estructura del Estado y, en segundo lugar, que el legislador local, al crear las porciones normativas combatidas violenta los principios de lesividad y taxatividad. Lo anterior, porque genera una sobreinclusión en los delitos, calificativas y agravantes, establecidas en el Código Penal para todos los servidores públicos.</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada.</p> <p>SEGUNDO. Se declara la invalidez del artículo 256 párrafos primero, en su porción normativa "o bien, que tenga la dirección o administración de una asociación civil que reciba fondos, recursos o apoyos públicos"; y del segundo al sexto del Código Penal para el Distrito Federal, reformado mediante el decreto publicado en la gaceta de dicha entidad federativa, el siete de junio de dos mil veintiuno.</p> <p>TERCERO. Se declara la invalidez por extensión del artículo 256, párrafo séptimo del Código Penal para el Distrito Federal.</p> <p>CUARTO. Las declaraciones de invalidez decretadas, surtirán sus efectos retroactivos al ocho de junio de dos mil veintiuno, a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al congreso de la Ciudad de México.</p> <p>QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación.</p>	<p>Apartados de competencia, oportunidad y causas de improcedencia, legitimación y causas de improcedencia y litis y metodología del estudio: A favor.</p> <p>Estudio 1: En contra del proyecto, con voto particular.</p> <p>Estudio 2: En contra de la desaparición de este delito de corrupción y con voto particular.</p> <p>Estudio 3: En contra.</p> <p>Efectos: A favor.</p>	<p>Estudio 1: Si Yo quisiera manifestar mi voto en contra del proyecto propuesto, pues sustentado la inconstitucionalidad del párrafo primero en su porción normativa: "o bien que tenga la dirección, administración de una asociación civil que reciba fondos, recursos o apoyos públicos" del artículo 256 del Código Penal de la Ciudad de México, sobre dos premisas, a saber: que el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no permite extender el concepto de "servidor público" a quienes no desempeñan un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la estructura del Estado y; en segundo lugar, que el legislador local, al crear las porciones normativas combatidas violenta los principios de lesividad y taxatividad. Lo anterior, porque genera una sobreinclusión en los delitos, calificativas y agravantes, establecidas en el Código Penal para todos los servidores públicos.</p> <p>No comparto estos razonamientos, porque contrario a lo que afirma el proyecto, el artículo 108 constitucional no genera</p>	<p>Apartados de competencia, oportunidad y causas de improcedencia, legitimación y causas de improcedencia, causas de improcedencia y, litis y metodología del estudio: Unanimidad de votos.</p> <p>Estudio 1: Mayoría de diez votos a favor del sentido de la propuesta y, por lo que se refiere a las consideraciones, existe unanimidad de diez votos en cuanto a la violación al artículo 108 constitucional; cuatro votos, por lo que se refiere a la lesividad y, 2 votos por lo que se refiere a taxatividad. Solo hay mayoría en cuanto al 108.</p> <p>Estudio 2: Por lo que se refiere al párrafo segundo, mayoría de ocho votos por la invalidez; en cuanto al párrafo sexto, cuatro votos en el sentido de declarar la invalidez en este considerando; y cuatro que se refieren a abordarlo en la invalidez por extensión.</p> <p>Estudio 3: Mayoría de diez votos a favor de la propuesta de invalidez, con voto en contra de la señora Ministra Baires Guadarrama; por lo que se refiere al párrafo tercero cuarto, en este momento, no se emite voto de invalidez en este apartado.</p>
<p>Acción de Inconstitucionalidad 103/2023</p> <p>Ponente: Ministro González Alcántara Carrancá</p> <p>Resuelto: el 15 de febrero de 2024</p>	<p>Penal</p>	<p>La invalidez del artículo 190 del Código Penal para el Estado de Durango al contravenir el principio de taxatividad y proporcionalidad de las penas.</p>	<p>a) ¿Es fundado el concepto de invalidez planteado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos e invalidar la porción normativa "y cualquier derecho que pudiera tener" del artículo 190 QUIN del Código Penal del Estado de Durango?</p> <p>b) ¿La porción normativa impugnada es contraria al derecho a la legalidad en su vertiente de taxatividad al no especificar cuáles son los derechos a los que hace alusión dentro de ese conglomerado de instituciones familiares o civiles que podrían estar implicados?</p> <p>c) ¿Que prerrogativas previstas en ordenamientos de una naturaleza diversa, también estarían en juego? ¿La norma tampoco contempla un rango de tiempo determinado en el que el sujeto activo del delito de explotación laboral podría ser privado de esos derechos, pues no existe un plazo mínimo y tampoco uno máximo para individualizar la sanción?</p> <p>d) ¿El artículo 190 QUIN no genera un grado de precisión razonable para la imposición de pena, por lo que obligaría a las autoridades jurisdiccionales a determinar por analogía o a través de algún otro método interpretativo prohibido en materia penal?</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se declara la invalidez del artículo 190 Quin, en la porción normativa "y cualquier derecho que pudiese tener", del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango, adicionado mediante Decreto Número 332, publicado el veintitrés de marzo de dos mil veintidós; en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa, lo cual surtirá sus efectos retroactivos al día en que entró en vigor, con motivo de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Durango, conforme a lo expuesto en los apartados VI y VII de esta decisión.</p> <p>TERCERO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Durango, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartado de competencia, oportunidad, legitimación y causas de improcedencia: A favor.</p> <p>Estudio de fondo: A favor.</p> <p>Efectos: A favor.</p> <p>Resolutivos: A favor.</p>	<p>Sin comentarios.</p>	<p>Apartado de competencia, oportunidad, legitimación y causas de improcedencia: Unanimidad de votos.</p> <p>Estudio: Unanimidad de votos a favor del sentido de la propuesta, con anuncio de voto concurrente de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, del señor Ministro Laynez Potisek, la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, quien (incluso) vota en contra del párrafo 46.</p> <p>Efectos: Unanimidad de votos.</p> <p>Resolutivos: Unanimidad de votos.</p>
<p>Amparo Directo 27/2015</p> <p>Ponente: Ministro Gutiérrez Ortiz Mena</p> <p>En lista: 15/02/2024</p>	<p>En lista</p>	<p>En lista</p>	<p>En lista</p>	<p>En lista</p>	<p>En lista</p>	<p>En lista</p>	<p>En lista</p>
<p>Acción de Inconstitucionalidad 85/2019</p> <p>Ponente: Ministro Gutiérrez Ortiz Mena</p> <p>En lista: 15/02/2024</p>	<p>En lista</p>	<p>En lista</p>	<p>En lista</p>	<p>En lista</p>	<p>En lista</p>	<p>En lista</p>	<p>En lista</p>

<p>Acciones de inconstitucionalidad 182/2023 y sus acumuladas 184/2023 y 185/2023</p> <p>Ponente: Ministro Aguilar Morales</p> <p>Resuelta: 19/02/2024</p>	<p>Electoral</p>	<p>Invalidez del Decreto por el que se reforman disposiciones de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí sobre consulta previa de pueblos y comunidades indígenas.</p>	<p>Tema 1. Consideraciones metodológicas y el segundo es consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas. Tema 2. Consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas. Tema 3. Parlamento abierto como mecanismo que tiene como finalidad tutelar el acceso a la información, la participación ciudadana y la rendición de cuentas de los gobernados. Tema 4. Conceptos de invalidez hechos valer en torno a que el Congreso omitió realizar un estudio sobre el impacto presupuestal que tendría la reforma contenida en el decreto impugnado. Tema 5. Conceptos de invalidez hechos valer en torno a que la modificación del comienzo del proceso electoral tuvo efectos perjudiciales en la certeza electoral.</p>	<p>PRIMERO. Es procedente, pero infundada la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se reconoce la validez del Decreto 0797, por el que se reforman los artículos 6°, fracción XLII, 51, 157, párrafo primero, 255, párrafo primero, 257, párrafo primero y 321 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, publicado el veintinueve de julio de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa.</p> <p>TERCERO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartado de competencia, oportunidad, legitimación y causas de improcedencia y sobreseimiento: A favor.</p> <p>Estudio de fondo 1: A favor.</p> <p>Estudio de fondo 2: A favor.</p> <p>Estudio de fondo 3: A favor.</p> <p>Estudio de fondo 4: A favor.</p> <p>Estudio de fondo 5: A favor.</p> <p>Resolutivos: A favor.</p> <p>Sin comentarios.</p>	<p>Apartado de competencia, oportunidad, legitimación y causas de improcedencia y sobreseimiento: Unanimidad de votos.</p> <p>Estudio de fondo 1: Unanimidad de votos.</p> <p>Estudio de fondo 2: Unanimidad de votos.</p> <p>Estudio de fondo 3: Unanimidad de votos.</p> <p>Estudio de fondo 4: Unanimidad de votos.</p> <p>Estudio de fondo 5: Unanimidad de votos.</p> <p>Resolutivos: Unanimidad de votos.</p>
<p>Acción de inconstitucionalidad 116/2022</p> <p>Ponente: Ministro Pardo Rebolledo</p> <p>Resuelta: 19/02/2024</p>	<p>Administrativa</p>	<p>Invalidez de disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas respecto a adaptar legislación en materia de anticorrupción.</p>	<p>(Las legislaciones de las entidades deben adaptar en sus legislaciones el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, derivado de la reforma constitucional de mayo de 2015? Las entidades federativas deben ajustarse a lo previsto en las Leyes Generales del Sistema Nacional Anticorrupción. La porción normativa impugnada no se establece qué conductas son graves?; en segundo lugar, ¿qué conducta no son graves?; en tercer lugar, el procedimiento para finarlas; en cuarto lugar, ¿qué autoridad sancionará y resolverá el procedimiento en razón de la gravedad?; y en quinto lugar, las sanciones aplicables.</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se declara la invalidez de los artículos 115 y 117 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, expedida mediante Decreto número 115, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas el trece de julio de dos mil veintidós, de acuerdo con lo establecido en el apartado VI de esta decisión.</p> <p>TERCERO. La declaratoria de invalidez decretada en este fallo surtirá efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Zacatecas y conforme a los efectos vinculatorios hacia el futuro a ese órgano legislativo, en los términos del apartado VII de esta determinación.</p> <p>CUARTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartado de competencia, oportunidad, legitimación y causas de improcedencia y sobreseimiento: A favor.</p> <p>Estudio de fondo : A favor.</p> <p>Efectos: En contra.</p> <p>Resolutivos: A favor.</p>	<p>Apartado de competencia, oportunidad, legitimación y causas de improcedencia y sobreseimiento: Unanimidad de votos.</p> <p>Estudio de fondo: por lo que se refiere a la propuesta de invalidez del artículo 115, existe unanimidad de once votos, con voto en contra de consideraciones de la señora Ministra Piña Hernández; el señor Ministro González Alcántara Carranza reserva su derecho a formular voto concurrente y voto en contra del señor Ministro Laynez Potisek de los párrafos 27 a 53; y en cuanto a la propuesta de invalidez de la totalidad del artículo 117 mayor de diez votos, la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, únicamente vota por la invalidez de la porción normativa "así como las sanciones".</p> <p>Elector: Mayoría de seis votos en contra de los efectos retroactivos.</p>
<p>Controversia Constitucional 210/2023</p> <p>Ponente: Ministro Pardo Rebolledo</p> <p>Resuelta: 19/02/2024</p>	<p>Civil</p>	<p>Decreto por medio del cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.</p>	<p>Deber negativo que tienen los entes públicos en materia de recepción de propuestas o adjudicación de contratos o pedidos, cuestión que no es directamente afín al régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, de estar referidos más bien a las instituciones gubernamentales en abstracto.</p>	<p>PRIMERO. Es procedente pero infundada la presente controversia constitucional.</p> <p>SEGUNDO. Se reconoce la validez del artículo 86, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, en la porción impugnada que señala "salvo que exista autorización previa y específica de la Función Pública o del Órgano Interno de Control que corresponda. El Reglamento definirá el procedimiento para otorgar esta autorización", reformado mediante Decreto "LXVII/RFLEY/0484/2022 I.P.D.", publicado el cuatro de enero de dos mil veintitrés, en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa.</p> <p>TERCERO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartados de antecedentes, competencia, precisión de la norma reclamada, oportunidad, legitimación activa y legitimación pasiva: A favor.</p> <p>Causas de improcedencia: A favor.</p> <p>Fondo: En contra.</p> <p>Resolutivos: A favor.</p>	<p>Apartados de antecedentes, competencia, precisión de la norma reclamada, oportunidad, legitimación activa y legitimación pasiva: Mayoría de nueve votos a favor de la propuesta; con voto en contra del señor Ministro Pérez Dayán y la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, con anuncio de voto particular.</p> <p>Causas de improcedencia: Mayoría de siete votos a favor de la propuesta, con voto en contra del señor Ministro González Alcántara Carranza, quien anuncia voto particular, así como el señor Ministro Aguilar Morales, el señor Ministro Pérez Dayán y la señora Ministra Presidenta Piña Hernández.</p> <p>Fondo: Mayoría de seis votos a favor de la propuesta de validez, el señor Ministro Piña Hernández reserva su derecho a formular voto concurrente y voto en contra de los efectos retroactivos.</p>
<p>Acción de inconstitucionalidad 198/2023 y su acumulada 200/2023</p> <p>Ponente: Ministro Laynez Potisek</p> <p>Resuelta: 20/02/2024</p>	<p>Electoral</p>	<p>Invalidez de diversas disposiciones de leyes electorales, partidos políticos, del tribunal de justicia electoral, asistencia social y participación ciudadana de Baja California (personas con discapacidad).</p>	<p>Tema 1. Violación a la vida electoral Tema 2. Violaciones al procedimiento legislativo Tema 3. Violación al derecho a la consulta previa a las personas con discapacidad Tema 4. Violación a las atribuciones de las autoridades electorales locales Tema 5. Obligatoriedad de los candidatos de participar en los debates organizados por el Instituto Electoral del Estado de Baja California Tema 6. Declarar la invalidez del artículo 139 de la Ley Electoral del Estado (personas con discapacidad).</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada.</p> <p>SEGUNDO. Se desestima en la acción de inconstitucionalidad 200/2023 respecto de los artículos 6, párrafo cuarto, en su porción normativa "sin la intervención indebida de ninguna autoridad electoral"; y 21, fracción VI, en su porción normativa "sin la intervención indebida de ninguna autoridad electoral o de cualquier otra índole", de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California.</p> <p>TERCERO. Se reconoce la validez del procedimiento legislativo que culminó con el Decreto NO. 288 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Electoral, la Ley de Partidos Políticos, la Ley del Tribunal de Justicia Electoral, la Ley de Asistencia Social y la Ley de Participación Ciudadana, todas del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el dos de septiembre de dos mil veintitrés.</p> <p>CUARTO. Se reconoce la validez de los artículos 7, párrafo segundo, 168, 327, fracciones III y VI, y 328, párrafo segundo, fracciones I, II, III y IV, de la Ley Electoral del Estado de Baja California y 6, fracciones II, X y XI, 7 (con la salvedad precisada en el resolutive quinto), 10, fracciones III, IV, VIII, X, XII, XIII, XIV, fracciones IX, XIII, XV y XVII, 22, BIS y 22 TER, de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, publicadas en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el dos de septiembre de dos mil veintitrés.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad, legitimación: A favor.</p> <p>Causas de improcedencia y sobreseimiento: A favor.</p> <p>Fondo 1: A favor.</p> <p>Fondo 2: A favor.</p> <p>Fondo 3: A favor con precisiones.</p> <p>Fondo 3.1: A favor.</p>	<p>Apartados de competencia, oportunidad y legitimación: Unanimidad de votos.</p> <p>Causas de improcedencia y sobreseimiento: Unanimidad de votos.</p> <p>Fondo 1: Unanimidad de votos.</p> <p>Fondo 2: Unanimidad de votos.</p> <p>Fondo 3: Unanimidad de votos a favor de la propuesta; la señora Ministra Btrres Guadarrama, con precisiones; la señora Ministra Ríos Farjat, con voto aclaratorio.</p> <p>Fondo 3.1: Unanimidad de votos.</p>
<p>Controversia Constitucional 211/2023</p> <p>Ponente: Ministro Laynez Potisek</p> <p>Retirada 20/02/2024</p>	<p>Administrativa</p>	<p>Determinar la probable responsabilidad administrativa en que incurrió el Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo, así como la procedencia de aplicar de medidas cautelares (suspensión temporal de su cargo por noventa días), al haber autorizado el levantamiento del estado de suspensión de actividades de obra y retro de sellos respecto a un inmueble.</p>	<p>Retirada</p>	<p>Retirada</p>	<p>Retirada</p>	<p>Retirada</p>
<p>Acción de inconstitucionalidad 163/2022</p> <p>Ponente: Ministra Equivel Mossa</p> <p>Resuelta: 26/02/2024</p>	<p>Legislativa</p>	<p>Invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí (violencia vicaria)</p>	<p>Definir si la definición de "violencia vicaria" en la Ley del Estado produce efectos discriminatorios hacia los hombres.</p>	<p>PRIMERO. Es parcialmente procedente pero infundada la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se sobrese en la presente acción de inconstitucionalidad respecto de los artículos 46, fracción VII, y 52, fracción II, inciso b), de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el estado de San Luis Potosí, reformados mediante el decreto 0420, publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa, el ocho de noviembre de dos mil veintidós.</p> <p>TERCERO. Se reconoce la validez de los artículos 3, fracción III bis, 4, fracción XVI bis, 13, fracción VII, 46, fracción VIII, 52 fracción II, inciso c), bis y 59, párrafo segundo, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, reformado y adicionados, respectivamente, mediante el Decreto 0420 publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa, el ocho de noviembre de dos mil veintidós.</p> <p>CUARTO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartado de competencia, oportunidad y legitimación: A favor.</p> <p>Improcedencia y sobreseimiento: A favor.</p> <p>Precisión de las normas reclamadas: A favor.</p> <p>Estudio de fondo : A favor del proyecto con las modificaciones propuestas por la ponente y me aparto de la metodología.</p>	<p>Apartado de competencia, oportunidad y legitimación: Unanimidad de votos.</p> <p>Improcedencia y sobreseimiento: Mayoría de siete votos a favor de la propuesta.</p> <p>Precisión de las normas reclamadas: mayoría de nueve votos a favor de la propuesta; precisando que votan vencidos por la mayoría del tema anterior, la señora Ministra Equivel Mossa y el señor Ministro Pardo Rebolledo; con voto en contra del señor Ministro Aguilar Morales y la Ministra Presidenta Piña Hernández.</p> <p>Estudio de fondo: unanimidad de once votos a favor del sentido de la propuesta; el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena, en contra de metodología, con anuncio de voto concurrente; el señor Ministro González Alcántara Carranza, en contra de metodología, con anuncio de voto concurrente; la señora Ministra Ortiz AHF, en contra de la metodología; el señor Ministro Aguilar Morales, con anuncio de voto particular.</p>
<p>Acción de inconstitucionalidad 129/2022</p> <p>Ponente: Ministra Ríos Farjat</p> <p>Resuelta: 29/02/2024</p>	<p>Penal</p>	<p>Analizar la constitucionalidad de la totalidad de la Ley para Prevenir y Erradicar el Femicidio del Estado de Michoacán de Ocampo (femicidio).</p>	<p>En los términos de los conceptos de invalidez expuestos, este Tribunal Pieno debe resolver si la emisión de la Ley impugnada:</p> <p>a) Respetó el procedimiento legislativo. b) Vulneró el derecho a la consulta previa de las mujeres. c) Invadió la competencia federal en materia procesal penal; d) transgredió el principio de taxatividad. e) Invadió la competencia de la autoridad judicial federal al facultar a la Fiscalía Especializada para solicitar información a empresas telefónicas o de comunicación. f) Incurrió en una omisión legislativa por no contemplar el transfeminicidio.</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se reconoce la validez de los artículos 5, fracciones III, IV, V y VI, 7, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 de la Ley para Prevenir y Erradicar el Femicidio del Estado de Michoacán de Ocampo, contenidas en el decreto 197, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el treinta de agosto de dos mil veintidós, en términos del apartado VI de esta ejecutoria.</p> <p>TERCERO. Se declara la invalidez de los artículos 12, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la Ley para Prevenir y Erradicar el Femicidio del Estado de Michoacán de Ocampo, contenidas en el Decreto 197, publicado en el periódico oficial de gobierno de dicho estado el treinta de agosto de dos mil veintidós, en términos del apartado VI de esta ejecutoria.</p> <p>CUARTO. La declaratoria de invalidez de los artículos 12, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo surtirá efectos retroactivos a la fecha en que entró en vigor esa norma, por lo que corresponde a los operadores jurídicos competentes decidir y resolver en cada caso concreto sujeto a su conocimiento de acuerdo con las disposiciones legales aplicables del código nacional de procedimientos penales, en términos del apartado VI de esta ejecutoria.</p> <p>QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el periódico oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartado de competencia y precisión de las normas reclamadas: A favor.</p> <p>Estudio de fondo A y B: Con el sentido del proyecto, por distintas consideraciones.</p> <p>Estudio de fondo C: Con el proyecto original y, nada más, en cuanto a consideraciones.</p> <p>Estudio de fondo D, E y F: Con el proyecto, con las consideraciones aceptadas y con la modificación del artículo 26 para su invalidez.</p> <p>Efectos: A favor.</p>	<p>Apartado de competencia, oportunidad y legitimación: Unanimidad de votos.</p> <p>Improcedencia y sobreseimiento: Mayoría de siete votos a favor de la propuesta.</p> <p>Precisión de las normas reclamadas: mayoría de nueve votos a favor de la propuesta; precisando que votan vencidos por la mayoría del tema anterior, la señora Ministra Equivel Mossa y el señor Ministro Pardo Rebolledo; con voto en contra del señor Ministro Aguilar Morales y la Ministra Presidenta Piña Hernández.</p> <p>Estudio de fondo: unanimidad de once votos a favor del sentido de la propuesta; el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena, en contra de metodología, con anuncio de voto concurrente; el señor Ministro González Alcántara Carranza, en contra de metodología, con anuncio de voto concurrente; la señora Ministra Ortiz AHF, en contra de la metodología; el señor Ministro Aguilar Morales, con anuncio de voto particular.</p> <p>Apartado de competencia y precisión de las normas reclamadas: Unanimidad de votos.</p> <p>Estudio de fondo A y B: Unanimidad de votos a favor del sentido de la propuesta; con voto expreso a favor de la propuesta modificada, de las consideraciones de la propuesta modificada por mayoría de diez votos; la señora Ministra Btrres Guadarrama, en cuanto a la modificación no se pronuncia; y con anuncio de voto concurrente del señor Ministro González Alcántara Carranza, quien vota en contra de algunas consideraciones; la señora Ministra Equivel Mossa, en contra de algunas consideraciones; la señora Ministra Ortiz AHF, en contra algunas consideraciones; la señora Ministra Btrres Guadarrama, por diversas consideraciones; y la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, con anuncio de voto concurrente y en contra de algunas consideraciones.</p> <p>Estudio de fondo C: por lo que se refiere a las propuestas de reconocimiento de validez, existe unanimidad de once votos en cuanto a los artículos 5°, en sus fracciones III, IV, V y VI, artículo 7°, primera y segunda partes, artículo 15, unanimidad de once votos por válidos. En cuanto a la validez respecto del artículo 14, mayoría de diez votos, con voto en contra del señor Ministro González Alcántara</p>

<p>Acción de Inconstitucionalidad 85/2023</p> <p>Ponente: Ministra Ríos Farjat</p> <p>Resuelta: 04/03/2024</p>	<p>Legislativa y Penal</p> <p>La invalidez de diversas disposiciones del Código Penal y de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, ambos del mencionado estado (violencia vicaria).</p>	<p>Se tiene como normas impugnadas los artículos 178 Cuater del Código Penal del Estado de Michoacán y 9, fracción IX Bis, de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo.</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se reconoce la validez de los artículos 178 Cuater del Código Penal del estado de Michoacán salvo por lo que ve a la porción normativa que indica "así como pérdida de los derechos que tengan respecto de las víctimas directas e indirectas, incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad de hijas e hijos"; y, fracción IX Bis, de la ley por una vida libre de violencia para las mujeres en el estado de Michoacán de Ocampo.</p> <p>TERCERO. Se declara la invalidez del artículo 178 Cuater, párrafo tercero, del código penal del estado de Michoacán en la porción normativa que indica "así como pérdida de los derechos que tengan respecto de las víctimas directas e indirectas, incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad de hijas e hijos", adicionado mediante decreto número 345, publicado en el periódico oficial de dicha entidad el seis de marzo de dos mil veintitrés.</p> <p>CUARTO. La declaratoria de invalidez decretada surtirá efectos retroactivamente a la entrada en vigor del decreto impugnado, una vez que sean notificados los puntos resolutive de esta sentencia al poder legislativo del estado de Michoacán de Ocampo, quinto, publíquese esta resolución en el diario oficial de la federación, en el periódico oficial del estado de Michoacán, así como en el semanario judicial de la federación y su gaceta.</p> <p>QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Tratamiento de la competencia, la precisión de las normas reclamadas, la oportunidad, la legitimación y el estudio de las causas de improcedencia y sobreseimiento: A favor.</p> <p>Estudio de fondo A y B: Con el proyecto modificado.</p> <p>Estudio de fondo C: A favor.</p> <p>Estudio de fondo D: A favor.</p> <p>Estudio de fondo E: A favor, con voto concurrente.</p> <p>Estudio de fondo G y H: A favor, con voto concurrente.</p> <p>Resolutivos: A favor.</p>	<p>Tratamiento de la competencia, la precisión de las normas reclamadas, la oportunidad, la legitimación y el estudio de las causas de improcedencia y sobreseimiento: Unanimidad de votos.</p> <p>Estudio de fondo A y B: Unanimidad de diez votos a favor del sentido de la propuesta, el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena, se reserva su derecho a formular voto concurrente; anuncio de voto concurrente del señor Ministro González Alcántara Carrancá, la señora Ministra Esquivel Mossa, la señora Ministra Ortiz Ahn; el señor Ministro Pardo Rebollo, en contra de los párrafos 82 a 91, con reserva de voto concurrente; el señor Ministro Aguilar Morales, en contra de los párrafos 82, 85 y 88.</p> <p>Estudio de fondo C: Unanimidad de votos a favor de la propuesta; el señor Ministro Aguilar Morales se aparta de los párrafos 163 y 164.</p> <p>Estudio de fondo D: Unanimidad de votos.</p> <p>Estudio de fondo E: Unanimidad de votos a favor del sentido de la propuesta; el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena, con precisiones; el señor Ministro González Alcántara Carrancá, en contra de la metodología, con anuncio de voto concurrente; la señora Ministra Esquivel Mossa, con anuncio de voto concurrente; la señora Ministra Ortiz Ahn, con consideraciones diversas; el señor Ministro Pardo Rebollo, con consideraciones diversas; la señora Ministra Baires Guadarrama, con anuncio de voto concurrente.</p> <p>Competencia y legitimación: Unanimidad de votos.</p> <p>Improcedencia: Unanimidad de votos.</p> <p>Estudio de fondo: Mayoría de nueve votos a favor de la propuesta; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto aclaratorio; la señora Ministra Baires Guadarrama, voto en contra.</p> <p>Efectos: Mayoría de nueve votos a favor de la propuesta del proyecto.</p> <p>Resolutivos: Unanimidad de votos.</p>
<p>Acción de Inconstitucionalidad 90/2016</p> <p>Ponente: Ministro Aguilar Morales</p> <p>Resuelta: 04/03/2024</p>	<p>Penal</p> <p>La invalidez del artículo 284 bis, tercer párrafo del Código Penal del Estado de Puebla (Unidad de Medida y Actualización)</p>	<p>Invalidez del art. 284 Bis del Código Penal del Estado de Puebla (desindexación del salario mínimo)</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se declara la invalidez del artículo 284 bis, párrafo tercero en su porción normativa "y multa de 50 a 150 días de salario" del Código Penal del de Puebla, reformado mediante el decreto publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa el veinte de septiembre de dos mil dieciséis, la cual surtirá sus efectos retroactivos al veintuno de septiembre de dos mil dieciséis a partir de la notificación de estos puntos resolutive al congreso del estado de Puebla, en los términos precisados en los apartados quinto y sexto de esta ejecutoria.</p> <p>TERCERO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el periódico oficial del Estado de Puebla, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Competencia y legitimación: A favor.</p> <p>Improcedencia: A favor.</p> <p>Estudio de fondo: En contra.</p> <p>Efectos: En contra.</p> <p>Resolutivos: A favor.</p>	<p>Competencia y legitimación: Unanimidad de votos.</p> <p>Improcedencia: Unanimidad de votos.</p> <p>Estudio de fondo: Mayoría de nueve votos a favor de la propuesta; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto aclaratorio; la señora Ministra Baires Guadarrama, voto en contra.</p> <p>Efectos: Mayoría de nueve votos a favor de la propuesta del proyecto.</p> <p>Resolutivos: Unanimidad de votos.</p>
<p>Acción de Inconstitucionalidad 115/2023</p> <p>Ponente: Ministro Pérez Dayán</p> <p>Resuelta: 04/03/2024</p>	<p>Administrativa</p> <p>Se tiene por normas impugnadas los artículos 119, fracción VI, 123, fracción III, en la porción normativa "y no haber sido sentenciado por delito intencional que amerite pena corporal de más de dos años de prisión", de la Ley de los Municipios, así como el numeral 8, fracción IV, en la porción normativa "y no haber sido sentenciado por delito doloso que amerite pena privativa de libertad de más de dos años de prisión", de la Ley que crea la Procuraduría de Protección al Ambiente, ambas del Estado de Quintana Roo.</p>	<p>Reforma a la Ley de los Municipios y a la Ley que crea la Procuraduría de Protección al Ambiente, ambas del Estado de Quintana Roo (no haber tenido sentencia penal para ocupar cargos).</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se declara la invalidez de los artículos 119, fracción VI y 123, fracción III, en su porción normativa: "y no haber sido sentenciado por delito intencional que amerite pena corporal de más de dos años de prisión", de la Ley de los municipios del Estado de Quintana Roo, y 8º, fracción IV, en su porción normativa: "no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena privativa de libertad de más de dos años de prisión", y de la ley que crea la procuraduría de protección al ambiente del estado de quintana roo, reformados mediante el Decreto número 078, publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa el siete de junio de dos mil veintitrés, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutive al congreso de dicho estado.</p> <p>TERCERO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el periódico oficial del estado de Quintana Roo, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad, legitimación, causas de improcedencia y sobreseimiento: A favor.</p> <p>Estudio de fondo: En contra.</p> <p>Efectos: A favor.</p> <p>Resolutivos: A favor.</p>	<p>Competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad, legitimación, causas de improcedencia y sobreseimiento: Unanimidad de votos.</p> <p>Estudio de fondo: Mayoría de nueve votos a favor de la propuesta del proyecto, con voto en contra de la señora Ministra Baires Guadarrama, quien anuncia voto particular.</p> <p>Efectos: Unanimidad de votos.</p> <p>Resolutivos: Unanimidad de votos.</p>
<p>Acción de Inconstitucionalidad 97/2023</p> <p>Ponente: Ministro Pardo Rebollo</p> <p>Resuelta: 05/03/2024</p>	<p>Administrativa</p> <p>La invalidez del artículo 10, fracciones semanario judicial de la Federación y VII de la Ley del Fondo Soberano Nuevo Nayarit.</p>	<p>Reforma a la Ley del Fondo Soberano Nuevo Nayarit (no haber tenido condena penal para ocupar cargos).</p> <p>Se tiene por impugnada la fracción IV del artículo 10 en cuestión, en la porción que indica "delito doloso que le imponga pena de prisión. Tratándose de", y; la fracción VII, en su totalidad, por cuanto hace a la hipótesis normativa que señala "No haber sido sancionado con motivo de una investigación de carácter Administrativo, por infracciones graves, o penal, por violaciones a las leyes nacionales o extranjeras, que hayan tenido como conclusión cualquier tipo de resolución o acuerdo que implique expresamente la aceptación de la culpa o responsabilidad, o bien, sentencia condenatoria firme".</p>	<p>PRIMERO. Se sobrees en la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartados de antecedentes, competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad y legitimación: A favor.</p> <p>Sobreseimiento: A favor.</p> <p>Resolutivos: A favor.</p>	<p>Apartados de antecedentes, competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad y legitimación: Unanimidad de votos.</p> <p>Sobreseimiento: Unanimidad de votos.</p> <p>Resolutivos: Unanimidad de votos.</p>
<p>Acción de Inconstitucionalidad 205/2023</p> <p>Ponente: Ministro Pardo Rebollo</p> <p>Resuelta: 05/03/2024</p>	<p>Administrativa</p> <p>La invalidez de diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca.</p>	<p>Se demanda invalidez de requisitos para ocupar cargos en el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca tales como "no contar con antecedentes penales."</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se declara la invalidez de los artículos 59, párrafo primero, en su porción normativa "contar con antecedentes penales ni", 68, fracción IV, 71, fracción IV, 76, fracción III, en sus porciones normativas "delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión o cualquiera que haya sido la pena cuando se trate de" y "u otro que afecte la buena fama en el concepto público", así como 80, en su porción normativa "contar con antecedentes penales ni", de la ley orgánica del tribunal de justicia administrativa y combate a la corrupción del estado de Oaxaca, expedida mediante el Decreto número 1540, publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa el dieciséis de septiembre de dos mil veintitrés, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutive al congreso de dicho estado.</p> <p>TERCERO. Publíquese esta resolución en el diario oficial de la federación, en el periódico oficial del Estado de Oaxaca, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad y legitimación: A favor.</p> <p>Improcedencia y sobreseimiento: A favor.</p> <p>Fondo 1: En contra.</p> <p>Fondo 2: A favor.</p> <p>Fondo 3: En contra.</p>	<p>Fondo 1: Sobre este punto V.1. de parámetro de regularidad, en el estudio de fondo, estaré votando en contra y con un voto particular. Creo que el proyecto se basa en precedentes de diversas acciones de inconstitucionalidad en cuyo resultado no participo, de manera que lo allí decidido no condiciona el voto que sostendré sobre este punto. Esos precedentes sostienen, con base en el artículo 1º de la Constitución Federal, que una modalidad del derecho a la igualdad es la prohibición de discriminar. En el caso concreto, los requisitos de un cargo deben estar directamente relacionados con el perfil del cargo. Más allá del proyecto en el apartado que analiza el proceso legislativo por tratarse particularmente de una controversia constitucional. En la propuesta se sostiene que existe una obligación legal de analizar la dictaminación de las iniciativas en coordinación con los ayuntamientos y la administración pública estatal. La controversia constitucional (considero) no es el medio idóneo para analizar el procedimiento para concretar una norma, pues su finalidad es estudiar la constitucionalidad de una norma vigente, por lo que el estudio de la forma, método o procedimiento de una norma que todavía no es vigente resulta innecesario. En relación con el estudio sobre el proceso de mejora regulatoria, concuerdo con que los poderes legislativos de los Estados solo se consideran sujetos obligados respecto del Catálogo Nacional de Regulaciones, con la obligación de contar con una instancia que coordine su intervención en el catálogo. En el análisis del conjunto que se realiza a través de la consulta, intervención de los ayuntamientos y de la administración pública, en el proceso legislativo y la coordinación para realizar una dictaminación de las iniciativas,</p> <p>Apartados de competencia, oportunidad, legitimación activa y legitimación pasiva: A favor.</p> <p>Fijación de la litis: A favor.</p> <p>Improcedencia y sobreseimiento: Con el proyecto, incluyendo el sobreseimiento del 14, numeral 1.</p> <p>Estudio de fondo: En contra, con voto particular.</p> <p>Efectos: En contra de esta figura de revisencia de la ley.</p> <p>Resolutivos: A favor.</p>
<p>Controversia Constitucional 244/2023</p> <p>Ponente: Ministro Pardo Rebollo</p> <p>Resuelta: 05/03/2024</p>	<p>Legislativa y Administrativa</p> <p>Invalidez del Decreto 195, mediante el cual se expidió la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima por vicios en el proceso legislativo.</p>	<p>Se analiza la invalidez del Decreto 195 en su totalidad, que el municipio actor al considerar inconstitucional porque el proceso de formación de la norma impugnada adolece, primero, de falta de consulta a los municipios como competentes en materia de asentamientos humanos, segundo lugar, ausencia de alguna opinión técnica jurídica de alguna autoridad concededora de la materia de asentamientos humanos, y en tercer lugar, por la ausencia de análisis de impacto regulatorio.</p>	<p>MODIFICACIÓN DE RESOLUTIVOS EN ENGRESO.</p> <p>PRIMERO. Es parcialmente procedente y fundada la presente controversia constitucional.</p> <p>SEGUNDO. Se sobrees en la controversia constitucional con relación a los artículos 9, numeral 1, fracción CV, 45, numeral 1; 47, numeral 1; 167, numeral 1; 226, numeral 3; 227, numeral 1, y 228, numeral 2; puesto que han cesado sus efectos en virtud de la reforma a la ley impugnada del veintidós de julio de dos mil veintitrés.</p> <p>TERCERO. Se declara la invalidez del Decreto 195, por virtud del cual se expidió la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", en la edición ordinaria número 86, suplemento número 8, del sábado treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés. La invalidez decretada surtirá efectos a partir de la notificación de los puntos resolutive de esta ejecutoria al Congreso del Estado.</p> <p>CUARTO. Se determina la revisencia del contenido total de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, publicada en el Suplemento del Periódico Oficial "El Estado de Colima", el siete de mayo de mil novecientos noventa y cuatro.</p> <p>*La declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos únicamente entre las partes, dando lugar a la revisencia de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el siete de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, en lo que no se oponga a lo dispuesto en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.*</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad y legitimación: A favor.</p> <p>Improcedencia y sobreseimiento: Con el proyecto, incluyendo el sobreseimiento del 14, numeral 1.</p> <p>Estudio de fondo: En contra, con voto particular.</p> <p>Efectos: En contra de esta figura de revisencia de la ley.</p> <p>Resolutivos: A favor.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad y legitimación: Unanimidad de votos.</p> <p>Improcedencia y sobreseimiento: Unanimidad de votos.</p> <p>Fondo 1: Mayoría de ocho votos a favor de la propuesta original; dentro de esta mayoría, el señor Ministro González Alcántara Carrancá manifiesta no tener inconveniente en que se agregara.</p> <p>Fondo 2: Unanimidad de votos.</p> <p>Fondo 3: Mayoría de ocho votos a favor de la propuesta, la señora Ministra Ortiz Ahn, con voto particular.</p> <p>Fijación de la litis: Unanimidad de votos.</p> <p>Improcedencia y sobreseimiento: En términos generales unanimidad de votos a favor de la propuesta con las siguientes precisiones: por lo que se refiere al artículo 14, numeral 1, se expresaron cuatro votos por el sobreseimiento, la señora Ministra Esquivel Mossa, el señor Ministro Pardo Rebollo, la señora Ministra Baires Guadarrama y la señora Ministra Presidenta; y en cuanto al décimo transitorio, el señor Ministro Pardo Rebollo y la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, quedó en sus términos aprobado.</p> <p>Estudio de fondo: mayoría de siete votos a favor de la propuesta; con voto en contra del señor Ministro González Alcántara Carrancá, que anuncia voto particular; las señoras Ministras Esquivel Mossa, Ortiz Ahn y Baires Guadarrama, quien anuncia voto particular.</p> <p>Efectos: Por lo que se refiere a la fecha de surtimiento de efectos, con motivo de la notificación de los resolutive, existe una mayoría de nueve votos, con voto en</p>

<p>Controversia Constitucional 95/2021</p> <p>Ponente: Ministra Ríos Farjat</p> <p>Resuelto: 14/03/2024</p>	<p>Legislativa y Administrativa</p>	<p>Promovida por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, demandando la invalidez de los Decretos números LXV-537, LXV-538 y LXV-539, publicados en el Periódico Oficial de esa entidad de 24 de junio de 2021</p>	<p>¿Debe sobreseerse en la presente controversia, toda vez que la parte actora no cuenta con interés legítimo para cuestionar la regularidad constitucional de ninguno de los Decretos impugnados, pues no plantea, ni siquiera de manera indirecta, una afectación a su ámbito competencial, sino únicamente violaciones al procedimiento legislativo?</p>	<p>PRIMERO. Es parcialmente procedente y fundada la presente controversia constitucional.</p> <p>SEGUNDO. Se sobrese en la controversia constitucional respecto de los decretos LXV-537 y LXV-539, publicados en el periódico oficial del gobierno del estado de tamaulipas el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno.</p> <p>TERCERO. Se reconoce la validez del decreto LXV-538, publicado en el periódico oficial del gobierno del estado de tamaulipas el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno.</p> <p>CUARTO. Publíquese esta sentencia en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas impugnadas, oportunidad, legitimación activa y legitimación pasiva: A favor.</p> <p>Causas de improcedencia y sobreseimiento: A favor.</p> <p>Estudio de fondo: En contra del proyecto, con voto particular.</p> <p>Resolutivos: A favor.</p>	<p>ESTUDIO DE FONDO: Tamaulipas, Ministra. Yo quisiera simplemente comentar que obviamente reiteraría mi posición en contra de este estudio de fondo. Simplemente, quisiera aclarar, en primer lugar, lo que he sostenido respecto de la discusión de procedimiento o proceso legislativo, respecto de este tema es que no se ha hecho en otros temas. Y, respecto del fondo, pues, obviamente que la intervención adjudicada a los Congresos locales, en el párrafo quinto del artículo 111 de nuestra Carta Magna, tras la emisión de declaración de procedencia emitida por el Congreso de la Unión para que actúen como correspondía, como señala la frase que ha estado a discusión, pues, no puede (niesto) ni debe interpretarse en el sentido de que las legislaturas locales se encuentran facultadas para aprobar o desaprobado la decisión del Congreso de la Unión. Se confirma, con el contenido del sexto y del séptimo párrafos de este mismo artículo que señala que las resoluciones que emita el Congreso de la Unión son inatacables y su efecto es proceder contra el inculpaado y revocarlo de su cargo, en tanto está vigente el proceso penal.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas impugnadas, oportunidad, legitimación activa y legitimación pasiva: Unanimidad de votos.</p> <p>Causas de improcedencia y sobreseimiento: Unanimidad de votos por lo que se refiere a la propuesta de sobreseimiento de los Decretos 537 y 539; mayoría de siete votos en contra, por lo que se refiere a la propuesta de sobreseimiento del Decreto 538.</p> <p>Estudio de fondo: Mayoría de siete votos a favor de la propuesta; precisa el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena, con voto obligado por la mayoría; el señor Ministro González Alcántara Carrancá, en contra de consideraciones, con anuncio de voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con anuncio de voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, al igual que el señor Ministro Pérez Dayán obligados por la mayoría; la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, en contra de consideraciones, con anuncio de voto concurrente; y en contra de la señora Ministra Equivel Mossa, de la señora Ministra Ortiz AHF y de la señora Ministra Batres Guadarrama, quienes anuncian sendos votos particulares.</p> <p>Resolutivos: Unanimidad de votos.</p>
<p>Controversia Constitucional 119/2020</p> <p>Ponente: Ministro Pérez Dayan</p> <p>Resuelto: 14/03/2024</p>	<p>Administrativa</p>	<p>promovió por el Poder Ejecutivo Federal, en contra del Poder Ejecutivo y del Congreso, ambos del Estado de Baja California, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del mencionado Estado, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad de 30 de abril de 2020, mediante Decreto Número 62.</p>	<p>¿Los preceptos impugnados, al regular el impuesto ambiental por la emisión de gases a la atmósfera, invaden la competencia del Congreso de la Unión para legislar en materia de hidrocarburos y establecer contribuciones sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos cuarto y quinto del artículo 27, así como para imponer contribuciones especiales sobre gasolina y otros productos derivados del petróleo?</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y fundada la presente controversia constitucional.</p> <p>SEGUNDO. Se declara la invalidez, con efectos generales, de los artículos 133, 134, 135, 136-1, 136-2, 136-3, 136-4, 136-5, 136-6 y 136-7 de la ley de hacienda del estado de Baja California, reformados y adicionados mediante el Decreto número 62, publicado en periódico oficial de esa entidad federativa el treinta de abril de dos mil veinte, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al congreso del estado de Baja California.</p> <p>TERCERO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de la litis y existencia de las normas impugnadas, oportunidad: A favor.</p> <p>Legitimación: A favor.</p> <p>Causas de improcedencia y sobreseimiento: Con el proyecto modificado.</p> <p>Efectos: A favor.</p> <p>Resolutivos: A favor.</p>	<p>Sin comentarios.</p>	<p>Mayoría de nueve votos a favor de la propuesta, con voto en contra de la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, quien anuncia voto particular.</p> <p>Legitimación: Mayoría de nueve votos a favor de la propuesta; con voto en contra de la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, con anuncio de voto particular.</p> <p>Causas de improcedencia y sobreseimiento: Mayoría de nueve votos a favor de la propuesta, con voto en contra de la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, quien anuncia voto particular.</p> <p>Efectos: Unanimidad de votos.</p> <p>Resolutivos: Unanimidad de votos.</p>
<p>Acción de Inconstitucionalidad 85/2022 y sus acumuladas 96/2022 y 100/2022</p> <p>Ponente: Pérez Dayán</p> <p>Resuelto: 19/03/2024</p>	<p>Administrativa</p>	<p>La invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso de la Información Pública de dicho Estado, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad de 11 de junio de 2022, mediante Decreto 105.</p>	<p>¿Se cometieron violaciones al procedimiento legislativo con potencial invalidante? ¿El hecho de que se armonicen los requisitos que deben cumplir las personas que aspiren a ocupar el cargo de Comisionado en el INFODOL, con aquellos establecidos tanto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública como en el artículo 6 en relación con el diverso numeral 95 de la Constitución General, contraría los principios de acceso a la información y protección de datos personales ni la autonomía del Instituto?</p>	<p>PRIMERO. Es parcialmente procedente, pero infundada la presente acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas.</p> <p>SEGUNDO. Se reconoce la validez del Decreto número 105 por el que se deroga la fracción IX y se reforma la fracción X, ambas del artículo 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el once de junio de dos mil veintidós.</p> <p>TERCERO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas impugnadas, oportunidad, legitimación: A favor.</p> <p>Causas de improcedencia y sobreseimiento: A favor.</p> <p>Estudio de fondo 1: A favor del proyecto, con consideraciones distintas y advirtiéndole que, entiendo que más adelante se estudiará el proceso legislativo porque no es este el tema si no era nada más la de consulta. Gracias.</p> <p>Estudio de fondo 2: A favor.</p>	<p>ESTUDIO DE FONDO 1: Tamaulipas, Ministra Presidenta. Respecto de las violaciones al procedimiento legislativo que se encuentran señaladas en el punto VI.1, me encuentro a favor del sentido, pero en contra de las consideraciones. En primer término, del análisis de los conceptos de invalidez planteados por el Instituto de Transparencia de Colima, advierto que únicamente señaló que no fue consultado por parte de la legislatura colimense para emitir una opinión técnica en materia de transparencia que permitiera fundamentar la reforma ahora impugnada. Al revisar el escrito que presentó ese instituto, no advierto que señale argumentos particulares sobre violaciones procesales que haya cometido el Congreso del Estado en alguna etapa específica del procedimiento legislativo. Por otra parte, la minoría del Congreso únicamente señaló en sus consideraciones iniciales de su escrito, que en contra de</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas impugnadas, oportunidad, legitimación y causas de improcedencia y sobreseimiento: Unanimidad de votos con las precisiones señaladas.</p> <p>Causas de improcedencia y sobreseimiento: Unanimidad de votos.</p> <p>Estudio de fondo 1: Unanimidad de votos a favor del sentido de la propuesta, el señor Ministro González Alcántara Carrancá, en contra de consideraciones; la señora Ministra Equivel Mossa, en contra de consideraciones; la señora Ministra Ortiz AHF, por consideraciones diversas; el señor Ministro Aguilar Morales, con consideraciones adicionales y anuncio de voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con consideraciones distintas; la señora Ministra Batres Guadarrama, consideraciones distintas y precisiones; el señor Ministro Laynez Potisek, con consideraciones diversas; la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, en contra de consideraciones y con anuncio de voto concurrente.</p>
<p>Controversia Constitucional 123/2022</p> <p>Ponente: Pérez Dayán</p> <p>Resuelto: 1/04/2024</p>	<p>Administrativa</p>	<p>La invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso de la Información Pública de dicho Estado, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad de 11 de junio de 2022, mediante Decreto 105.</p>	<p>¿Debe sobreseerse en el presente asunto toda vez que el Decreto 105 que se impugna ya fue examinado por el Tribunal Pleno, en la acción de inconstitucionalidad 85/2022 y sus acumuladas 96/2022 y 100/2022?</p>	<p>PRIMERO. Se sobrese en la presente controversia constitucional.</p> <p>SEGUNDO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Antecedentes y trámite y competencia y precisión de las normas reclamadas: A favor.</p> <p>Causas de improcedencia y sobreseimiento: A favor.</p>	<p>Sin comentarios</p>	<p>Antecedentes y trámite y competencia y precisión de las normas reclamadas: Unanimidad de votos a favor del proyecto.</p> <p>Causas de improcedencia y sobreseimiento: Mayoría de nueve votos a favor de la propuesta; el señor Ministro González Alcántara Carrancá, con consideraciones adicionales y anuncio de voto concurrente; la señora Ministra Ortiz AHF, el señor Ministro Aguilar Morales, el señor Ministro Pardo Robledo con anuncio de voto concurrente al igual que la señora Ministra Ríos Farjat; con voto en contra del señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena y de la Ministra Presidenta Piña Hernández, quien anuncia voto particular.</p>
<p>Acción de Inconstitucionalidad 54/2021 y su acumulada 55/2021</p> <p>Ponente: Gutiérrez Ortiz Mena</p> <p>Resuelto: 2/04/2024</p>	<p>Administrativa</p>	<p>La invalidez de la Ley de Archivos para el Estado de Chihuahua, expedida mediante Decreto número LXVI/EXLEY/0968/2021 X P.E., publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el veintiseis de febrero de dos mil veintiuno.</p>	<p>Regulación en materia archivística para el Estado de Chihuahua.</p>	<p>PRIMERO. Es parcialmente procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se sobrese respecto del artículo 82 de la Ley de Archivos para el Estado de Chihuahua, expedida mediante Decreto No. LXVI/EXLEY/0968/2021 X P.E. publicado el veintiseis de febrero de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua.</p> <p>TERCERO. Se reconoce la validez de los artículos 1, 4, 14, fracción IV, 25, 34, fracción X, 36, 37, 43, fracción I, 71, fracción X, 89, fracción III, y Décimo Transitorio, de la Ley de Archivos para el Estado de Chihuahua, expedida mediante Decreto No. LXVI/EXLEY/0968/2021 X P.E. publicado el veintiseis de febrero de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua.</p> <p>CUARTO. Se declara la invalidez de los artículos 51, párrafo primero en su porción normativa "y el Consejo Estatal"; 71, fracción VII y antepenúltimo párrafo del citado precepto, 84, 85, 86, 87 y 89, fracción IV y 122 de la Ley de Archivos para el Estado de Chihuahua, expedida mediante Decreto No. LXVI/EXLEY/0968/2021 X P.E. publicado el veintiseis de febrero de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua.</p> <p>QUINTO. Se declara la invalidez por extensión de los artículos 121 y 123 de la Ley de Archivos del Estado de Chihuahua, expedida mediante Decreto No. LXVI/EXLEY/0968/2021 X P.E. publicado el veintiseis de febrero de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua.</p> <p>SETO. La declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Chihuahua, en la inteligencia de que, en tanto se subsanen los vicios advertidos en esta sentencia, en el orden jurídico de dicho Estado será aplicable directamente lo establecido en la Ley General de Archivos, como se puntualiza en los considerandos X de esta ejecutoria.</p> <p>SÉPTIMO. Se revoca al Congreso del Estado de Chihuahua para que, a más tardar en la siguiente sesión ordinaria de sesiones, revise los</p>	<p>Apartado de parámetro constitucional: Unanimidad de votos con el sentido del proyecto.</p> <p>Tema 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9: A favor</p> <p>Tema 3: En contra con voto particular</p> <p>Tema 4: A favor con voto concurrente</p>	<p>Quisiera señalar que estoy de acuerdo en los párrafos del 107 al 112, sin embargo, el tema 3 contiene o menciona en su artículo 14, fracción IV, en los párrafos del 117 al 121 una guía de archivo documental que en realidad no se trata de un documento normativo, sino de una guía informativa a disposición del público, entonces, no debería venir contenida en este artículo, por lo que creo que ameritaría votar en contra; por el contrario, el artículo 13 en relación con el 47, fracciones VIII, XX y XXXIX de la Ley General de Archivos dispone que los documentos denominados "cuadro general de clasificación archivística, catálogo de disposición documental e inventarios documentales" son los instrumentos técnico-normativos que regulan la organización documental, por eso (niesto) debería estar excluida esta guía de archivo documental.</p> <p>Advierto que el Archivo Histórico del Estado de Chihuahua es un ente creado con anterioridad a la ley motivo de impugnación, razón por la cual muy probablemente se conservó su existencia con todo y su adscripción a la Secretaría de Cultura, para garantizar la conservación y disposición de los archivos históricos de los sujetos obligados previstos en el artículo 35 de la ley local.</p>	<p>Apartado de parámetro constitucional: Unanimidad de votos con el sentido del proyecto.</p> <p>Cabe señalar que se agrega un resolutorio tercero en el cual se desestima la acción de inconstitucionalidad respecto al artículo 71, fracción X, de la ley impugnada.</p>
<p>Amparo en Revisión 227/2022</p> <p>Ponente: Pérez Dayán</p> <p>Resuelto: 08/04/2024</p>	<p>Fiscal</p>	<p>La expedición y aplicación de diversas disposiciones de la ley general de salud y de la "modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-información comercial y sanitaria", publicadas en el Periódico Oficial de la Federación de ocho de noviembre de dos mil diecinueve y veintisiete de marzo de dos mil veinte, respectivamente.</p>	<p>1. ¿El legislador federal debió emprender una motivación reforzada, debido a que el sistema de etiquetado previsto en los numerales impugnados tiene incidencia en los derechos de protección a la salud y a la información de los consumidores? 2. ¿Los artículos 212, párrafos tercero y cuarto, así como el artículo 215, fracciones VI y VII, de la Ley General de Salud, vulneran la libertad de comercio y la de concurrencia, al prever como mecanismo de prevención un etiquetado que busca inhibir el consumo de productos preenvasados, en lugar de proporcionar información? 3. ¿Se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento para la emisión de la "modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-información comercial y sanitaria", publicadas en el Periódico Oficial de la Federación de ocho de noviembre de dos mil diecinueve y veintisiete de marzo de dos mil veinte, respectivamente. 4. La modificación de la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 carece de una motivación reforzada en elementos técnicos o en la evidencia científica adecuada que requiere para la regulación del sistema de etiquetado frontal? 5. ¿Los numerales 4.5.3.4, y 4.5.3.4.1, de la norma general impugnada transgreden en perjuicio de la parte quejosa los derechos a la libertad de comercio y de libre concurrencia? 6. ¿El artículo 7.1.4., de la NOM-051, al prever la inclusión de la leyenda "CONTIENE CAFÉINA EVITAR NIÑOS", únicamente para productos preenvasados con caféina adicional, propicia una diferenciación de trato injustificada entre personas que comercializan esos productos y aquellos que realizan la misma actividad pero con productos que contienen caféina natural, ya que respecto de éstos no aplica la medida? 7. ¿La modificación de la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 y la diversa NOM-218-SSA1-2011, norman de manera diferente la misma situación jurídica en lo concerniente a productos preenvasados con caféina adicional, en perjuicio de la parte quejosa?</p>	<p>PRIMERO. En la materia de la revisión, la justicia de la unión no ampara ni protege a santa clara mercantil de Pachuca, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, respecto de la inconstitucionalidad alegada de los artículos 212, párrafos tercero y cuarto, así como 215, fracciones VI y VII, de la Ley General de Salud, así como de la "modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-información comercial y sanitaria", publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiseis de marzo de dos mil veinte, particularmente, los numerales 3.38, 4.5.3.4., 4.5.3.4.1., 7.1.3., 7.1.4., así como los transitorios primero a cuarto.</p> <p>SEGUNDO. Se declara sin materia la revisión adhesiva.</p>	<p>Apartados de competencia, oportunidad y legitimación y precisión de la litis: A favor</p> <p>Estudio de fondo: A favor.</p> <p>Test de proporcionalidad: A favor.</p> <p>Apartado 1: A favor.</p> <p>Apartado 2: A favor.</p> <p>Revisión adhesiva: A favor.</p> <p>Resolutivos: A favor.</p>	<p>Sin comentarios</p>	<p>Apartados de competencia, oportunidad y legitimación y precisión de la litis: Unanimidad de votos a favor de los apartados sometidos a consideración; el señor Ministro González Alcántara Carrancá, con anuncio de voto concurrente respecto del apartado de precisión de la litis; el señor Ministro Aguilar Morales, en cuanto al sobreseimiento respecto a las normas que precís.</p> <p>Estudio de fondo: Mayoría de diez votos a favor de la propuesta; el señor Ministro González Alcántara Carrancá, en contra de los párrafos 33 a 39, con anuncio de voto concurrente; la señora Ministra Equivel Mossa, con anuncio de voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, en contra de algunas consideraciones; la señora Ministra Ríos Farjat, en contra de los párrafos 33 a 39; el señor Ministro Laynez Potisek, con consideraciones adicionales y anuncio de voto concurrente; la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, con razones adicionales y anuncio de voto concurrente; y voto en contra del señor Ministro Aguilar Morales.</p> <p>Test de proporcionalidad: Unanimidad de once votos a favor de la propuesta, el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena anuncia voto concurrente; el señor Ministro González Alcántara Carrancá, en contra de los párrafos 81, 139 y 140, con anuncio de voto concurrente; la señora Ministra Equivel Mossa, con anuncio de voto concurrente; el señor Ministro Aguilar Morales reserva su derecho a formular voto concurrente; la señora Ministra Ríos Farjat, en contra de algunas consideraciones y reserva su derecho a formular voto concurrente con consideraciones; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena, con voto concurrente; el señor Ministro Aguilar Morales, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro Laynez Potisek, con voto concurrente; el señor Ministro Pérez Dayán, con voto concurrente; el señor Ministro Piña Hernández, con voto concurrente; el señor Ministro Ríos Farjat, con voto concurrente; el señor Ministro Batres Guadarrama, con voto concurrente; el señor Ministro Equivel Mossa, con voto concurrente; el señor Ministro Ortiz AHF, con voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, con voto concurrente; el señor Ministro</p>

<p>Controversia Constitucional 17/2022</p> <p>Ponente: Laynez Pottsiek</p> <p>Retirado en sesión de 22/04/2024</p>	<p>Electoral</p>	<p>Los artículos 116, 115, 116, 117, 118, 119 y 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán; 2) la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán; 3) el Reglamento del Instituto Electoral del Estado de Michoacán para la Consulta</p>	<p>El municipio impugna la transferencia presupuestal de recursos a la comunidad Crecencia Morales para evitar que sea ésta quien los administre de forma autónoma y directa.</p> <p>Para lograrlo combate todo el sistema normativo que permitió realizar la consulta previa a la comunidad indígena</p>	<p>Retirado</p>	<p>Estudio de fondo: En contra.</p>	<p>Sin comentarios</p>	<p>Estudio de fondo: Mayoría de seis votos, en contra de la propuesta.</p>
<p>Acción de Inconstitucionalidad 133/2023</p> <p>Ponente: Ministro González Alcántara</p> <p>Resuelto: 23/04/2024</p>	<p>Electoral</p>	<p>Decreto por el que se adiciona el artículo 42 Bis y se reforman los artículos 42 y 99, todos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la mencionada Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad de 17 de mayo de 2023.</p>	<p>¿Es constitucional el procedimiento de ratificación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México? ¿Es inconstitucional prever la ratificación de las Fiscalías Especializadas para la Atención de Delitos Electorales y de Combate a la Corrupción? ¿Resultan inconstitucionales las facultades atribuidas al Consejo Judicial Ciudadano?</p>	<p>Retirado</p>	<p>Apartados de trámite, competencia, oportunidad y legitimación: A favor</p> <p>Precisión de las normas impugnadas: A favor</p> <p>Estudio de fondo: A favor, apartándose de cualquier consideración sobre proceso legislativo con relación a la democracia deliberativa.</p> <p>Análisis de los artículos impugnados en lo particular: A favor.</p>	<p>Sin comentarios</p>	<p>Estudio de fondo: Yo quisiera separarme del proyecto en cuanto a que considera el estudio de irregularidades en el proceso legislativo para ser calificadas bajo un criterio arbitrario como el denominado "potencial invalidante". No comparto el análisis de las violaciones señaladas porque no responden al contenido de ninguna disposición constitucional, reitero mi oposición que he manifestado en esta Suprema Corte respecto de que se analice cualquier regla de procedimiento legislativo conforme a una concepción de democracia como la denominada "democracia deliberativa" que no se encuentra en nuestro régimen constitucional, la única concepción de democracia se encuentra contenida en el artículo 3°, fracción II, inciso a), de nuestra Constitución, que la caracteriza como "un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo". Quisiera simplemente terminar mencionando las palabras que en esta Corte mencionó el Ministro en retiro Ulises Schmill, que nos advirtió que "si por cualquier medio se estableciera que el criterio fundamental para juzgar de la regularidad de una norma, acto u omisión fuera una regla no positiva distinta de las normas constitucionales, eso significaría introducir en la vida jurídica mexicana el monstruo horrible del desorden y el subjetivismo, en detrimento de la seguridad jurídica".</p> <p>Si, yo estoy a favor del estudio de fondo del proyecto que se nos presenta. Creo que la preocupación del principal punto impugnado está contenida muy claramente en el punto 7.3 sobre el contenido de las disposiciones regulatorias, respecto que no impiden que el Ejecutivo Federal ejerza sus facultades para definir y administrar los tiempos reservados para el Estado. Estoy a favor del proyecto, pues reconozco tal y como establece el artículo 28 constitucional y la ley respectiva que la autoridad competente para definir y administrar la capacidad de reserva satelital del Estado es el propio Ejecutivo Federal; así lo establece el proyecto claramente en su párrafo. También coincido en cuanto sostiene que el Ejecutivo Federal es el que debe definir qué tipo de reserva se debe garantizar incluyendo la cantidad y tamaño 11 de la capacidad de los servicios satelitales para ser considerados como adecuados y suficientes para los servicios que administra el propio Estado. Efectivamente, en el párrafo 98 se reconoce que el numeral 4 de las disposiciones regulatorias no interfiere con las facultades conferidas a través de las Secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para establecer políticas que promuevan la disponibilidad de capacidad y servicios satelitales suficientes para la red de seguridad nacional.</p>
<p>Controversia Constitucional 237/2023</p> <p>Ponente: Ministro González Alcántara</p> <p>Resuelto: 25/04/2024</p>	<p>COMPETENCIA</p>	<p>Invalidéz del Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emite las Disposiciones Regulatorias en Materia de Comunicación Via Satélite, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 23 de enero de 2023.</p>	<p>¿El IFT es competente para emitir las Disposiciones Regulatorias en materia de Comunicación Via Satélite? ¿Las Disposiciones Regulatorias emitidas por el IFT sustituyen válidamente al Reglamento de Comunicación Via Satélite (RCSV) emitido por el Poder Ejecutivo Federal? ¿El contenido de las Disposiciones Regulatorias impide que el Ejecutivo Federal ejerza sus facultades para definir y administrar los tiempos reservados para el Estado?</p>	<p>Retirado</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad, legitimación activa, legitimación pasiva y causas de improcedencia y sobreesimiento: A favor.</p> <p>Estudio de fondo. VII.1: A favor.</p> <p>Estudio de fondo. VII.2: A favor.</p> <p>Resolutivos: A favor.</p>	<p>Sin comentarios</p>	<p>Estudio de fondo: Mayoría de diez votos a favor de la propuesta; el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mená, con consideraciones adicionales y anuncio de voto concurrente; la señora Ministra Esquivel Mossa, en contra de los párrafos 84 a 117; la señora Ministra Ortiz Ahí, en contra de los párrafos 117 y 126 a 133; la señora Ministra Batres Guadarrama, en contra de las consideraciones que abordan el análisis del procedimiento legislativo con base en el principio de deliberación democrática; la señora Ministra Ríos Farjat, en contra de diversas consideraciones; la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, con consideraciones adicionales y anuncio de voto concurrente; y voto en contra del señor Ministro Aguilar Morales.</p> <p>Análisis de los artículos impugnados en lo particular: Unanimidad de votos con el sentido del proyecto.</p>
<p>Declaratoria General de Inconstitucionalidad Constitucional 4/2023</p> <p>Ponente: Ministro González Alcántara</p> <p>Resuelto: 25/04/2024</p>	<p>CONSTITUCIONAL</p>	<p>Artículo 103, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (Foy Ciudad de México).</p>	<p>¿Procede declarar, con efectos generales, la inconstitucionalidad de la previsión normativa que condiciona la admisión de la demanda principal, reconvenicional o incidental y de los escritos en que se pidan liquidaciones, a que se acompañen de las copias correspondientes, por ser violatoria del derecho de acceso a la justicia y del principio de igualdad procesal?</p>	<p>Retirado</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad, legitimación activa, legitimación pasiva y causas de improcedencia y sobreesimiento: A favor.</p> <p>Estudio de fondo. VII.1: A favor.</p> <p>Estudio de fondo. VII.2: A favor.</p> <p>Resolutivos: A favor.</p>	<p>Sin comentarios</p>	<p>Estudio de fondo: Mayoría de diez votos a favor de la propuesta; el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mená, con consideraciones adicionales y anuncio de voto concurrente; la señora Ministra Esquivel Mossa, en contra de los párrafos 117 y 126 a 133; la señora Ministra Batres Guadarrama, en contra de las consideraciones que abordan el análisis del procedimiento legislativo con base en el principio de deliberación democrática; la señora Ministra Ríos Farjat, en contra de diversas consideraciones; la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, con consideraciones adicionales y anuncio de voto concurrente; y voto en contra del señor Ministro Aguilar Morales.</p> <p>Análisis de los artículos impugnados en lo particular: Unanimidad de votos con el sentido del proyecto.</p>
<p>Acción de Inconstitucionalidad 91/2021</p> <p>Ponente: Ministro Pérez Dayán</p> <p>Resuelto: 29/04/2024</p>	<p>Constitucional</p>	<p>Constitucionalidad de la Ley de Hidrocarburos</p>	<p>Se tienen por impugnados los artículos 51, fracción III; 53, párrafo segundo; 57, 59 Bis; Cuarto y Sexto Transitorios de la Ley de Hidrocarburos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2021.</p> <p>1. Análisis del artículo sexto transitorio que prevé la revocación de los permisos. 2. Análisis de los artículos 51, fracción III y cuarto transitorio de la Ley de Hidrocarburos, que prevén el requisito consistente en cumplir con la capacidad de almacenamiento que establece la Secretaría de Energía. 3. Análisis de los artículos 51, fracción III, 53, párrafo segundo, 57, 59 Bis, así como cuarto y sexto transitorios, de la Ley de Hidrocarburos, por transgresión al principio de libre competencia y concurrencia.</p>	<p>Retirado</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad y legitimación: A favor.</p> <p>Apartado de causas de improcedencia y sobreesimiento: A favor.</p> <p>Estudio de fondo tema 1: A favor.</p> <p>Estudio de fondo tema 2: A favor del proyecto original.</p> <p>Estudio de fondo tema 3: A favor del proyecto, separándose de los párrafos 126 y 128.</p>	<p>Sin comentarios</p>	<p>Estudio de fondo tema 1: Mayoría de diez votos a favor de la propuesta; el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mená, con consideraciones adicionales y anuncio de voto concurrente; la señora Ministra Esquivel Mossa, en contra de los párrafos 117 y 126 a 133; la señora Ministra Batres Guadarrama, en contra de las consideraciones que abordan el análisis del procedimiento legislativo con base en el principio de deliberación democrática; la señora Ministra Ríos Farjat, en contra de diversas consideraciones; la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, con consideraciones adicionales y anuncio de voto concurrente; y voto en contra del señor Ministro Aguilar Morales.</p> <p>Análisis de los artículos impugnados en lo particular: Unanimidad de votos con el sentido del proyecto.</p>

<p>Controversia Constitucional 84/2022</p> <p>Ponente: Ministra Esquivel Mossa</p> <p>Resuelto: 30/04/2024</p>	<p>Constitucional</p>	<p>Invalidez de los artículos 51 Bis, fracciones I, III, IV y V, de la Ley Municipal de dicha entidad de 4 de febrero de 2022, mediante Decreto 516.</p>	<p>¿Han cesado los efectos del artículo Segundo Transitorio, el cual establece que los ayuntamientos contarán con un plazo de noventa días naturales a partir de la entrada en vigor del Decreto para adecuar sus reglamentos?</p> <p>¿También han cesado los efectos de las fracciones IV y V del artículo 51 Bis, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, en virtud de que se declaró su invalidez en la acción de inconstitucionalidad 84/2022?</p> <p>¿El Congreso del Estado de Aguascalientes resulta competente para regular los requisitos que condicionan el acceso al cargo de titular del órgano interno de control municipal? (Se vio el derecho a la consulta del Municipio actor en la emisión del Decreto legislativo impugnado.)</p> <p>¿El requisito de contar con título de licenciatura en Derecho o Contaduría Pública para ocupar el cargo de titular de del órgano interno de control se encuentra justificado constitucionalmente?</p> <p>¿El diverso requisito para ocupar ese mismo cargo de no haber sido candidato a algún puesto de elección popular dentro de los cinco años anteriores a su nombramiento, resulta sobre inclusivo?</p>	<p>PRIMERO. Es parcialmente procedente y parcialmente fundada la presente controversia constitucional.</p> <p>SEGUNDO. Se sobresee respecto del artículo 51 Bis, fracciones IV y V, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, adicionado mediante el Decreto Número 100, publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, así como en relación con el artículo transitorio segundo de dicho decreto.</p> <p>TERCERO. Se reconoce la validez del artículo 51 Bis, fracción II, de la citada Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes.</p> <p>CUARTO. Se declara la invalidez del artículo 51 Bis, fracción III, de la referida Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Aguascalientes.</p> <p>QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del estado de Aguascalientes, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión y existencia del acto impugnado y oportunidad: A favor.</p> <p>Apartados de legitimación activa y legitimación pasiva: A favor.</p> <p>Apartado de causas de improcedencia y sobreseimiento: De acuerdo con el proyecto, con excepción del segundo transitorio.</p> <p>Apartado VII.1: En contra.</p> <p>Apartado VII.2: A favor.</p> <p>Apartado VII.3: En contra.</p> <p>Apartado Efectos: A favor.</p>	<p>Apartado de causas de improcedencia y sobreseimiento: mayoría de seis votos a favor la propuesta de subordenamiento respecto del artículo segundo transitorio, y existe unanimidad de diez votos por lo que se refiere al sobreseimiento propuesto del artículo 51, fracciones IV y V, en la inteligencia que la señora Ministra Presidenta Píla Hernández vota por el sobreseimiento respecto de la totalidad del artículo 51.</p> <p>Apartado VII.1: Votación expresa favorable de siete en cuanto a este apartado, con precisiones del señor Ministro Layne Potisek y del señor Ministro Pérez Dayán, en cuanto a la metodología o estudio preterrito; anuncio de voto concurrente del señor Ministro Layne Potisek; la señora Ministra Ortiz Ahif, en contra de la metodología; el señor Ministro Aguilar Morales, en contra del párrafo 81; y voto en contra de la señora Ministra Bares Guadarrama, y de la señora Ministra Presidenta Píla Hernández, por sobreseimiento.</p> <p>Apartado VII.2: mayoría de nueve votos a favor de la propuesta; el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena, con anuncio de voto concurrente, en contra del párrafo 84; y la señora Ministra Presidenta Píla Hernández, en contra y por el sobreseimiento.</p> <p>Apartado VII.3: mayoría de siete votos a favor de la propuesta; el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena, con anuncio de voto concurrente, y en contra de consideraciones; el señor Ministro González Alcántara Carrancá, con voto en todas las consideraciones, con anuncio de voto concurrente; con voto en contra de la señora Ministra Esquivel Mossa, con consideraciones adicionales; y voto en contra de la señora Ministra Bares Guadarrama, con consideraciones adicionales.</p> <p>Tema 5 del apartado de estudio de fondo: mayoría de ocho votos a favor de la propuesta, el señor Ministro González Alcántara Carrancá, en contra de consideraciones, con adicionales; y anuncio de voto concurrente; la señora Ministra Presidenta Píla Hernández, en contra y con anuncio de voto particular.</p> <p>Tema 3 del apartado de estudio de fondo: mayoría de siete votos a favor de la propuesta de reconocimiento de validez, con voto en contra del señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena, quien anuncia voto particular y de la señora Ministra Presidenta Píla Hernández, quien también anuncia voto particular; el señor Ministro González Alcántara Carrancá, se aparta de los párrafos 96 a 98; y la señora Ministra Ortiz Ahif, con consideraciones adicionales.</p> <p>Tema 6 del apartado de estudio de fondo: A favor del proyecto en sus términos, existen cuatro votos: de la señora Ministra Esquivel Mossa, el señor Ministro Pardo Rebollo, el señor Ministro Layne Potisek, y el señor Ministro Bares Guadarrama.</p>
<p>Acción de Inconstitucionalidad 39/2022 y su acumulada 41/2022</p> <p>Ponente: Ministra Pérez Dayán</p> <p>Resuelto: 30/04/2024</p>	<p>Constitucional</p>	<p>Invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Archivos para el Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad de 4 de febrero de 2022, mediante Decreto 516.</p>	<p>¿El legislador local debió incluir como integrante del Consejo a un representante del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica, como el equivalente a nivel local del integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía?</p> <p>¿El legislador local omitió prever que los órganos constitucionales autónomos locales puedan emitir declaratorias de patrimonio documental en el ámbito de su competencia en coordinación con el Archivo General del Estado?</p> <p>¿(Modifica inconstitucionalmente la estructura del Archivo del Estado el que se establezca un Órgano Interno de Control en lugar de un Órgano de Vigilancia?)</p> <p>¿(La normativa impugnada omite precisar que el Archivo General del Estado no sea sectorizado, con ello, garantizar su autonomía en la toma de decisiones y detonar una injerencia del Ejecutivo?)</p> <p>¿El requisito de no haber cometido delito doloso para ocupar el cargo de Director General</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada.</p> <p>SEGUNDO. Se reconoce la validez de los artículos 63, 78, 99, fracción III, y 104 de la Ley de Archivos para el Estado de Sinaloa.</p> <p>TERCERO. Se declara la invalidez de los artículos 3, párrafo segundo, en su porción normativa "La Ley General de Responsabilidades Administrativas", 95 y 102, fracción III, de la ley citada Ley de Archivos para el Estado de Sinaloa, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al congreso del referido estado, en la inteligencia de que, en tanto se subsanen los vicios advertidos en esta sentencia, en el orden jurídico de dicho estado será aplicable directamente lo establecido en la ley general de archivos, como se puntualiza en el apartado VII de esta determinación.</p> <p>CUARTO. Se vincula al congreso del estado de Sinaloa para que, a más tardar en el próximo periodo ordinario de sesiones, realice los ajustes que, en su caso, considere pertinentes en su legislación interna, a fin de establecer que el archivo general del estado será un organismo</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad, legitimación y causas de improcedencia y sobreseimiento: A favor.</p> <p>Apartados de parámetro de regularidad constitucional: A favor.</p> <p>Tema 4 del apartado de estudio de fondo: En contra.</p>	<p>Tema 5 del apartado de estudio de fondo: En general (yo) estoy en contra de que se considere inconstitucional este tipo de requisitos; sin embargo, hay que aceptar que (en este caso) es un requisito... está determinado, absolutamente abierta, y me parece que si es un exceso; entonces, estaré apoyando en este sentido el proyecto.</p> <p>Tema 6 del apartado de estudio de fondo: Si (yo) estaré en contra de este punto, en el tema VI, sobre la supletoriedad, específicamente de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El proyecto afirma que la norma estatal ordena la aplicación supletoria de forma general, es decir, para suplir lo que no está en la norma estatal. Me parece que es claro que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, está argumentando hechos que tienen que ver con supuestas violaciones a la división de poderes, a la independencia judicial, con la finalidad de controvertir la invasión de esferas competenciales del Poder Judicial de Morelos, lo que creo que es claro que no es materia de este medio de control constitucional ni en materia tampoco de los medios por los cuales puede interponer una controversia constitucional al Comisión Estatal de Derechos Humanos, de acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la propia Constitución.</p> <p>Contrario a lo manifestado por el Ministro Pérez Dayán, esta Suprema Corte en su jurisprudencia 7/2007, se pronunció muy claramente por la limitación expresa de los sujetos legitimados para promover una acción de constitucionalidad, de acuerdo con la fracción II del artículo 105 constitucional, manifestando que no todos los sujetos legitimados pueden plantear ese medio de control constitucional contra cualquier ley y que su legitimación varía según el ámbito de la norma a impugnar, es decir, si tiene una correlación directa lo que se está impugnando, la materia</p>
<p>Acción de Inconstitucionalidad 170/2023</p> <p>Ponente: Ministra Ríos Farjat</p> <p>Resuelto: 06/05/2024</p>	<p>Constitucional</p>	<p>Ampliación del periodo de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.</p>	<p>El Decreto Número Mil Doscientos Treinta en su integridad, por violaciones al procedimiento legislativo; así como el artículo tercero transitorio del referido Decreto.</p>	<p>PRIMERO. Se desestima en la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las disposiciones reclamadas, oportunidad, legitimación y representación: En contra.</p> <p>Apartado de causas de improcedencia y sobreseimiento: En contra, por la falta de legitimación.</p> <p>Apartado de estudio de fondo: En contra.</p>	<p>Apartados: competencia, precisión de las disposiciones reclamadas, oportunidad, legitimación y representación: Mayoría de ocho votos a favor de la propuesta modificada en sus términos; el señor Ministro Layne Potisek, con voto parcial en los términos ya precisados; y voto en contra de la señora Ministra Esquivel Mossa y de la señora Ministra Bares Guadarrama, quien anuncia voto particular, con precisiones y reserva su derecho a formular voto concurrente.</p> <p>Apartado de causas de improcedencia y sobreseimiento: mayoría de ocho votos a favor de la propuesta; con el voto en contra de las señoras Ministras Esquivel Mossa, Ortiz Ahif y Bares Guadarrama.</p> <p>Apartado de estudio de fondo: mayoría de seis votos a favor de la propuesta; el señor Ministro Pardo Rebollo anuncia voto aclaratorio; la señora Ministra Presidenta Píla Hernández, con razones adicionales; voto en contra por el sobreseimiento de las señoras Ministras Esquivel Mossa, Ortiz Ahif y Bares Guadarrama; y voto en contra y por la invalidez de los señores Ministros Aguilar Morales y Pérez Dayán.</p>
<p>Declaratoria General de Inconstitucionalidad 6/2023</p> <p>Ponente: Ministra Ríos Farjat</p> <p>Resuelto: 06/05/2024</p>	<p>Civil</p>	<p>Prohibición para registrar hijo fuera del matrimonio en el estado de Jalisco</p>	<p>La declaratoria general de inconstitucionalidad es fundada, ya que, a la fecha del dictado de esta sentencia, el Congreso de Jalisco no ha reformado o derogado los artículos 477 y 504 del Código Civil y 47 de la Ley del Registro Civil, todos del Estado de Jalisco, por lo que subsiste el problema de inconstitucionalidad de dichos preceptos.</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y fundada la presente declaratoria general de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se declara la inconstitucionalidad de los artículos 477 y 504 del Código Civil y 47 de la Ley del Registro Civil, todos del Estado de Jalisco, la cual surtirá efectos generales a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Jalisco.</p> <p>TERCERO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartados: competencia, legitimación y procedencia: a favor</p> <p>Apartado de estudio de fondo: a favor</p> <p>Sin comentarios</p>	<p>Mayoría de diez votos a favor de la propuesta, el señor Ministro González Alcántara Carrancá anuncia voto aclaratorio; la señora Ministra Esquivel Mossa anuncia voto concurrente; el señor Ministro Pardo Rebollo, con la aclaración indicada; el señor Ministro Pérez Dayán, con las precisiones en cuanto a consideraciones; la señora Ministra Presidenta Píla Hernández, con anuncio de voto concurrente por lo que se refiere al cómputo del plazo y al análisis de la validez de la norma general respectiva.</p>
<p>Acción de Inconstitucionalidad 303/2020</p> <p>Ponente: Ministro Gutiérrez Ortiz Mena</p> <p>Retenido en sesión del: 07/05/2024</p>	<p>Administrativa</p>	<p>Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre de 2020, mediante el cual se eliminan 109 fideicomisos sin estructura orgánica de la Administración Pública Federal.</p>	<p>"Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de la Ley de Hidrocarburos; de la Ley de la Industria Eléctrica; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de la Ley General de Protección Civil; de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; de la Ley de Ciencia y Tecnología; de la Ley Aduanera; de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; de la Ley General de Cultura Física y Deporte; de la Ley Federal de Cinematografía; de la Ley Federal de Derechos; de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; de la Ley de Biotecnología de Organismos Genéticamente Modificados; de la Ley General de Cambio Climático; de la Ley General de Víctimas y se abroga la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos", publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 6 de noviembre de 2020 (Decreto), esta impugnación incluye los preceptos transitorios del Decreto.</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y fundada la presente controversia constitucional.</p> <p>SEGUNDO. Se declara la omisión legislativa inconstitucional en la que incurre el Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al no adecuar la Constitución local y legislación secundaria a lo establecido en el artículo 115, fracción II, inciso b), de la Constitución General, en relación con el artículo segundo transitorio del "Decreto por el que se declara reformado y adicionado el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve; en los términos precisados en los considerandos VII y VIII de esta ejecutoria.</p> <p>TERCERO. Se ordena al Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave legislar, dentro de los seis meses siguientes al que se le notifiquen los puntos resolutivos de esta sentencia, en los términos precisados en su apartado VIII.</p> <p>CUARTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>RETRADO</p>	<p>En general, voy a votar a favor del sentido del proyecto. Creo que es adecuado el recuento de reformas al artículo 115 constitucional y el proyecto hace énfasis también en la forma acordada de la reforma de mil novecientos noventa y nueve, que es la que, en este caso, interesa.</p> <p>Dicha reforma tuvo el espíritu e intención de fortalecer al municipio libre y hacer realidad la autonomía municipal eliminando injerencias o potestades que la misma Constitución permitía o consagraba a favor del gobierno estatal en detrimento de la figura municipal y configurándola, expresamente, como un tercer nivel de gobierno más que como una entidad de índole administrativa con un ámbito de gobierno con competencias propias y excluyvas.</p> <p>Respecto del estudio de la omisión planteada, creo que existe una omisión legislativa efectivamente inconstitucional del Poder Legislativo del Estado de Veracruz. El artículo 115, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solo autoriza a los legislados locales a que señalen cuáles serán los supuestos en que los actos relativos al patrimonio inmobiliario municipal requerirán de un acuerdo de</p>
<p>Controversia constitucional 111/2020</p> <p>Ponente: Ministro Aguilar Morales</p> <p>Resuelto: 09/05/2024</p>	<p>Administrativa</p>	<p>Omisión legislativa de adecuar la constitución de Veracruz al artículo 115, fracción II, inciso b), de la CFEUM en materia de libre disposición del patrimonio inmobiliario municipal.</p>	<p>Se impugna la omisión legislativa de carácter absoluto en la competencia de ejercicio obligatorio en que incurre el Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al no adecuar la Constitución local a lo establecido en el artículo 115, fracción II, inciso b), de la Constitución General, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y fundada la presente controversia constitucional.</p> <p>SEGUNDO. Se declara la omisión legislativa inconstitucional en la que incurre el Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al no adecuar la Constitución local y legislación secundaria a lo establecido en el artículo 115, fracción II, inciso b), de la Constitución General, en relación con el artículo segundo transitorio del "Decreto por el que se declara reformado y adicionado el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve; en los términos precisados en los considerandos VII y VIII de esta ejecutoria.</p> <p>TERCERO. Se ordena al Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave legislar, dentro de los seis meses siguientes al que se le notifiquen los puntos resolutivos de esta sentencia, en los términos precisados en su apartado VIII.</p> <p>CUARTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartado de competencia, precisión de las normas, actos u omisiones reclamadas, oportunidad, legitimación activa, legitimación pasiva y causas de improcedencia y sobreseimiento: A favor</p> <p>Estudio de fondo: a favor</p> <p>Efectos: a favor</p>	<p>Aprobado por unanimidad, con el cambio en el resolutive Tercero se elimina, donde estaba la declaración de invalidez de preceptos específicos, y el nuevo tercero es el cuarto, donde se precisa que se ordena al Congreso del Estado de Veracruz a legislar a más tardar el siguiente periodo de sesiones, con posterioridad a la notificación de esta sentencia.</p>

<p>Acción de inconstitucionalidad 25/2024</p> <p>Ponente: Ministro Pérez Dayán</p> <p>Resuelto: 09/05/2024</p>	<p>Fiscal</p>	<p>Invalidez de porciones normativas de leyes de ingresos municipales del estado de Guerrero por desproporcionalidad tributaria por pago de derechos.</p>	<p>Se tienen por impugnados los artículos 51, fracción XII de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlapehuala; 21, fracción V de la Ley de Ingresos del Municipio de Arcelia; 47, fracción VII de la Ley de Ingresos del Municipio de Toluapalan; 46, fracción IV, inciso E), numeral 7) de la Ley de Ingresos del Municipio de Eduardo Neri; 30, fracción V, numeral 4 de la Ley de Ingresos del Municipio de Chilpancingo de los Bravos, todas para el Ejercicio Fiscal de dos mil veintinueve, publicadas en el Periódico Oficial del Estado el veintidós y veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés.</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y fundada la acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se declara la invalidez de los artículos 51, fracción XII de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlapehuala; 21, fracción V, inciso b) de la Ley de Ingresos del Municipio de Arcelia; 47, fracción VII de la Ley de Ingresos del Municipio de Toluapalan, y tratándose del artículo 46, fracción IV, segundo párrafo, inciso E), numeral 7) de la Ley de Ingresos del Municipio de Eduardo Neri y 30, fracción V, numeral 4) de la Ley de Ingresos del Municipio de Chilpancingo de los Bravos, todas del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal de dos mil veintinueve y publicadas en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintidós y veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés.</p> <p>TERCERO. La declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutive al Congreso del Estado de Guerrero y conforme a los efectos presados en el apartado VII de esta determinación.</p> <p>CUARTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartado de competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad y legitimación: a favor</p> <p>Causas de improcedencia y sobreseimiento: a favor</p>	<p>Yo me estaría pronunciando en contra de la propuesta que nos hace el proyecto, porque sostiene que las cuotas por búsqueda de información en los municipios son desproporcionadas, dado que debe existir una relación razonable entre el costo del servicio y los materiales utilizados; sin embargo, el proyecto no realiza ningún análisis de los costos que los municipios implicados realizan para proporcionar los servicios correspondientes, por lo que, no se sostiene que se trate de cobros no razonables.</p> <p>Desde el párrafo 25, el proyecto plantea, conforme a diversos precedentes, que para respetar los principios de proporcionalidad y equidad tributarios es necesario tener en cuenta, entre otros elementos, el costo que para el Estado implica la ejecución del servicio. De esa premisa se establece que los cinco preceptos impugnados transgreden el principio de proporcionalidad tributaria, porque no se justifican los montos legislados, inclusive, bajo el argumento de mayoría de razón, pues se considera que la búsqueda de documentos requiere de menores recursos que su reproducción, dado que es una actividad realizada por una persona servidora pública en ejercicio de sus funciones, lo que se afirma no debe perseguir fines ajenos.</p>	<p>Mayoría de nueve votos a favor de la propuesta; la señora Ministra Ríos Farjat, en contra de los párrafos indicados; la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, por la invalidez total de la fracción XII del artículo 51 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlapehuala; y con voto en contra de la señora Ministra Btrades Guadarrama, quien expresa precisiones al respecto.</p>
<p>Acción de inconstitucionalidad 160/2023</p> <p>Ponente: González Alcantar Carranca</p> <p>Resuelto: 14/05/2024</p>	<p>División de facultades</p>	<p>Invalidez de diversas disposiciones de la Ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso del mencionado Estado, reformada mediante Decreto 65 581, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad de 6 de junio de 2023</p>	<p>¿Debe declararse la invalidez del artículo 130, numerales 1, párrafo primero, y 3, incisos b) y g), de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso de Tamaulipas, dado que no fue aprobado por la mayoría calificada requerida de veinticuatro votos?</p> <p>¿El artículo 47, numeral 1, de la Ley impugnada, en cuanto permite que las comisiones del Congreso local soliciten la presencia de cualquier uno de los servidores públicos de los entes estatales, cuando sea necesario para ilustrar su juicio en el despacho de los asuntos a su cargo, se discute un proyecto de ley o se estudie un negocio de su competencia o se requiera para responder interpellaciones y preguntas, viola el principio de división de poderes y sujeta al resto de servidores públicos estatales a una facultad arbitraria del Congreso local?</p>	<p>PRIMERO. Es parcialmente procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se sobrese en la presente acción de inconstitucionalidad, respecto de la promulgación del Decreto Número 65-581, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el seis de junio de dos mil veintitrés, atribuida al Poder Ejecutivo de dicho estado.</p> <p>TERCERO. Se reconoce la validez del artículo 47, numeral 1, de la Ley Sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas reformado mediante el citado decreto.</p> <p>CUARTO. Se declara la invalidez del artículo 130, numerales 1 y 3, incisos b) y g), de la Ley Sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, reformado mediante el aludido decreto, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutive al congreso de dicho estado.</p> <p>QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta.</p>	<p>Apartado de competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad y legitimación: a favor</p> <p>Causas de improcedencia y sobreseimiento: a favor</p>	<p>Yo quisiera pronunciarme en contra de este apartado. Creo que las violaciones al procedimiento legislativo no resultan relevantes para el estudio sobre una posible contradicción entre la norma impugnada y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La acción de inconstitucionalidad (pues) no es proplemante un juicio y no se puede hacer valer en ella atribuciones, facultades o derechos de algún grupo en concreto como pudiera ser una fracción parlamentaria o un grupo parlamentario.</p> <p>La acción de inconstitucionalidad es un medio de control abstracto de constitucionalidad que no permite la revisión de casos concretos y en el que únicamente se debiera analizar la congruencia entre la norma impugnada y la Constitución Federal. Por ello, las violaciones al procedimiento como sustento para invalidar una ley deberían restringirse únicamente a las hipótesis en las que la propia Constitución establece una regla para la aprobación de una norma y esta es violada.</p> <p>Fuera de esos supuestos, el procedimiento legislativo (pues) no es materia de control de constitucionalidad.</p>	<p>Unanimidad de votos</p>
<p>Acción de inconstitucionalidad 79/2023</p> <p>Ponente: Layne Potiek</p> <p>Resuelto: 14/05/2024</p>	<p>Administrativa</p>	<p>La invalidez de diversas disposiciones de la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad de 14 de febrero de 2023, mediante Decreto 204.</p>	<p>1. ¿Los artículos 1, fracción IX, en su porción normativa "se haya declarado la extinción de dominio, mediante sentencia definitiva, o bien sobre los cuales"; 7, fracciones IV, en la porción normativa "o de extinción de dominio"; VI y XII, en la porción normativa "y extintos"; 32, primer párrafo; 99, fracción III, en su porción normativa "y extinción de dominio"; 105; 115; 123, fracción I; 126, en su porción normativa "y extintos"; y tercero transitorio, en su porción normativa "y/o de extinción de dominio", de la Ley impugnada resultan válidas al regular cuestiones orgánicas, y no previsiones sustantivas o procedimentales en materia extinción de dominio?</p> <p>2. ¿Los artículos 7, fracciones VIII, en la porción normativa "o de extinción de dominio", XIII, en las porciones normativas "causar extinción de dominio" y "en proceso de extinción de dominio", y XVII, en la porción normativa "o de extinción de dominio"; 103; 104; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 114; 116; 120, en la porción normativa "y extinción de dominio"; 124, en la porción normativa "o que se haya declarado su extinción de dominio"; y 125, en su porción normativa "o de extinción de dominio", todos de la Ley impugnada, en cambio, si invaden la competencia del Congreso de la Unión, ya que su contenido se encuentra regulado en la Ley Nacional de Extinción de Dominio y no se trata de normas que armonicen la ley estatal a la nacional o que regulen aspectos orgánicos creando autoridades o especificando funciones necesarias para la implementación de la materia en la entidad?</p> <p>3. ¿El artículo 113 de la ley impugnada, en cuanto prevé la facultad de la Junta de Gobierno, órgano encargado de la administración, junto con el director general, del Instituto Tlaxteca para Devolver al Pueblo lo Robado, de emitir lineamientos para los depositarios que devolvieron la administración de bienes sujetos a extinción de dominio?</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se reconoce la validez de los artículos 1, fracción IX, en su porción normativa "se haya declarado la extinción de dominio, mediante sentencia definitiva, o bien sobre los cuales"; 7, fracciones IV, en su porción normativa "o de extinción de dominio"; VI y XII, en su porción normativa "y extintos"; 32, párrafo primero; 99, fracción III, en su porción normativa "y extinción de dominio"; 105; 112 en sus porciones normativas "as personas que funjan como depositarios que tengan administración de bienes deberán cumplir con las disposiciones establecidas en el presente ordenamiento legal" y ", así como los lineamientos que expida la junta de gobierno."; 115; 120, en su porción normativa "y extinción de dominio"; 123, fracción I; 126, en su porción normativa "y extintos", y transitorio tercero, en su porción normativa "y/o de extinción de dominio"; de la ley para la administración y destino de bienes asegurados, abandonados, decomisados y extinción de dominio del Estado de Tlaxcala.</p> <p>TERCERO. Se declara la invalidez de los artículos 7, fracciones VIII, en su porción normativa "o de extinción de dominio", XII, en sus porciones normativas "causar extinción de dominio" y "en proceso de extinción de dominio", y XVII, en su porción normativa "o de extinción de dominio"; 103, 104, del 106 al 112, 113, en su porción normativa "el depositario que no rinda el informe mensual será separado de la administración. Quienes queden en posesión de los inmuebles, no podrán enajenar, arrendar o gravar los inmuebles a su cargo, y estarán obligados a observar las disposiciones legales aplicables"; 114, 116, 124, párrafo primero en su porción normativa "o que no se haya declarado su extinción de dominio"; y 125, en su porción normativa "o de extinción de dominio", de la citada ley para la administración y destino de bienes asegurados, abandonados, decomisados y extinción de dominio del Estado de Tlaxcala, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutive al congreso de dicho estado.</p> <p>CUARTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del estado de Tlaxcala, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta.</p>	<p>Apartado de competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad: a favor</p> <p>Legitimación: en contra</p> <p>Causas de improcedencia y fijación de la litis: a favor</p> <p>Subapartado VI.1.: a favor del proyecto, con voto concurrente por las consideraciones mencionadas.</p> <p>Subapartado VI.2 y VI.3.: A favor del proyecto por distintas consideraciones, por lo que anuncio voto concurrente.</p> <p>Efectos: a favor</p>	<p>Ministra, sobre la legitimación. Yo quisiera manifestarme en contra de aceptar la legitimación de la CNDF, dado que cuenta con facultades para promover acciones de inconstitucionalidad con base en violaciones a derechos humanos, podría argumentarse, en este tema, que se trata de una cuestión que debe ser resuelta en el fondo, pero, en el caso que nos ocupa, la CNDF no hace valer, ningún agravio respecto de violaciones de derechos humanos ni de personas ni de colectividades y se limita a alegar en forma genérica respecto de seguridad jurídica o del principio de legalidad muy tenuemente. Este tipo de argumentos dogmáticos y de formato carecen de eficacia para demostrar la violación al menos en grado presuntivo de un derecho humano. En realidad, tal como se estudia en el proyecto, lo que se plantea es una cuestión competencial propia de una controversia constitucional que pudo haber planteado el Congreso de la Unión, que nada o casi nada tiene que ver con derechos humanos. Por lo anterior, me pronuncio en contra del reconocimiento de la legitimación activa de la CNDF para promover la presente acción de inconstitucionalidad.</p>	<p>Unanimidad de votos</p>
<p>Acción de inconstitucionalidad 111/2023</p> <p>Ponente: Pardo Rebollo</p> <p>Resuelto: 16/05/2024</p>	<p>Administrativa</p>	<p>Invalidez del artículo 151, fracción IX, de la Ley de Movilidad para el Estado de Quintana Roo, reformado mediante Decreto 058, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad de 28 de abril de 2023.</p>	<p>¿Exigir a los conductores que presenten el servicio de transporte contratado a través de plataformas tecnológicas o digitales, una carta de antecedentes no penales transgrede el derecho de igualdad e incide negativamente y también sin suficiente justificación, en la libertad de trabajo?</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se declara la invalidez del artículo 151, párrafo segundo, fracción IX, de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, reformada mediante el decreto número 058, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutive al congreso de dicho estado.</p> <p>TERCERO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartado de competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad y legitimación: a favor</p> <p>Causas de improcedencia y sobreseimiento: a favor</p> <p>Estudio de fondo: a favor</p>	<p>Sin comentarios</p>	<p>Unanimidad de votos</p>
<p>Acción de inconstitucionalidad 227/2023</p> <p>Ponente: Pérez Dayán</p> <p>Resuelto: 16/05/2024</p>	<p>Administrativa</p>	<p>Invalidez del artículo 32, fracción II, de la Ley Número 174, del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública del Estado de Sonora, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad de 22 de noviembre de 2023.</p>	<p>¿El requisito de no haber sido sancionado con pena privativa de libertad por delito doloso, para ingresar al sistema de servicio profesional de carrera de la administración pública local, es contrario a los derechos de igualdad, no discriminación y de acceso a cargos públicos?</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se declara la invalidez del artículo 32, párrafo segundo, fracción II, de la Ley Número 174, del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública del Estado de Sonora, expedida mediante el Decreto Publicado en el Boletín Oficial de dicha entidad federativa el veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutive al congreso de dicho estado, en términos de los apartados VI y VII de esta decisión.</p> <p>TERCERO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, así como el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartado de competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad y legitimación: a favor</p> <p>Causas de improcedencia y sobreseimiento: a favor</p> <p>Estudio de fondo: en contra y voto particular</p> <p>Efectos: en contra</p>	<p>Gracias, Ministra Presidenta. Yo, voy a votar en contra del fondo de este proyecto, porque o, más bien, siguiendo los criterios que he sostenido en otros casos similares, considero que no son correctos los argumentos que sostienen de que se trata de sustentar la inconstitucionalidad del requisito para ocupar cargos públicos relacionados con no tener antecedentes penales o no haber sido sancionado por cometer delitos de carácter doloso. El proyecto creo que está basado o cita como precedentes diversas acciones de inconstitucionalidad que parten de este supuesto, no he participado en ellas (actaro), no coincido. El Congreso de Sonora en uso de su libertad conformativa ha establecido requisitos como los aquí analizados para el acceso al subsistema de ingresos del servicio profesional de carrera en la administración pública. Señala el informe de la legislatura demandada que no se plasman actos discriminatorios, toda vez que quienes funjan como servidores públicos deben reunir cualidades como la probidad, honradez, honestidad y rectitud en su actuar dentro del servicio público, y que únicamente se trata de regular el ingreso al sistema del servicio profesional de carrera tutelando el derecho de los gobernados a tener en sus instituciones a servidores públicos que se conduzcan con apego a la legalidad y a los principios y valores que rigen el ejercicio de la administración de servicios públicos.</p>	<p>Mayoría de ocho votos a favor de la propuesta; el señor Ministro Aguilar Morales, en contra del párrafo 40; la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, con voto en contra de la señora Ministra Btrades Guadarrama, con anuncio de voto particular.</p>

<p>Declaratoria General de Inconstitucionalidad 3/2023</p> <p>Ponente: Ríos Farjat</p> <p>Resuelto: 20/05/2024</p>	<p>Administrativa</p>	<p>Secreto bancario oponible a investigación de FGR</p>	<p>Artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito que señala "[...] El Procurador General de la República o el servidor público en quien delegue facultades para requerir información, para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad del imputado. [...]".</p>	<p>Se desestimara y se archivara, al no haberse alcanzado la votación calificada.</p>	<p>Apartados de competencia, legitimación, procedencia y elementos necesarios para resolver: A favor</p> <p>Estudio de fondo: en contra</p>	<p>Yo no comparto tampoco el sentido del proyecto que propone la declaración de inconstitucionalidad del artículo 142, Fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito que faculta a la Fiscalía General de la República para obtener información bancaria sin orden judicial porque lo equipara con un acto de molestia que debe cumplir con los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, partiendo de una premisa equivocada toda vez que la solicitud de información no afecta la esfera jurídica del gobernado. No se debe pasar por alto el objetivo que tuvo la reforma del treinta y cinco al artículo 117 –actual artículo 142– de la Ley de Instituciones de Crédito, en la que se incluyó a la Procuraduría –hoy Fiscalía General de la República– entre los entes que pueden solicitar información, esta reforma obedeció a la necesidad del combate de las operaciones con recurso de procedencia ilícita, que es un delito que más aprovecha el llamado "secreto bancario".</p> <p>En la exposición de motivos de esa reforma, la legislatura motivó suficientemente las razones por las cuales la entonces Procuraduría tendría que tener la facultad de solicitar información bancaria, por lo que no se debe equiparar con un acto de molestia.</p>	<p>Apartados de competencia, legitimación, procedencia y elementos necesarios para resolver: Unanimidad</p> <p>Estudio de Fondo: Mayoría de seis votos a favor de la propuesta; al no haberse alcanzado la votación calificada se desestima y se archiva.</p>
<p>Acción de Inconstitucionalidad 226/2023</p> <p>Ponente: Pardo Rebolledo</p> <p>Resuelto: 20/05/2024</p>	<p>Administrativa</p>	<p>Requisitos para ser director general del IMPLAN (no haber sido condenado por delito doloso)</p>	<p>Artículo 33, fracciones III y IV, de la Ley Orgánica del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Municipal de Planeación de Delicias, Chihuahua, en las porciones normativas que establecen como requisitos de acceso a la titularidad de la Dirección General del IMPLAN.</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se declara la invalidez de del artículo 33, fracciones III y IV, en su porción normativa "y no haber sido inhabilitado para ejercer funciones como servidor público;" de la Ley Orgánica del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Municipal de Planeación de Delicias, Chihuahua.</p> <p>TERCERO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad, legitimación y causas de improcedencia y sobreseimiento: A favor</p> <p>Estudio de fondo: en contra</p> <p>Efectos: en contra</p>	<p>Fundamentalmente porque se refiere esta previsión a el resguardo de un bien jurídico que es el servicio público.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad, legitimación y causas de improcedencia y sobreseimiento: unanimidad</p> <p>Estudio de fondo: mayoría de diez votos a favor de la propuesta; la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, en contra de metodología y algunas consideraciones con voto en contra de la señora Ministra Batres Guadarrama, con precisiones</p> <p>Efectos: mayoría de diez votos a favor de la propuesta</p>
<p>Controversia constitucional 31/2023</p> <p>Ponente: Ministro Aguilar Morales</p> <p>Resuelto: 21/05/2024</p>	<p>Administrativa</p>	<p>Juicio de político contra el Gobernador de Nuevo León, Samuel García.</p>	<p>a) El Acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, dictado por la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado de Nuevo León en el expediente número 16283/XXVI, por el que se determina que es procedente la denuncia de juicio político presentada en contra del Titular del Poder Ejecutivo del Estado; y,</p> <p>b) La Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo León y el artículo 203, de la Constitución local.</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la controversia constitucional.</p> <p>SEGUNDO. Se reconoce la validez de la Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el veintitrés de abril de dos mil veintinueve.</p> <p>TERCERO. Se declara la invalidez del artículo 203, párrafo segundo, de la Constitución del Estado de Nuevo León, en su porción normativa "el acusado queda por ese solo hecho separado de su cargo".</p> <p>CUARTO. Se reconoce la validez del acuerdo de 31 de enero de 2023 dictado por la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado de Nuevo León, en el expediente respectivo.</p> <p>QUINTO. Publíquese esta ejecutoria en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León y en el Semanario Judicial de la Federación.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas, actos u omisiones reclamadas, oportunidad, legitimación activa y legitimación pasiva: A favor</p> <p>Causas de improcedencia y sobreseimiento: A favor</p> <p>Estudio de fondo: Por la invalidez del acuerdo.</p>	<p>Yo estaría a favor con un voto concurrente. Concojo que el proyecto en que, que propone declarar infundada las causas de improcedencia manifestadas por el Congreso del Estado de Nuevo León. Comparto la causa de improcedencia respecto de la falta de interés legítimo del Gobernador para acudir a la controversia, y se califique como infundada porque la acreditación del principio de agravio en su esfera de competencia se relaciona con el fondo del asunto.</p> <p>Concedo igualmente en que el motivo de improcedencia relativo a que el acto impugnado no tiene el carácter de definitivo, se declare como infundado porque el principio de afectación de la competencia del Gobernador radica en el acuerdo de inicio del juicio político instaurado en su contra, conforme al diseño normativo de ese procedimiento que permite la eventual separación de su cargo con la simple aprobación de la acusación por parte del Congreso del Estado; sin embargo, me separo de las consideraciones relativas a que el inicio del procedimiento del juicio político por parte de la Legislatura Estatal, implica una afectación irrestricta a la esfera de competencias del Ejecutivo Local, en cuanto a su facultad exclusiva para sancionar, promulgar y publicar leyes o decretos sin órdenes externas de otros órganos de poder.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas, actos u omisiones reclamadas, oportunidad, legitimación activa y legitimación pasiva: unanimidad</p> <p>Causas de improcedencia y sobreseimiento: Unanimidad</p> <p>Estudio de fondo: mayoría de 8 votos, en el sentido de que el acuerdo respectivo es válido.</p>
<p>Acción de Inconstitucionalidad 159/2021</p> <p>Ponente: Ministro Aguilar Morales</p> <p>Resuelto: 23/05/2024</p>	<p>Administrativa</p>	<p>Impugnación de artículos de la ley de pensiones y servidores públicos del Estado de Jalisco, que establecen un nuevo límite máximo para las pensiones vigentes, por violar el principio de irretroactividad. Al desconocer derechos adquiridos por los pensionados al amparo de la anterior legislación.</p>	<p>Los artículos cuarto, quinto y sexto transitorios del Decreto 28439/LXII/21, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Pensiones y de la Ley para los Servidores Públicos, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, así como del párrafo sexto, del artículo cuarto transitorio, del Decreto 22862/LVII/09, modificado por el Decreto antes mencionado, publicado en el Periódico Oficial de la citada entidad federativa del nueve de septiembre de dos mil veintinueve.</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y fundada la acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se declara la invalidez de los artículos cuarto, quinto y sexto transitorios del Decreto 28439/LXII/21, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Pensiones y de la Ley para los Servidores Públicos, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, así como del párrafo sexto, del artículo cuarto transitorio, del Decreto 22862/LVII/09, modificado por el Decreto antes mencionado, publicado en el Periódico Oficial de la citada entidad federativa del nueve de septiembre de dos mil veintinueve.</p> <p>TERCERO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad, legitimación y causas de improcedencia y sobreseimiento: A favor</p> <p>Estudio de fondo: A favor con el proyecto modificado</p> <p>Efectos: En contra de la extensión, con el proyecto original.</p>	<p>Sin comentarios</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad, legitimación y causas de improcedencia y sobreseimiento: unanimidad</p> <p>Estudio de fondo: ocho votos a favor de la propuesta, el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena, en contra de consideraciones y anuncio de voto concurrente; el señor Ministro González Alcántara Carrancá anuncia voto concurrente; la señora Ministra Esquivel Mossa reserva su derecho a formular voto concurrente; la señora Ministra Ortiz AHF anuncia voto concurrente; el señor Ministro Aguilar Morales, con precisiones; la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, en contra de algunas consideraciones y con reserva de formular voto concurrente.</p>
<p>Acción de Inconstitucionalidad 191/2023</p> <p>Ponente: Ministro González Alcántara Carrancá</p> <p>Resuelto: 23/05/2024</p>	<p>Administrativa</p>	<p>Constitucionalidad de requisitos para ser Magistrado del TIAEA y Fiscal General del Estado de Aguascalientes (mexicano por nacimiento)</p>	<p>Se tienen por impugnados los artículos 50 B, 54, 56 B y 59, en las porciones normativas que se precisan, todos de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, adicionados o reformados mediante Decreto número 405, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el 8 de agosto de 2023. Asimismo, se tiene por impugnada una omisión legislativa relativa a los artículos 50 B y 54, consistente en que no expresan la manera en que se aplicará la elección de las magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Aguascalientes.</p>	<p>PRIMERO. Es procedente pero infundada la acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se desestima la impugnación del artículo 59, primer párrafo, fracción I, en la porción "por nacimiento".</p> <p>TERCERO. Se reconoce la validez de los artículos 50 B, segundo párrafo, en la porción "de manera escalonada"; 56 B, proemio, en la porción "plazo de 30 días naturales"; y 59, primer párrafo, fracciones II, III, IV y V todos de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.</p> <p>CUARTO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas impugnadas, oportunidad y legitimación, causas de improcedencia y sobreseimiento: A favor</p> <p>Estudio de fondo: En contra, por considerarlo una acción excesiva de esta Corte el asumir la suplencia del objeto de la litis.</p>	<p>Yo me estaré separando de esta anulación oficiosa de porciones normativas que se hace, cuyo contenido no fue cuestionado por un ente legitimado para ello. La acción de inconstitucionalidad es un mecanismo de control que sirve para expulsar del orden jurídico las normas generales que sean contrarias a la Constitución o a los tratados internacionales de los que México es parte, cuyo objeto fundamental es el control abstracto y su efecto es la consecuente anulación de las normas cuestionadas por parte legitimada.</p> <p>Conforme al último párrafo del artículo 19 de la ley reglamentaria, de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo único que puede examinarse oficiosamente son las causas de improcedencia. El artículo 39 de la ley referida dispone que, al dictar sentencia, esta Corte debe corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y examinar en su conjunto los razonamientos de las partes a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero en momento alguno se faculta para invalidar disposiciones legales con argumentos que no se hicieron valer en la acción de inconstitucionalidad.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas impugnadas, oportunidad y legitimación, causas de improcedencia y sobreseimiento: unanimidad</p> <p>Estudio de fondo: por lo que se refiere al artículo 50 B, existe unanimidad de 8 votos a favor de la propuesta de reconocimiento de validez y, en cuanto al artículo 54, párrafo primero, en la porción normativa respectiva, existe una mayoría de 5 votos a favor del proyecto en sus términos, la señora Ministra Ortiz AHF vota por el sobreseimiento; la señora Ministra Batres Guadarrama, por tener por no impugnada la norma.</p>

<p>Controversia constitucional 187/2020</p> <p>Ponente: Ministro Pérez Dayán</p> <p>Resuelto: 28/05/2024</p>	<p>Administrativa</p> <p>Invalidez de diversas disposiciones de la Constitución Política del mencionado Estado, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad de 19 de octubre de 2020, mediante Decreto 110.</p>	<p>¿Se actualizaron violaciones al procedimiento legislativo con potencial invalidante?</p>	<p>PRIMERO. Se sobreesee respecto de los artículos 57, con excepción de su décimo primer párrafo, 58, primer párrafo, 65 y 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como los artículos transitorios tercero, cuarto, séptimo, octavo, noveno y décimo segundo, del Decreto publicado en el Periódico Oficial de la Entidad el diecinueve de octubre de dos mil veinte, respecto a la porción normativa precisada en la presente resolución.</p> <p>SEGUNDO. Es parcialmente fundada la presente controversia constitucional.</p> <p>TERCERO. Se declara la validez de los artículos 57, párrafo décimo primero, 59 y décimo transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, del Decreto publicado en el Periódico Oficial de la Entidad el diecinueve de octubre de dos mil veinte, respecto a la porción normativa precisada en la presente resolución.</p> <p>CUARTO. Se declara la invalidez de los artículos 49, fracción VII y 58 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, reformados mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial de la Entidad el diecinueve de octubre de dos mil veinte, respecto a las porciones normativas precisadas en la presente resolución.</p> <p>QUINTO. La declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Baja California.</p> <p>SEXTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad, legitimación activa y pasiva: a favor</p> <p>Causas de improcedencia y sobreesimiento: a favor</p> <p>Estudio de fondo: en contra</p> <p>Efectos: A favor</p>	<p>Yo me manifesté también en contra del estudio de fondo. No comparto el sentido del proyecto y me aparto de las consideraciones realizadas en los párrafos 84 a 142 por desnaturalizar el objeto de las controversias constitucionales, pues, en este caso, se debería analizar la invasión de la esfera competencial entre dos poderes de una misma entidad federativa y no las probables violaciones cometidas durante el procedimiento legislativo.</p> <p>Se alega la inconstitucionalidad del decreto pero no se cumplió con la formalidad de llamar al Poder Judicial con la antelación debida para que acudiera a la sesión en la que se discutirían las reformas relativas a la organización, funcionamiento y competencia de la administración de justicia para que, a través de un representante, expresara su opinión acerca de las modificaciones propuestas.</p> <p>Se acusa violación al procedimiento legislativo por falta de notificación al Poder Judicial con la debida anticipación a la sesión del siete de julio de dos mil veinte; sin embargo, se observa que hubo dos notificaciones: la primera, el primero de julio, en la que se convocó al Poder Judicial y se hizo de su conocimiento el orden del día de la sesión, por lo que se cumplió con el anuncio de la fecha de sesión; y la segunda, el día siete del mes de julio, en la que se convocó al Poder Judicial.</p>	<p>Mayoría calificada de votos</p>
<p>Acción de Inconstitucionalidad 217/2020 y su acumulada 249/2020</p> <p>Ponente: Ministro Laynez Potosiek</p> <p>Resuelto: 03/06/2024</p>	<p>Administrativa</p> <p>Invalidez de diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor y del Código Penal Federal publicados en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020.</p>	<p>1. ¿Los artículos 114 Quáter y 114 Quinqués de la LFDA, que regulan las hipótesis que autorizan la elusión o evasión de medidas tecnológicas de protección (MTP) para no incurrir en infracciones a la LFDA, y las limitantes a esas autorizaciones a través de ciertas condicionantes, transgreden el derecho a la propiedad privada y, por interdependencia, a la libertad de trabajo, la libertad de expresión, el derecho a beneficiarse de la cultura y el progreso científico y tecnológico?</p> <p>2. ¿El artículo 114 Octes, fracciones I, inciso a), numeral 1 y II, de la LFDA, conforme a su interpretación sistemática, resulta claro respecto del tipo de interés que debe tener el solicitante, la forma en que el proveedor de servicios va a valorar si se cometió la infracción y en que se restaurarán los contenidos descargados?</p> <p>3. ¿El artículo 114 Octes, fracción II, inciso b), de la LFDA, es feiso de los principios de legalidad y seguridad jurídica, en tanto faculta al proveedor de servicios en línea a descargar contenidos o eliminar de sus plataformas los accesos a éstos en forma unilateral por estimarlos violatorios de disposiciones legales?</p> <p>4. ¿El artículo 114 Octes, fracción I, inciso a), segundo párrafo, de la LFDA, viola el principio de seguridad jurídica, al establecer que los proveedores de servicios en línea deberán tomar las medidas razonables para prevenir que el mismo contenido que se considera infractor se vuelva a subir en el sistema o red controlado, sin prever qué se va considerar una "medida razonable" convirtiéndolo esa disposición en una amplia habilitación en favor de los proveedores de servicios en línea?</p> <p>5. ¿La regulación del procedimiento de remoción, retro, eliminación, inhabilitación o suspensión del acceso a materiales o contenidos alojados en los sistemas o redes viola el debido proceso, al no haberse establecido un procedimiento de impugnación del Decreto 532/2022 por el que se emite la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, que dentro de sus innovaciones establece:</p>	<p>PRIMERO. Es procedente, pero infundada la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada.</p> <p>SEGUNDO. Se desestima en la presente acción de inconstitucionalidad respecto del artículo 114 Octes, fracción II, inciso b), de la Ley Federal del Derecho de Autor.</p> <p>TERCERO. Se reconoce la validez de los artículos 114 Quáter, 114 Quinqués, 114 Octes, fracciones I, inciso b), II, incisos a), numeral 1 y párrafo segundo, d) y e), y II, 232 Bis, 232 Ter, 232 Quinqués y 232 Sexes, de la Ley Federal del Derecho de Autor, así como respecto a los artículos 424 Bis, 427 Bis, 427 Ter, 427 Quáter y 427 Quinqués del Código Penal Federal, adicionados mediante los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el primero de julio de dos mil veinte, en términos del apartado VI de esta decisión.</p> <p>CUARTO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>A favor</p>	<p>Por la invalidez de todas las disposiciones incluidas en el proyecto en este punto.</p>	<p>Mayoría de seis votos por el reconocimiento de validez del artículo 114 Octes, fracción II, inciso b), y el de la Ley Federal del Derecho de Autor y se obtiene, también, una mayoría de seis votos por el reconocimiento de validez del artículo 114 Octes, fracción II, inciso a), párrafo segundo, de la Ley Federal del Derecho de Autor.</p>
<p>Acción de Inconstitucionalidad 118/2022 y su acumulada 121/2022</p> <p>Ponente: Ministro Pérez Dayán</p> <p>Resuelto: 04/06/2024</p>	<p>Laboral</p> <p>Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, publicada mediante Decreto 532/2022 en el Diario Oficial del Gobierno de esa entidad federativa el 21 de julio de 2022.</p>	<p>1) Exige como requisito la edad de los beneficiarios ascendentes para otorgar la prestación del servicio médico;</p> <p>2) Decreta la cancelación de la pensión de viudez en el supuesto de que la beneficiaria contraiga nupcias o inicie un concubinato;</p> <p>3) Incorpora un salario regulador para determinar el monto de las pensiones, concepto equivalente al 85% del promedio de los salarios cotizados durante los últimos veinte años para las personas que ingresen a trabajar;</p> <p>4) Incrementa anualmente el porcentaje de aportación del trabajador de un 8% a un 15%;</p> <p>5) Aumenta los años de edad y de servicio para obtener una jubilación, pues antes exigía 55 años de edad a las mujeres y 60 para los hombres, en ambos supuestos, 30 años de cotización; mientras que la ley impugnada exige 65 años de edad y 35 de cotización, sin distinción por el género.</p> <p>6) Incrementa de 15 a 20 años de cotización, y de 60 a 65 años de edad, el acceso al derecho a obtener una pensión.</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se declara la invalidez del Decreto 532/2022 por el que se emite la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en términos del apartado V de este fallo.</p> <p>TERCERO. La declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Yucatán, dando lugar a la reviviscencia Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, de sus Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal, abrogada mediante Decreto 532/2022 publicado en el medio de estudio oficial estatal el veintinueve de julio de dos mil veintidós por el que se expidió la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, tal como se precisa en el apartado VII de esta determinación.</p> <p>CUARTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, oportunidad, legitimación, causas de improcedencia y precisión de la litis: A favor</p> <p>Tema 1.3.3.1, examen de proporcionalidad, aumento de la edad mínima: A favor, con consideraciones distintas y en contra de la metodología.</p> <p>Tema 2: a favor</p> <p>Tema 3: a favor</p> <p>Efectos: A favor del proyecto y en contra de la reviviscencia por no corresponder a una facultad de esta Suprema Corte.</p>	<p>Yo estoy a favor del proyecto, pero voy a separarme de algunas consideraciones señaladas en los párrafos 123 y 127 y también voy a pronunciamme en contra de la metodología establecida en los párrafos 138 a 303.</p> <p>Comparto el sentido del proyecto, porque deja claro que las normas impugnadas al prever la implementación de un nuevo régimen de seguridad social en el Estado de Yucatán, adoptaron medidas regresivas, transgrediendo con ellas el principio de progresividad y no regresividad, que dispone: "que una norma ulterior no puede disminuir los niveles de acceso y disfrute de los derechos concedidos con anterioridad a su expedición".</p> <p>Comparto el sentido del proyecto, porque deja claro que las normas impugnadas al prever la implementación de un nuevo régimen de seguridad social en el Estado de Yucatán, adoptaron medidas regresivas, transgrediendo con ellas el principio de progresividad y no regresividad, que dispone: "que una norma ulterior no puede disminuir los niveles de acceso y disfrute de los derechos concedidos con anterioridad a su expedición".</p>	<p>Tema 1.3.3.1, examen de proporcionalidad, aumento de la edad mínima, existe unanimidad de 11 votos a favor de la propuesta de reconocimiento de validez; votan en contra de la metodología el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena, la señora Ministra Esquivel Mossa, el señor Ministro Aguilar Morales, el señor Ministro Pardo Rebollo, la señora Ministra Batres Guadarrama; reserva de voto concurrente de la señora Ministra Ríos Farjat y también, en contra de la metodología la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, en este apartado y en contra de consideraciones, anuncio de voto concurrente, general.</p> <p>Por lo que se refiere al siguiente apartado, aumento de los periodos de cotización, en cuanto a la propuesta de invalidez, existe unanimidad de votos en cuanto a los artículos 110, 111, Y 113. Y por lo que se refiere a los artículos transitorios, voto se indica superan el examen de proporcionalidad, existe unanimidad de votos, voto en contra de metodología de la señora Ministra Ortiz Ahín.</p> <p>Por lo que se refiere al apartado 1.3.3.1, aumento de cuotas de seguridad social, existe solamente una mayoría de seis votos a favor de la propuesta de declaración de invalidez del artículo 20, fracciones I y II, y transitorio octavo, por lo que se desestima respecto de estos.</p> <p>Por lo que se refiere al punto 1.3.3.4 salario regulador, existe una mayoría de nueve votos a favor de la propuesta de invalidez del artículo 13, fracción XXI, incluido, el señor Ministro Laynez Potosiek, en contra de la deficiencia la mayoría vota por la</p>
<p>Acción de Inconstitucionalidad 136/2022</p> <p>Ponente: Ministra Esquivel Mossa</p> <p>Resuelto: 04/06/2024</p>	<p>Civil</p> <p>Interdicción de personas con discapacidad en el Código Civil de Zacatecas.</p>	<p>Artículo 44 del Código Civil de Zacatecas, reformado mediante Decreto No. 113, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 27 de agosto de 2022.</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se declara la invalidez del artículo 44 del Código Civil para el Estado de Zacatecas reformado mediante el Decreto No. 113, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, de conformidad con el apartado VI de esta ejecutoria.</p> <p>TERCERO. La declaratoria de invalidez surtirá sus efectos al día siguiente de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso del Estado de Zacatecas, en la inteligencia que ese Congreso deberá legislar en los términos precisados en el apartado VI y VII de esta resolución.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad, legitimación y causas de improcedencia y sobreesimiento: A favor</p> <p>Estudio de fondo: A favor, con voto concurrente, por estar en contra de la metodología.</p> <p>Efectos: En contra de la remisión a consulta, (por la validez), por la invalidez inmediata.</p>	<p>Yo voy a manifestar en contra del estudio de fondo. En general, comparto el sentido del proyecto que propone invalidar el artículo 44 del Código Civil de Zacatecas, que aún prevé la figura de interdicción para personas con discapacidad en contra de lo previsto en la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero me aparto de la metodología, específicamente, de los párrafos 28 y 29 que plantean estudiar, primero, el argumento relativo a la falta de consulta en materia de personas con discapacidad como una formalidad esencial del procedimiento legislativo en vez de estudiar directamente los argumentos que hace valer la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, tendientes a demostrar la inconstitucionalidad de la norma impugnada.</p> <p>La acción de inconstitucionalidad es un mecanismo de control abstracto que sirve para equiparar el orden jurídico las normas generales que sean contrarias a nuestra Constitución Federal. En este sentido, se faculta a la Suprema Corte para determinar si la norma es contradictoria con el Texto Constitucional y entonces declarar su inconstitucionalidad. Es decir, se le otorga competencia para resolver el fondo del asunto, pero no se le concede, al menos no expresamente, competencia para revisar el fondo del asunto como el procedimiento legislativo en sí.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad, legitimación y causas de improcedencia y sobreesimiento: Unanimidad</p> <p>Estudio de fondo: unanimidad de votos a favor de la propuesta; el señor Ministro Pardo Rebollo anuncia voto concurrente y en contra del estándar para el desarrollo de la consulta; la señora Ministra Batres Guadarrama, anuncio de voto concurrente y en contra de la metodología; la señora Ministra Ríos Farjat anuncia voto adalatorio.</p> <p>Efectos: Yo, por lo que se refiere al efecto indicado en el sentido de que la regulación que estime correspondiente legislar el Congreso de Zacatecas, deberá tomar en cuenta la inconvencionalidad de la figura del estado de interdicción decretada por este Tribunal, existen cinco votos en los términos del proyecto, y algunos votos en contra y otros vinculados o relacionados con vincular después de la postergación, pero en los términos del proyecto son cinco votos.</p>

<p>Acción de inconstitucionalidad 179/2023</p> <p>Ponente: Ministro Esquivel Mossa</p> <p>Resuelto: 04/06/2024</p>	<p>Civil</p> <p>Consulta a personas con discapacidad (Ley para la inclusión al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de Morelos).</p>	<p>Decreto por el que se expide la Ley para la Inclusión al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de Morelos, publicado el 19 de julio de 2023 en el Periódico Oficial de la entidad federativa "Tierra y Libertad".</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se reconoce la validez de la Ley para la Inclusión al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de Morelos, publicado el diecinueve de julio de dos mil veintitrés, en el Periódico Oficial de la entidad federativa "Tierra y Libertad".</p> <p>TERCERO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y en el Periódico Oficial del Estado de Morelos.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad y causas de improcedencia y sobreesimiento: A favor</p> <p>Estudio de fondo: En contra</p> <p>Efectos: A favor</p>	<p>Nuevamente (para) se propone referir una facultad que no está expresada en nuestra Constitución, no estamos contrastando un texto constitucional o una reforma frente a un texto constitucional, sino determinando bajo este criterio sumamente arbitrario de que si existe o no potencial invalidante calificando el proceso legislativo, en este caso, a la consulta si siquiera la realización de la consulta que se hizo, sino cómo se realizó o cómo debió haberse realizado la consulta, lo cual me parece ya un exceso enorme, más aún cuando se trata de la invalidación de la Ley para la Inclusión al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de Morelos, es decir, una ley que busca justamente hacer cumplir normativas garantistas para un sector social que requiere de esta normativa y, por cierto, no es el que está solicitando, igual que en otros casos, la invalidez de esta ley.</p> <p>La Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoció en su demanda la conformidad de la ley que se impugna con la propia Constitución y los tratados internacionales al declarar (citar) "la nueva Ley para la Inclusión y al Desarrollo de las Personas con Discapacidad local, contiene diversos cambios y actualizaciones respecto del paradigma de la discapacidad, especialmente porque se trata de un modelo social de la discapacidad; basta</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad, legitimación y causas de improcedencia y sobreesimiento: unanimidad</p> <p>Estudio de fondo: Mayoría de siete votos en contra de la propuesta y por el reconocimiento de validez de la ley impugnada.</p> <p>Efectos: unanimidad</p>
<p>Acción de inconstitucionalidad 165/2023 y su acumulada 168/2023</p> <p>Ponente: Ministro Esquivel Mossa</p> <p>Resuelto: 06/06/2024 SE RETORNO</p>	<p>Administrativa</p> <p>RETORNO: Ministro Javier Laynez</p>	<p>Artículo 12 Bis de la Ley de Salud del Estado de Morelos, reformado mediante decreto 1020, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el 5 de julio de 2023.</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se declara la invalidez del artículo 12 Bis de la Ley de Salud del Estado de Morelos, reformado mediante el DECRETO NÚMERO MIL VEINTE, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el cinco de julio de dos mil veintitrés, lo cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Morelos, de conformidad con los apartados VII y VIII de esta decisión.</p> <p>TERCERO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de la norma impugnada, oportunidad, legitimación y causas de improcedencia: A favor</p> <p>Estudio de fondo: Con el proyecto ajustado, como propone la ponente.</p>	<p>Yo me... Creo que es un tema muy interesante en muchos aspectos. Me pronuncio a favor del sentido del proyecto, en tanto que coincido con los Ministros en que no se está garantizado el derecho a la salud de la población de Morelos al intentar garantizar el derecho de las personas objetoras de conciencia. Es un tema interesante porque se nos propone un conjunto de lineamientos para calificar a una legislación un caso como este, y digo que es interesante porque tratándose de un derecho social es difícil que no puedan establecerse un conjunto de medidas que necesariamente tienen que ser positivas, es decir, en un caso (quizá) de derecho individual como es la propia objeción de conciencia, en realidad basta fundamentalmente con medidas negativas, pero en el caso de la garantía de un derecho social tiene que establecerse medidas positivas y creo que el proyecto busca establecerlas garantizando o dictado, en este caso, al Congreso del Estado este conjunto de lineamientos mínimos.</p> <p>Yo estaría de acuerdo, pero creo (considero) que puede ser excesivo para efectos normativos porque no nos corresponde en este caso a la Suprema Corte, determinar esos parámetros. En todo caso, creo que los debe el Congreso del Estado.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de la norma impugnada, oportunidad, legitimación y causas de improcedencia: Unanimidad</p> <p>Estudio de fondo: mayoría de siete votos en contra de las consideraciones.</p> <p>RETORNO</p>
<p>Acción de inconstitucionalidad 190/2023</p> <p>Ponente: Ministro Laynez Potisek</p> <p>Resuelto: 06/06/2024</p>	<p>Penal</p>	<p>Artículo 178 Bis del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, adicionado mediante Decreto Número 413, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa.</p>	<p>PRIMERO. Es procedente la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se desestima la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>TERCERO. Publíquese esta sentencia en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, oportunidad, legitimación y causas de improcedencia: A favor</p> <p>Estudio de fondo: En contra, creo que está garantizado el principio de taxatividad.</p>	<p>En contra, creo que está garantizado el principio de taxatividad.</p>	<p>Apartados de competencia, oportunidad, legitimación y causas de improcedencia: Unanimidad</p> <p>Estudio de fondo: mayoría de cinco votos a favor de la propuesta, se desestima.</p>
<p>Acción de inconstitucionalidad 101/2022</p> <p>Ponente: Ministra Ortiz Ahí</p> <p>Resuelto: 10/06/2024</p>	<p>Administrativa</p>	<p>Invalidez de diversas disposiciones de la Ley Sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del mencionado Estado, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad de 15 de junio de 2022, mediante Decreto 65-172.</p>	<p>PRIMERO. Es parcialmente procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se sobreescribe en la presente acción de inconstitucionalidad respecto del artículo 29, párrafo 2, de la ley sobre la organización y funcionamiento internos del congreso del estado libre y soberano de Tamaulipas.</p> <p>TERCERO. Se declara la invalidez del Decreto número 65-172, mediante el cual se reformaron los artículos 3, párrafo 3 y 29, párrafo 2, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el quince de junio de dos mil veintidós, lo cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al congreso de dicho estado.</p> <p>CUARTO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad, legitimación: A favor.</p> <p>Causas de improcedencia y sobreesimiento: A favor.</p> <p>Estudio de fondo: Con el proyecto, por distintas consideraciones.</p> <p>Efectos: A favor</p>	<p>Gracias, Ministra Presidenta. Yo me aparto, bueno, voy en el sentido del proyecto; sin embargo, me aparto de sus consideraciones, creo que las presuntas violaciones al procedimiento legislativo no resultan relevantes para el estudio sobre la posible contradicción entre la norma impugnada y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como en otras ocasiones, señalo que no comparto que esta Suprema Corte realice un análisis exhaustivo del procedimiento legislativo a la luz de un concepto creado por este Tribunal ajeno a nuestra Constitución, como es el de democracia deliberativa.</p> <p>Y también me opongo que la acción de inconstitucionalidad no es un recurso ni una especie de amparo para las minorías legislativas con el fin de que hagan valer sus derechos de participar en un debate, se trata de la acción de inconstitucionalidad, desde su origen y su concepción de un medio de control abstracto de constitucionalidad que no permite la revisión de casos concretos y en el que únicamente se debería analizar la congruencia entre la norma impugnada y la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso concreto, (además) hay violaciones directas al principio de legalidad que corresponden (además) a la violación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.</p>	<p>Unanimidad de once votos a favor de la propuesta; el señor Ministro González Alcántara Carrancá, en contra de algunas consideraciones: párrafos 118 a 121, 143 a 170, 173 a 176; la señora Ministra Esquivel Mossa, en contra de consideraciones, con anuncio de voto concurrente; la señora Ministra Ortiz Ahí, en contra de consideraciones; el señor Ministro Pardo Rebollo, en contra de algunas consideraciones, en contra de párrafos 118, 120, 121, 143; la señora Ministra Baires Guadarrama, en contra de consideraciones, la señora Ministra Ríos Farjat, en contra de algunas consideraciones; y la señora Ministra Presidenta Píña Hernández, en contra de algunas consideraciones y con consideraciones adicionales.</p>
<p>Acción de inconstitucionalidad 88/2022</p> <p>Ponente: Ministro Laynez Potisek</p> <p>Resuelto: 10/06/2024</p>	<p>Penal</p>	<p>Invalidez de diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad de 27 de mayo de 2022.</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se reconoce la validez de los artículos 60 y 61 bis, párrafo segundo, del Código Penal para el Estado de Querétaro.</p> <p>TERCERO. Se declara la invalidez de los artículos 155, párrafo primero y 183 bis del Código Penal para el estado de Querétaro, reformado mediante la Ley publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintidós de mayo de dos mil veintidós.</p> <p>CUARTO. Se declara la invalidez por extensión del artículo 155, párrafo segundo, tercero y cuarto del Código Penal para el Estado de Querétaro.</p> <p>QUINTO. Las declaratorias de invalidez decretada surtirán sus efectos retroactivos el veintidós de mayo de dos mil veintidós a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al congreso de dicho estado.</p> <p>SEXTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia y oportunidad: A favor.</p> <p>Legitimación: En contra.</p> <p>Fijación de litis: A favor.</p> <p>Estudio de fondo tema 1: A favor.</p> <p>Estudio de fondo tema 2: A favor.</p> <p>Estudio de fondo tema 3: En contra.</p> <p>Efectos: A favor y, en este caso considero que se justifican la competencia, oportunidad y agravios: A favor</p>	<p>Legitimación, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha valorado propiamente violaciones a derechos humanos entre los agravios (obviamente).</p> <p>Estudio de fondo, tema 3: Sí, igualmente tampoco comparto la invalidez del artículo 183 Bis del Código Penal para el Estado de Querétaro.</p> <p>Me parece que, efectivamente, las conductas señaladas implican un dolo en sí mismas, la realización activa de estas conductas implican el dolo en el sujeto que participa activamente en el delito y, por lo tanto, creo que, en uso de su facultad de libertad configurativa del Congreso del Estado está promoviendo una política criminal que ayuda al gobierno del Estado de Querétaro.</p>	<p>Unanimidad de once votos por lo que se refiere al reconocimiento de validez del artículo 60, parte inicial; mayoría de nueve votos por lo que se refiere al reconocimiento de validez de la segunda parte de ese numeral, con voto en contra del señor Ministro González Alcántara Carrancá y de la señora Ministra Ortiz Ahí; y mayoría de siete votos por lo que se refiere al reconocimiento de validez del artículo 61 Bis, párrafo segundo; la señora Ministra Presidenta Píña Hernández voto solo por la invalidez de la parte final de la porción normativa que inicia "en caso de que"; y voto en contra y por la invalidez de la totalidad de ese párrafo, el señor Ministro González Alcántara Carrancá, la señora Ministra Ortiz Ahí y del señor Ministro Aguilar Morales.</p> <p>Tema2.</p> <p>Mayoría de diez votos a favor de la propuesta; el señor Ministro González Alcántara Carrancá anuncia voto concurrente y voto en contra de la señora Ministra Esquivel Mossa.</p>
<p>Recurso de revisión en materia de seguridad nacional 3/2023</p> <p>Ponente: Ministro Aguilar Morales</p> <p>Resuelto: 11/06/2024</p>	<p>Seguridad nacional</p>	<p>Contra de la resolución dictada en el recurso de revisión RRA ***** dictada por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de 20 de septiembre de 2023.</p>	<p>PRIMERO. Es infundado el presente recurso de revisión en materia de seguridad nacional.</p> <p>SEGUNDO. Se confirma la resolución del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, dictada en el recurso de revisión ***** el veinte de septiembre de dos mil veintitrés.</p>	<p>Apartados de antecedentes, competencia, procedencia, legitimidad, oportunidad y agravios: A favor</p> <p>Estudio de fondo: En contra, se pone en riesgo al personal penitenciario.</p>	<p>En contra, se pone en riesgo al personal penitenciario.</p>	<p>Mayoría de siete votos con precisiones de voto parcial de la señora Ministra Ortiz Ahí y del señor Ministro Pardo Rebollo, en los términos que indican; y voto en contra de la señora Ministra Esquivel Mossa y la señora Ministra Baires Guadarrama.</p>

<p>Acción de inconstitucionalidad 136/2023</p> <p>Ponente: Ministra Ríos Farjat</p> <p>Resuelto: 11/06/2024</p>	<p>Administrativa</p> <p>Invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad de 23 de mayo de 2023, mediante Decreto 462.</p>	<p>¿El Decreto 462 impugnado es susceptible de afectar a las personas en situación de discapacidad, para efectos de la obligación del congreso local de consultarlas? 2. ¿El uso de las expresiones discriminatorias "enfermedades mentales" o "trastorno mental", resulta suficiente para declarar la invalidez de los preceptos que las contienen, a pesar de que no restringen el acceso a los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad, sino que implementan un beneficio?</p>	<p>PRIMERO. Es procedente por infundada la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se reconoce la validez de los artículos 67, fracciones I, I incisos g), en su porción normativa "o trastornos mentales" y m) en su porción normativa "trastornos mentales", VIII, en su porción normativa "personas con trastornos mentales", y XI, en su porción normativa "personas con trastornos mentales", así como la del diverso 107, apartados b, fracción V, en su porción normativa "de los trastornos mentales, así como", y d, fracción VI, en su porción normativa "a personas con trastornos mentales", de la ley de asistencia social y protección de derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza, reformados mediante el decreto 462, publicado en el periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés.</p> <p>TERCERO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, oportunidad, legitimación y causas de improcedencia y sobreseimiento: A favor.</p> <p>Estudio: A favor con consideraciones.</p>	<p>Yo estoy a favor del sentido del proyecto, me separo de algunas de sus consideraciones y de la metodología con que se estudia el parámetro de regularidad constitucional del derecho a la consulta.</p> <p>Coincido, bueno, como ha expresado y como resolvió este Pleno en la acción de inconstitucionalidad 180/2024, la consulta previa a personas con discapacidad no es un requisito sine qua non, para cualquier tipo de reforma legislativa que vaya dirigida a beneficiar o no, al conjunto de personas con discapacidad fundamentalmente, cuando se cumple directamente una disposición que promueva de la Convención, de la Convención o del Protocolo sobre los derechos de las personas con discapacidad, pues se entiende que no tiene por qué someterse a consulta. Igualmente, es obvio que este Pleno tiene que tener una disposición a analizar los efectos de esa consulta, pero que en los casos en los que se puede enviar a consulta una medida determinada es porque el Pleno acepta la contingencia de los resultados de esa consulta, es decir, si es positiva o negativa, cualquiera de los dos resultados tendría que ser constitucional, porque si este Pleno mandata a una consulta cuyos resultados van a ser inconstitucionales, va a vivir un efecto permanente de inconstitucionalidad de las normas, sobre el formalismo y no sobre el contenido de las normas. me sé, me sé, me sé, me sé. Gracias, Ministra Presidenta. Yo comparto el sentido del proyecto, en cuanto a que reconozco la validez del artículo 57 Ter de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, pero me separo de ese apartado relacionado con la metodología, específicamente de los párrafos 24 a 42, que asumen la consulta en materia de personas con discapacidad como un requisito procedimental de rango constitucional, de manera que su Omisión constituiría un vicio invalidante del procedimiento legislativo.</p> <p>La acción de inconstitucionalidad, como hemos mencionado en repetidas ocasiones, es un mecanismo de control abstracto que sirve para expulsar del orden jurídico las normas generales contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, se faculta a la Suprema Corte para determinar si la norma contraviene el Texto Constitucional y entonces se declara su inconstitucionalidad, es decir, la Constitución Política le otorga competencia para resolver el fondo del asunto a esta Suprema Corte, pero no le concede competencia o facultad para revisar aspectos formales como el procedimiento legislativo en sí mismo.</p> <p>No obstante, la Suprema Corte ha interpretado que si tiene esa potestad al considerar que la constitucionalidad de una ley depende del procedimiento de rango constitucional en el que se emite. Yo me separo totalmente de la metodología y del análisis que se hace de parámetro de regularidad constitucional, específicamente en los párrafos 38 a 55, dado que difiero de los argumentos respecto de violaciones al proceso legislativo tanto con relación a las reglas de trámite que lo rigen, como las que de manera directa impactarían en el ejercicio de una facultad del Poder Ejecutivo del Estado. Como he mencionado en varias ocasiones, no considero que esta Corte tenga facultad para determinar reglas de la democracia deliberativa que es una categoría ajena a nuestra propia Constitución y, por lo tanto, para dar lugar a analizar si se cumplen dentro de esas reglas la condición de igualdad y libertad que esta Corte ha considerado, deben tener las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso, en este caso, del Estado de Morelos, considero que es una interpretación no regular del principio de mayoría política que está absolutamente determinada en nuestra propia Constitución Política y que no le da un alcance facultativo a esta Corte para imbuirse en el régimen interno democrático de los Congresos de nuestro país; sin embargo, analizando el fondo del asunto, tampoco comparto el planteamiento del actor respecto de los conceptos de invalidez orientados a combatir violaciones de</p>	<p>Apartado de unanimidad de sobreseimiento: Diez votos en sus términos a favor de la propuesta, salvo por lo que se refiere a sobreseer oficiosamente respecto del artículo 6, en las fracciones impugnadas, con voto en contra de la señora Ministra Presidenta Píla Hernández.</p> <p>Mayoría de seis votos en contra de la propuesta y por la invalidez de las normas impugnadas, pero no se alcanza la votación calificada de ocho votos.</p>
<p>Acción de inconstitucionalidad 229/2023</p> <p>Ponente: Ministra Ríos Farjat</p> <p>Resuelto: 13/06/2024</p>	<p>Administrativa</p> <p>Invalidez del artículo 57 Ter, párrafos primero, noveno y décimo, de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad de 6 de noviembre de 2023, mediante Decreto 465.</p>	<p>¿El artículo impugnado es susceptible de afectar a las personas en situación de discapacidad, para efectos de su derecho a la consulta previa?</p>	<p>PRIMERO. Es procedente e infundada la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se reconoce la validez del artículo 57 ter, párrafos primero, en la porción normativa "o que el usuario se encuentre en estado de incapacidad transitoria o permanente", noveno y décimo, en la porción normativa "o que no tiene conciencia de lo que hace", de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, adicionado mediante Decreto número 465, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad el seis de noviembre de dos mil veintitrés, tal como se precisa en el considerando V de esta decisión.</p> <p>TERCERO. Publíquese esta sentencia en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, oportunidad, legitimación y causas de improcedencia y sobreseimiento: A favor.</p> <p>Estudio: A favor del proyecto con otras consideraciones.</p> <p>Efectos: A favor.</p>	<p>La acción de inconstitucionalidad, como hemos mencionado en repetidas ocasiones, es un mecanismo de control abstracto que sirve para expulsar del orden jurídico las normas generales contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, se faculta a la Suprema Corte para determinar si la norma contraviene el Texto Constitucional y entonces se declara su inconstitucionalidad, es decir, la Constitución Política le otorga competencia para resolver el fondo del asunto a esta Suprema Corte, pero no le concede competencia o facultad para revisar aspectos formales como el procedimiento legislativo en sí mismo.</p> <p>No obstante, la Suprema Corte ha interpretado que si tiene esa potestad al considerar que la constitucionalidad de una ley depende del procedimiento de rango constitucional en el que se emite.</p>	<p>Por lo que se refiere al artículo 57 TER, párrafo primero, en la porción normativa "o que el usuario se encuentra en estado de incapacidad transitoria", existe mayoría de ocho votos a favor de la propuesta y, por lo que se refiere al resto de las porciones normativas del artículo 57 TER, en su párrafo primero, párrafo noveno y párrafo décimo, mayoría de siete votos a favor del reconocimiento de validez; la señora Ministra Batres Guadarrama, en contra de la metodología y párrafos 24 a 42; el señor Ministro Laynez Potisek reserva su derecho a formular voto concurrente; la señora Ministra Presidenta Píla Hernández, en contra de metodología y con anuncio de voto particular.</p>
<p>Contraversia Constitucional 448/2023</p> <p>Ponente: Ministra Ortiz Ahlf</p> <p>Resuelto: 13/06/2024</p>	<p>Administrativa</p> <p>Invalidez de diversas disposiciones de la Ley Orgánica para el Congreso de dicha entidad, publicada en el Periódico Oficial local de 19 de septiembre de 2023, mediante Decreto 1324.</p>	<p>¿Se cometieron vicios en el procedimiento legislativo por el que se aprobó el Decreto combatido y que trascendieron a la esfera de atribuciones del Poder actor?</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y fundada esta controversia constitucional.</p> <p>SEGUNDO. Se declara la invalidez del Decreto número mil trescientos veinticuatro, por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, Reglamentaria de las Asesías de las Personas Titulares de los Órganos Constitucionales Autónomos, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6230, de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en términos del apartado séptimo de esta sentencia.</p> <p>TERCERO. La declaratoria de invalidez, surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutiveos al congreso del Estado de Morelos.</p> <p>CUARTO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de los actos reclamados, oportunidad, legitimación activa y legitimación pasiva: A favor.</p> <p>Causas de improcedencia y sobreseimiento: A favor.</p> <p>Estudio: En contra.</p>	<p>Yo estoy a favor del sentido del proyecto, me separo de algunas de sus consideraciones y de la metodología con que se estudia el parámetro de regularidad constitucional del derecho a la consulta.</p> <p>Coincido, bueno, como ha expresado y como resolvió este Pleno en la acción de inconstitucionalidad 180/2024, la consulta previa a personas con discapacidad no es un requisito sine qua non, para cualquier tipo de reforma legislativa que vaya dirigida a beneficiar o no, al conjunto de personas con discapacidad fundamentalmente, cuando se cumple directamente una disposición que promueva de la Convención, de la Convención o del Protocolo sobre los derechos de las personas con discapacidad, pues se entiende que no tiene por qué someterse a consulta. Igualmente, es obvio que este Pleno tiene que tener una disposición a analizar los efectos de esa consulta, pero que en los casos en los que se puede enviar a consulta una medida determinada es porque el Pleno acepta la contingencia de los resultados de esa consulta, es decir, si es positiva o negativa, cualquiera de los dos resultados tendría que ser constitucional, porque si este Pleno mandata a una consulta cuyos resultados van a ser inconstitucionales, va a vivir un efecto permanente de inconstitucionalidad de las normas, sobre el formalismo y no sobre el contenido de las normas. me sé, me sé, me sé, me sé. Gracias, Ministra Presidenta. Yo comparto el sentido del proyecto, en cuanto a que reconozco la validez del artículo 57 Ter de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, pero me separo de ese apartado relacionado con la metodología, específicamente de los párrafos 24 a 42, que asumen la consulta en materia de personas con discapacidad como un requisito procedimental de rango constitucional, de manera que su Omisión constituiría un vicio invalidante del procedimiento legislativo.</p> <p>La acción de inconstitucionalidad, como hemos mencionado en repetidas ocasiones, es un mecanismo de control abstracto que sirve para expulsar del orden jurídico las normas generales contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, se faculta a la Suprema Corte para determinar si la norma contraviene el Texto Constitucional y entonces se declara su inconstitucionalidad, es decir, la Constitución Política le otorga competencia para resolver el fondo del asunto a esta Suprema Corte, pero no le concede competencia o facultad para revisar aspectos formales como el procedimiento legislativo en sí mismo.</p> <p>No obstante, la Suprema Corte ha interpretado que si tiene esa potestad al considerar que la constitucionalidad de una ley depende del procedimiento de rango constitucional en el que se emite.</p>	<p>Mayoría de nueve votos a favor de la propuesta del proyecto; la señora Ministra Esquivel Mossa anuncia voto concurrente; el señor Ministro Pardo Robledo, en contra de consideraciones; la señora Ministra Ríos Farjat, en contra de consideraciones con anuncio de voto concurrente; la señora Ministra Presidenta Píla Hernández, en contra de consideraciones con anuncio de voto concurrente; y voto en contra de la señora Ministra Batres Guadarrama.</p>
<p>Contradicción de Criterios 175/2022</p> <p>Ponente: Ministro Pardo Robledo</p> <p>Resuelto: 17/06/2024</p>	<p>Administrativa</p> <p>Suscitado entre el Tribunal Colegiado Octavo de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en apoyo del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver, respectivamente, el amparo directo ***** y el amparo en revisión *****.</p>	<p>¿Las Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen carácter vinculante u orientador para las personas juzgadas mexicanas?</p>	<p>PRIMERO. Este tribunal Pleno de la Suprema Corte es competente para conocer de la presente contradicción de criterios.</p> <p>SEGUNDO. Existe la contradicción entre los criterios sustentados por el primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Noveno Circuito y el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región en apoyo del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.</p> <p>TERCERO. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por el tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos precisados en el considerando último de la presente resolución.</p> <p>CUARTO. Publíquese la tesis de jurisprudencia que se sustenta en la presente resolución en términos de lo dispuesto en los artículos 219 y 220 de la Ley de Amparo.</p>	<p>Apartados de competencia, legitimación y criterios conflictivos: A favor.</p> <p>Existencia de la contradicción: A favor.</p> <p>Estudio: A favor.</p> <p>Resultados: A favor.</p>	<p>Yo estoy a favor del sentido del proyecto, me separo de algunas de sus consideraciones y de la metodología con que se estudia el parámetro de regularidad constitucional del derecho a la consulta.</p> <p>Coincido, bueno, como ha expresado y como resolvió este Pleno en la acción de inconstitucionalidad 180/2024, la consulta previa a personas con discapacidad no es un requisito sine qua non, para cualquier tipo de reforma legislativa que vaya dirigida a beneficiar o no, al conjunto de personas con discapacidad fundamentalmente, cuando se cumple directamente una disposición que promueva de la Convención, de la Convención o del Protocolo sobre los derechos de las personas con discapacidad, pues se entiende que no tiene por qué someterse a consulta. Igualmente, es obvio que este Pleno tiene que tener una disposición a analizar los efectos de esa consulta, pero que en los casos en los que se puede enviar a consulta una medida determinada es porque el Pleno acepta la contingencia de los resultados de esa consulta, es decir, si es positiva o negativa, cualquiera de los dos resultados tendría que ser constitucional, porque si este Pleno mandata a una consulta cuyos resultados van a ser inconstitucionales, va a vivir un efecto permanente de inconstitucionalidad de las normas, sobre el formalismo y no sobre el contenido de las normas. me sé, me sé, me sé, me sé. Gracias, Ministra Presidenta. Yo comparto el sentido del proyecto, en cuanto a que reconozco la validez del artículo 57 Ter de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, pero me separo de ese apartado relacionado con la metodología, específicamente de los párrafos 24 a 42, que asumen la consulta en materia de personas con discapacidad como un requisito procedimental de rango constitucional, de manera que su Omisión constituiría un vicio invalidante del procedimiento legislativo.</p> <p>La acción de inconstitucionalidad, como hemos mencionado en repetidas ocasiones, es un mecanismo de control abstracto que sirve para expulsar del orden jurídico las normas generales contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, se faculta a la Suprema Corte para determinar si la norma contraviene el Texto Constitucional y entonces se declara su inconstitucionalidad, es decir, la Constitución Política le otorga competencia para resolver el fondo del asunto a esta Suprema Corte, pero no le concede competencia o facultad para revisar aspectos formales como el procedimiento legislativo en sí mismo.</p> <p>No obstante, la Suprema Corte ha interpretado que si tiene esa potestad al considerar que la constitucionalidad de una ley depende del procedimiento de rango constitucional en el que se emite.</p>	<p>Mayoría de ocho votos a favor de la propuesta; el señor Ministro González Alcántara Carrancá, en contra de diversas consideraciones, con otras adicionales y reserva de voto concurrente; la señora Ministra Esquivel Mossa, con anuncio de voto concurrente; la señora Ministra Ortiz Ahlf, con consideraciones adicionales, en contra de algunas, en contra de los párrafos 80 y 81, y con anuncio de voto concurrente; la señora Ministra Ríos Farjat, con anuncio de voto concurrente al estar en contra de diversas consideraciones; la señora Ministra Presidenta Píla Hernández, en contra de consideraciones y con adicionales; y anuncio de voto concurrente; y voto en contra de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena y Laynez Potisek, quienes anuncian sendos votos particulares.</p>
<p>Acción de inconstitucionalidad 221/2023</p> <p>Ponente: Ministro González Alcántara Carrancá</p> <p>Resuelto: 17/06/2024</p>	<p>Penal</p> <p>Invalidez del artículo 59, párrafo último, del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad de 28 de octubre de 2023, mediante Decreto 6464.</p>	<p>¿La porción normativa impugnada, al hacer una remisión a todos los supuestos previstos en el artículo 422 del Código Nacional, donde se previeron distintas sanciones aplicables a esas personas jurídicas, e indicar que esas sanciones podrían atenuarse hasta en una cuarta parte genera incertidumbre para las personas destinatarias de la norma y las y los operadores jurídicos?</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se declara la invalidez del artículo 59, último párrafo, en su porción normativa "en todos los supuestos previstos en el artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales", del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, reformado mediante Decreto 65- 664, publicado el veinticinco de octubre de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de esa entidad, en términos del apartado VI de esta resolución.</p> <p>TERCERO. La declaración de invalidez decretada en este fallo surtirá sus efectos retroactivos al veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, a partir de la notificación de estos puntos resolutiveos al Congreso del Estado de Tamaulipas.</p> <p>CUARTO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de la norma impugnada, oportunidad, legitimación y causas de improcedencia: A favor.</p> <p>Estudio: A favor.</p> <p>Efectos: A favor.</p> <p>Resultados: A favor.</p>	<p>Yo estoy a favor del sentido del proyecto, me separo de algunas de sus consideraciones y de la metodología con que se estudia el parámetro de regularidad constitucional del derecho a la consulta.</p> <p>Coincido, bueno, como ha expresado y como resolvió este Pleno en la acción de inconstitucionalidad 180/2024, la consulta previa a personas con discapacidad no es un requisito sine qua non, para cualquier tipo de reforma legislativa que vaya dirigida a beneficiar o no, al conjunto de personas con discapacidad fundamentalmente, cuando se cumple directamente una disposición que promueva de la Convención, de la Convención o del Protocolo sobre los derechos de las personas con discapacidad, pues se entiende que no tiene por qué someterse a consulta. Igualmente, es obvio que este Pleno tiene que tener una disposición a analizar los efectos de esa consulta, pero que en los casos en los que se puede enviar a consulta una medida determinada es porque el Pleno acepta la contingencia de los resultados de esa consulta, es decir, si es positiva o negativa, cualquiera de los dos resultados tendría que ser constitucional, porque si este Pleno mandata a una consulta cuyos resultados van a ser inconstitucionales, va a vivir un efecto permanente de inconstitucionalidad de las normas, sobre el formalismo y no sobre el contenido de las normas. me sé, me sé, me sé, me sé. Gracias, Ministra Presidenta. Yo comparto el sentido del proyecto, en cuanto a que reconozco la validez del artículo 57 Ter de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, pero me separo de ese apartado relacionado con la metodología, específicamente de los párrafos 24 a 42, que asumen la consulta en materia de personas con discapacidad como un requisito procedimental de rango constitucional, de manera que su Omisión constituiría un vicio invalidante del procedimiento legislativo.</p> <p>La acción de inconstitucionalidad, como hemos mencionado en repetidas ocasiones, es un mecanismo de control abstracto que sirve para expulsar del orden jurídico las normas generales contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, se faculta a la Suprema Corte para determinar si la norma contraviene el Texto Constitucional y entonces se declara su inconstitucionalidad, es decir, la Constitución Política le otorga competencia para resolver el fondo del asunto a esta Suprema Corte, pero no le concede competencia o facultad para revisar aspectos formales como el procedimiento legislativo en sí mismo.</p> <p>No obstante, la Suprema Corte ha interpretado que si tiene esa potestad al considerar que la constitucionalidad de una ley depende del procedimiento de rango constitucional en el que se emite.</p>	<p>Aprobado por unanimidad de votos.</p>

<p>Acción de Inconstitucionalidad 204/2023</p> <p>Ponente: Ministra Ríos Farjat</p> <p>Resuelto: 18/06/2024</p>	<p>Penal</p>	<p>Invalida el artículo 280, párrafo último, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad de 8 de septiembre de 2023, mediante Decreto 0820.</p> <p>¿El artículo impugnado, en la porción normativa "secuestro y desaparición forzada de personas", invade la competencia del Congreso de la Unión para legislar cuestiones relativas a esos delitos y las sanciones relativas, en términos del artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución General?</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se declara la invalidez del artículo 280, párrafo último, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, en la porción normativa "secuestro y desaparición forzada de personas", adicionado mediante decreto 0820, publicado el ocho de septiembre de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de San Luis Potosí, en los términos del apartado V de esta determinación.</p> <p>TERCERO. La declaratoria de invalidez surtirá sus efectos retroactivos al nueve de septiembre de dos mil veintitrés, a partir de la notificación de estos puntos resolutive al Congreso del Estado de San Luis Potosí, de conformidad con el apartado VI de esta determinación.</p> <p>CUARTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, oportunidad, legitimación y causas de improcedencia y sobreesimiento: A favor.</p> <p>Estudio: A favor.</p> <p>Efectos: A favor.</p> <p>Resolutivos: A favor</p>	<p>Sin comentarios.</p>	<p>Mayoría de ocho votos a favor de la propuesta; el señor Ministro Pérez Dayán, en contra de consideraciones; con voto en contra del señor Ministro Aguilar Morales y de la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, con anuncio de voto particular.</p>
<p>Acción de Inconstitucionalidad 107/2021</p> <p>Ponente: Ministra Ríos Farjat</p> <p>Resuelto: 18/06/2024</p>	<p>Penal</p>	<p>Invalida el artículo 261 Bis, del Código Penal para el Estado de Nayarit, adicionado mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial de esa entidad de 7 de junio de 2021.</p> <p>¿La pena de "suspensión o" prevista para el delito atribuible al servidor público que, a través de diversas formas, información relacionada con hechos constitutivos de delito y los procedimientos penales, vulnera la seguridad jurídica y el mandato de legalidad en su vertiente de taxatividad en materia penal?</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se declara la invalidez del artículo 261 bis, párrafo primero, en su porción normativa "suspensión o", del Código Penal para el Estado de Nayarit, adicionado mediante el decreto publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el siete de junio de dos mil veintuno.</p> <p>TERCERO. La declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos retroactivos al ocho de junio de dos mil veintuno, a partir de la notificación de estos puntos resolutive al Congreso del Estado de Nayarit.</p> <p>CUARTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta.</p>	<p>Apartados de antecedentes y trámite de la demanda, competencia, precisión de la norma reclamada, oportunidad, legitimación y causas de improcedencia y sobreesimiento: A favor.</p> <p>Estudio: A favor.</p> <p>Efectos: A favor.</p> <p>Resolutivos: A favor</p>	<p>Sin comentarios.</p>	<p>Unanimidad de votos.</p>
<p>Acción de Inconstitucionalidad 180/2023</p> <p>Ponente: Ministro Aguilar Morales</p> <p>Resuelto: 24/06/2024</p>	<p>Administrativo</p>	<p>¿Las consultas realizadas por el Poder Legislativo del Estado de Jalisco a los pueblos y las comunidades indígenas y afroamericanas, así como a las personas con discapacidad, cumplieron los estándares nacionales e internacionales en la materia?</p> <p>¿Los preceptos impugnados, en cuanto establecen la obligación estatal de traducir el decreto, los documentos, lineamientos o preceptos relacionados con la postulación de personas indígenas, al menos, a las lenguas wixaritari y náhuatl, e imponen el deber de que lo relacionado con las personas con discapacidad sea traducido a la "lengua de señas utilizada predominantemente en el estado de Jalisco", al sistema de escritura braille y pictogramas, vulneran los derechos de acceso a la información y de acceder a los cargos de elección popular en condiciones de igualdad, para los integrantes de los pueblos y las comunidades indígenas, así como las personas con discapacidad de la entidad?</p> <p>¿El legislador local, al disponer que el legislador estatal define a las personas con discapacidad como aquellas que tienen dificultades para desarrollarse y participar plenamente en la vida social, debido a la limitación funcional con la que viven, además del contexto o entorno social, estableció una definición de discapacidad contraria al modelo social establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad?</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se desestima la presente acción de inconstitucionalidad respecto a la consulta a los pueblos y las comunidades indígenas y afroamericanas, así como a las personas con discapacidad.</p> <p>TERCERO. Se declara la invalidez de las porciones normativas "a lo cual, y" de la fracción XXI del numeral 1 del artículo 2º, "al menos," y "wixaritari y náhuatl" del artículo 15 septies, numeral 1, ambos del Código Electoral del Estado de Jalisco; así como de las porciones normativas "al menos," "wixaritari y náhuatl" del artículo segundo transitorio del decreto número 29235/XIII/23, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad el veinte de julio de dos mil veintitrés, con efectos a partir de que haya concluido el proceso electoral 2023-2024, en los términos del apartado VI de esta ejecutoria.</p> <p>CUARTO. Se reconoce la validez del artículo 15 septies, numeral 1, del Código Electoral del Estado de Jalisco, así como del artículo segundo transitorio del decreto número 29235/XIII/23, con las salvedades precisadas en el resolutive anterior, publicado en el periódico oficial de dicha entidad el veinte de julio de dos mil veintitrés, en los términos del apartado VI de esta ejecutoria.</p> <p>QUINTO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión, oportunidad, legitimación y causas de improcedencia y sobreesimiento: A favor</p> <p>Apartado V.1. y V.2.: A favor</p> <p>Apartado V.3.: A favor</p> <p>Apartado V.3.B.: A favor</p> <p>Apartado V.3.C.: A favor</p> <p>Apartado V.3.D.: A favor</p> <p>Apartado V.3.E.: A favor</p> <p>Apartado V.3.F.: A favor</p> <p>Apartado V.3.G.: A favor</p> <p>Apartado V.3.H.: A favor</p> <p>Apartado V.3.I.: A favor</p> <p>Apartado V.3.J.: A favor</p> <p>Apartado V.3.K.: A favor</p> <p>Apartado V.3.L.: A favor</p> <p>Apartado V.3.M.: A favor</p> <p>Apartado V.3.N.: A favor</p> <p>Apartado V.3.O.: A favor</p> <p>Apartado V.3.P.: A favor</p> <p>Apartado V.3.Q.: A favor</p> <p>Apartado V.3.R.: A favor</p> <p>Apartado V.3.S.: A favor</p> <p>Apartado V.3.T.: A favor</p> <p>Apartado V.3.U.: A favor</p> <p>Apartado V.3.V.: A favor</p> <p>Apartado V.3.W.: A favor</p> <p>Apartado V.3.X.: A favor</p> <p>Apartado V.3.Y.: A favor</p> <p>Apartado V.3.Z.: A favor</p> <p>Apartado V.4.: A favor</p> <p>Apartado V.4.A.: A favor</p> <p>Apartado V.4.B.: A favor</p> <p>Apartado V.4.C.: A favor</p> <p>Apartado V.4.D.: A favor</p> <p>Apartado V.4.E.: A favor</p> <p>Apartado V.4.F.: A favor</p> <p>Apartado V.4.G.: A favor</p> <p>Apartado V.4.H.: A favor</p> <p>Apartado V.4.I.: A favor</p> <p>Apartado V.4.J.: A favor</p> <p>Apartado V.4.K.: A favor</p> <p>Apartado V.4.L.: A favor</p> <p>Apartado V.4.M.: A favor</p> <p>Apartado V.4.N.: A favor</p> <p>Apartado V.4.O.: A favor</p> <p>Apartado V.4.P.: A favor</p> <p>Apartado V.4.Q.: A favor</p> <p>Apartado V.4.R.: A favor</p> <p>Apartado V.4.S.: A favor</p> <p>Apartado V.4.T.: A favor</p> <p>Apartado V.4.U.: A favor</p> <p>Apartado V.4.V.: A favor</p> <p>Apartado V.4.W.: A favor</p> <p>Apartado V.4.X.: A favor</p> <p>Apartado V.4.Y.: A favor</p> <p>Apartado V.4.Z.: A favor</p> <p>Apartado V.5.: A favor</p> <p>Apartado V.5.A.: A favor</p> <p>Apartado V.5.B.: A favor</p> <p>Apartado V.5.C.: A favor</p> <p>Apartado V.5.D.: A favor</p> <p>Apartado V.5.E.: A favor</p> <p>Apartado V.5.F.: A favor</p> <p>Apartado V.5.G.: A favor</p> <p>Apartado V.5.H.: A favor</p> <p>Apartado V.5.I.: A favor</p> <p>Apartado V.5.J.: A favor</p> <p>Apartado V.5.K.: A favor</p> <p>Apartado V.5.L.: A favor</p> <p>Apartado V.5.M.: A favor</p> <p>Apartado V.5.N.: A favor</p> <p>Apartado V.5.O.: A favor</p> <p>Apartado V.5.P.: A favor</p> <p>Apartado V.5.Q.: A favor</p> <p>Apartado V.5.R.: A favor</p> <p>Apartado V.5.S.: A favor</p> <p>Apartado V.5.T.: A favor</p> <p>Apartado V.5.U.: A favor</p> <p>Apartado V.5.V.: A favor</p> <p>Apartado V.5.W.: A favor</p> <p>Apartado V.5.X.: A favor</p> <p>Apartado V.5.Y.: A favor</p> <p>Apartado V.5.Z.: A favor</p> <p>Apartado V.6.: A favor</p> <p>Apartado V.6.A.: A favor</p> <p>Apartado V.6.B.: A favor</p> <p>Apartado V.6.C.: A favor</p> <p>Apartado V.6.D.: A favor</p> <p>Apartado V.6.E.: A favor</p> <p>Apartado V.6.F.: A favor</p> <p>Apartado V.6.G.: A favor</p> <p>Apartado V.6.H.: A favor</p> <p>Apartado V.6.I.: A favor</p> <p>Apartado V.6.J.: A favor</p> <p>Apartado V.6.K.: A favor</p> <p>Apartado V.6.L.: A favor</p> <p>Apartado V.6.M.: A favor</p> <p>Apartado V.6.N.: A favor</p> <p>Apartado V.6.O.: A favor</p> <p>Apartado V.6.P.: A favor</p> <p>Apartado V.6.Q.: A favor</p> <p>Apartado V.6.R.: A favor</p> <p>Apartado V.6.S.: A favor</p> <p>Apartado V.6.T.: A favor</p> <p>Apartado V.6.U.: A favor</p> <p>Apartado V.6.V.: A favor</p> <p>Apartado V.6.W.: A favor</p> <p>Apartado V.6.X.: A favor</p> <p>Apartado V.6.Y.: A favor</p> <p>Apartado V.6.Z.: A favor</p> <p>Apartado V.7.: A favor</p> <p>Apartado V.7.A.: A favor</p> <p>Apartado V.7.B.: A favor</p> <p>Apartado V.7.C.: A favor</p> <p>Apartado V.7.D.: A favor</p> <p>Apartado V.7.E.: A favor</p> <p>Apartado V.7.F.: A favor</p> <p>Apartado V.7.G.: A favor</p> <p>Apartado V.7.H.: A favor</p> <p>Apartado V.7.I.: A favor</p> <p>Apartado V.7.J.: A favor</p> <p>Apartado V.7.K.: A favor</p> <p>Apartado V.7.L.: A favor</p> <p>Apartado V.7.M.: A favor</p> <p>Apartado V.7.N.: A favor</p> <p>Apartado V.7.O.: A favor</p> <p>Apartado V.7.P.: A favor</p> <p>Apartado V.7.Q.: A favor</p> <p>Apartado V.7.R.: A favor</p> <p>Apartado V.7.S.: A favor</p> <p>Apartado V.7.T.: A favor</p> <p>Apartado V.7.U.: A favor</p> <p>Apartado V.7.V.: A favor</p> <p>Apartado V.7.W.: A favor</p> <p>Apartado V.7.X.: A favor</p> <p>Apartado V.7.Y.: A favor</p> <p>Apartado V.7.Z.: A favor</p> <p>Apartado V.8.: A favor</p> <p>Apartado V.8.A.: A favor</p> <p>Apartado V.8.B.: A favor</p> <p>Apartado V.8.C.: A favor</p> <p>Apartado V.8.D.: A favor</p> <p>Apartado V.8.E.: A favor</p> <p>Apartado V.8.F.: A favor</p> <p>Apartado V.8.G.: A favor</p> <p>Apartado V.8.H.: A favor</p> <p>Apartado V.8.I.: A favor</p> <p>Apartado V.8.J.: A favor</p> <p>Apartado V.8.K.: A favor</p> <p>Apartado V.8.L.: A favor</p> <p>Apartado V.8.M.: A favor</p> <p>Apartado V.8.N.: A favor</p> <p>Apartado V.8.O.: A favor</p> <p>Apartado V.8.P.: A favor</p> <p>Apartado V.8.Q.: A favor</p> <p>Apartado V.8.R.: A favor</p> <p>Apartado V.8.S.: A favor</p> <p>Apartado V.8.T.: A favor</p> <p>Apartado V.8.U.: A favor</p> <p>Apartado V.8.V.: A favor</p> <p>Apartado V.8.W.: A favor</p> <p>Apartado V.8.X.: A favor</p> <p>Apartado V.8.Y.: A favor</p> <p>Apartado V.8.Z.: A favor</p> <p>Apartado V.9.: A favor</p> <p>Apartado V.9.A.: A favor</p> <p>Apartado V.9.B.: A favor</p> <p>Apartado V.9.C.: A favor</p> <p>Apartado V.9.D.: A favor</p> <p>Apartado V.9.E.: A favor</p> <p>Apartado V.9.F.: A favor</p> <p>Apartado V.9.G.: A favor</p> <p>Apartado V.9.H.: A favor</p> <p>Apartado V.9.I.: A favor</p> <p>Apartado V.9.J.: A favor</p> <p>Apartado V.9.K.: A favor</p> <p>Apartado V.9.L.: A favor</p> <p>Apartado V.9.M.: A favor</p> <p>Apartado V.9.N.: A favor</p> <p>Apartado V.9.O.: A favor</p> <p>Apartado V.9.P.: A favor</p> <p>Apartado V.9.Q.: A favor</p> <p>Apartado V.9.R.: A favor</p> <p>Apartado V.9.S.: A favor</p> <p>Apartado V.9.T.: A favor</p> <p>Apartado V.9.U.: A favor</p> <p>Apartado V.9.V.: A favor</p> <p>Apartado V.9.W.: A favor</p> <p>Apartado V.9.X.: A favor</p> <p>Apartado V.9.Y.: A favor</p> <p>Apartado V.9.Z.: A favor</p> <p>Apartado V.10.: A favor</p> <p>Apartado V.10.A.: A favor</p> <p>Apartado V.10.B.: A favor</p> <p>Apartado V.10.C.: A favor</p> <p>Apartado V.10.D.: A favor</p> <p>Apartado V.10.E.: A favor</p> <p>Apartado V.10.F.: A favor</p> <p>Apartado V.10.G.: A favor</p> <p>Apartado V.10.H.: A favor</p> <p>Apartado V.10.I.: A favor</p> <p>Apartado V.10.J.: A favor</p> <p>Apartado V.10.K.: A favor</p> <p>Apartado V.10.L.: A favor</p> <p>Apartado V.10.M.: A favor</p> <p>Apartado V.10.N.: A favor</p> <p>Apartado V.10.O.: A favor</p> <p>Apartado V.10.P.: A favor</p> <p>Apartado V.10.Q.: A favor</p> <p>Apartado V.10.R.: A favor</p> <p>Apartado V.10.S.: A favor</p> <p>Apartado V.10.T.: A favor</p> <p>Apartado V.10.U.: A favor</p> <p>Apartado V.10.V.: A favor</p> <p>Apartado V.10.W.: A favor</p> <p>Apartado V.10.X.: A favor</p> <p>Apartado V.10.Y.: A favor</p> <p>Apartado V.10.Z.: A favor</p>	<p>Apartado V.3. Sobre esta obligación de realizar traducciones para las personas indígenas a todas las lenguas existentes en México, pues yo creo que hay una intención exageradamente sobreenfática, que hace muy difícil su aplicación, dado que en México se encuentran registradas más de trescientas lenguas indígenas, trescientas sesenta y cuatro, de acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, es decir, estaría con la obligación de tener trescientos sesenta y cuatro traductores en cada proceso electoral, lo cual se vuelve prácticamente o, más bien, se vuelve muy impráctico.</p> <p>En realidad, estas dos lenguas que señala la ley, que es la wixaritari y la náhuatl, representan, la primera, el 31.6% (treinta y tres punto seis por ciento) de las personas hablantes en huichol, y de personas hablantes en lengua náhuatl representan el 33.5% (treinta y tres punto cinco por ciento), es decir, entre los dos abarcan casi un porcentaje más del 57% (sesenta y siete por ciento). En total, de acuerdo con el 12 Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en el Estado existen veinte lenguas que se hablan. Además de estas dos principales, se habla el tzotzil, el zapoteco, mixteco, maya, otomí, tzotzil, otz'equí, tripa, chatino, amuzgo, ixcateco, la lengua maya. Estamos hablando que, por ejemplo, que de esta última hay hablantes en el estado de Chiapas.</p> <p>APARTADO IV. En el mismo sentido concuerdo con los señores Ministro Pérez Dayán y el Ministro Laynez en que efectivamente el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública no cuenta con legislación para impedir cualquier ley estatal, sino solo aquellas que vulneren de manera directa el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales, este apartado (pues) debería atender a lo previsto en el artículo 105, fracción II, inciso IV, de la Constitución, pues los organismos garantes en las entidades federativas tienen una legitimación limitada consistente en controlar leyes expedidas por las legislaturas locales cuando vulneren el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales, lo que no se advierte en los argumentos de invalidez hechos valer por el Instituto Chihuahuense demandante, en este caso, de acción de inconstitucionalidad, que (considero, efectivamente) más bien deberían estarse anulando en la controversia constitucional presentada. Gracias.</p> <p>APARTADO VI.2. Tema 1: Solamente una aclaración. Yo estoy totalmente a favor del sentido del proyecto en el estudio de fondo, sin embargo, no quisiera dejar de mencionar que en el proyecto se hace referencia a la obligación de proporcionar la información, en particular, sobre las atribuciones del DIC, sobre la base de que es un órgano jurisdiccional dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, que reúne las características de órgano constitucionalmente autónomo, estoy en contra de esta consideración del proyecto, por lo que la controversia constitucional creo que debería declararse improcedente, ya que el tribunal accionante carece de esa legitimación, pues no es una entidad, poder u órgano de gobierno u órgano autónomo de los enumerados en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En específico, el proyecto se basa en el inciso j) de ese inciso que prevé como supuesto de procedencia las controversias que se suscitan entre dos órganos constitucionales autónomos locales o entre uno de ellos y el Poder Ejecutivo y Legislativo de la entidad.</p> <p>No obstante, para entender dicha porción normativa, se debe tener en cuenta que diversos autores han sostenido que los órganos constitucionales autónomos derivan de una evolución de la división de poderes, en sus líneas, al menos de esta manera:</p>	<p>Apartado V.13: Mayoría de siete votos a favor de la propuesta de invalidez, el señor Ministro González Alcázar Carrancá, en contra de la metodología; voto en contra de la señora Ministra Bares Guadarrama y del señor Ministro Pérez Dayán.</p> <p>Apartado V.13.B.: Mayoría de nueve votos a favor de la propuesta, con voto en contra del señor Ministro González Alcázar Carrancá y la señora Ministra Ortiz Ahf.</p> <p>Apartado V.13.C.: Mayoría de diez votos a favor de la propuesta, con votos aclaratorios del Ministro Pardo, el Ministro Gutiérrez y de la Ministra Ortiz Ahf.</p> <p>Efectos: Mayoría de diez votos a favor de la propuesta en sus términos; parcialmente a favor la señora Ministra Bares Guadarrama, con las precisiones realizadas; la señora Ministra Ortiz Ahf, también realizó precisiones, incluso la aplicación de lo previsto en la Ley General, en lugar de la inconstitucionalidad de la fracción XXII.</p>
<p>Acción de Inconstitucionalidad 137/2021</p> <p>Ponente: Ministra Ortiz Ahf</p> <p>Resuelto: 24/06/2024</p>	<p>ADMINISTRATIVO</p>	<p>¿El artículo 31 B, fracción II, impugnado atribuye indebidamente al órgano interno de control la facultad de fiscalizar y verificar el ejercicio del gasto del órgano garante local, en tanto que ello compete a la Auditoría Superior del Estado?</p> <p>¿El 31 B, fracción X, impugnado, rebasa la naturaleza constitucional de los órganos internos de control, al pretender facultar al órgano interno de control y a sus áreas para efectuar visitas de inspección e intervenciones de control a las áreas y órganos del organismo garante?</p> <p>¿El 31 B, fracción XXIV, impugnado, vulnera los principios de autonomía y autogobierno en perjuicio del Instituto accionado, al establecer el que el órgano interno de control de dicho ente cuenta con la facultad de concertar y celebrar convenios de coordinación?</p> <p>¿El 31 B, fracción XXII, impugnado, viola el principio de supervenencia y jerarquía de las leyes, dado que reconoce la facultad para expedir normatividad incluso de carácter general, no obstante que éste forma parte de la estructura del instituto?</p> <p>¿El artículo 31 B, fracción XXIII, en tanto faculta al órgano interno de control a presentar a las diversas áreas administrativas del Órgano Garante, propuestas de mejora, diagnósticos, evaluaciones, programas, proyectos, sistemas tecnológicos o cualquier mecanismo para su mejor funcionamiento y operación del control interno institucional, incluyendo las del propio Órgano Interno de Control, vulnera las facultades constitucionales del órgano garante?</p> <p>¿La fracción I del artículo 37 de la Ley impugnada prevé de forma indebida que el órgano interno de control tiene la facultad de fiscalizar y verificar el ejercicio del gasto del Tribunal, pues dicha atribución le compete a la Auditoría Superior del Estado?</p> <p>¿El artículo 27, fracción X, de la Ley orgánica impugnada, al otorgar al órgano interno de control la facultad de solicitar la información, efectuar visitas de inspección e intervenciones de control a las áreas y órganos del Tribunal para el cumplimiento de sus funciones, se aleja de la distribución de competencias que realiza la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del diseño de los sistemas anticorrupción?</p> <p>¿El artículo 27, fracción XXIV, de la legislación impugnada, vulnera los principios de autonomía y autogobierno, al establecer el que el órgano interno de control cuenta con la facultad de concertar y celebrar convenios de coordinación?</p> <p>¿La atribución contenida en la fracción XXII del artículo 27 de la Ley Orgánica impugnada, para el propio órgano, de emitir reglamentos, lineamientos, manuales, guías y disposiciones de carácter general necesarias para la organización y funcionamiento del citado órgano, atenta contra los principios de autonomía y autogobierno de los que goza el Tribunal?</p> <p>¿La atribución contenida en la fracción XXIII del artículo 27 de la legislación orgánica, de presentar, a las diversas áreas administrativas del Tribunal, propuestas de mejora, diagnósticos, evaluaciones, programas, proyectos, sistemas tecnológicos o cualquier mecanismo para su mejor funcionamiento y operación del control interno institucional?</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se reconoce la validez de los artículos 31 A, párrafo tercero, 31 B, fracciones II, X, XX, XXI y XXIV, 31 d, párrafo segundo, en su porción normativa "las y los servidores públicos del órgano garante estarán obligados a proporcionar la información, permitirla la revisión y atender los requerimientos que les presente el órgano interno de control" y 31 H, de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de chihuahua, reformados y adicionados, respectivamente, mediante el decreto número LXV/RFEV/1039/2021 XII P.E. publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa el siete de agosto de dos mil veintuno.</p> <p>TERCERO. Se declara la invalidez del artículo 31 D, párrafos segundo, en su porción normativa "de dos hasta diez días hábiles" y tercero, de la referida Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua.</p> <p>CUARTO. Las declaratorias de invalidez decretadas surtirán sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutive al Congreso del Estado de Chihuahua, en la inteligencia de que, en tanto se subsana el vicio advertido respecto del plazo que tienen las personas servidoras públicas para atender los requerimientos que formule el órgano interno de control en el orden jurídico de dicho estado, será aplicable directamente a lo establecido en el artículo 96, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.</p> <p>QUINTO. Se vincula al Congreso del Estado de Chihuahua para que, a más tardar en el próximo periodo ordinario de sesiones, subsane los vicios de inconstitucionalidad advertidos, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en esta sentencia.</p> <p>SEXTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartados I, II y III: A favor</p> <p>Apartado IV de legitimación: En contra</p> <p>Apartados V de causas de improcedencia y sobreesimiento: A favor</p> <p>Apartados V.2. Tema 1: A favor</p> <p>Apartados V.2. Tema 2: A favor</p> <p>Apartados V.3. Tema 1: A favor</p> <p>Apartados V.3. Tema 2: A favor</p> <p>Apartados V.4. Tema 1: A favor</p> <p>Apartados V.4. Tema 2: A favor</p> <p>Apartados V.7 de efectos: A favor</p>	<p>Apartados I y II: A favor</p> <p>Apartado IV de legitimación: En contra</p> <p>Apartados V de causas de improcedencia y sobreesimiento: A favor</p> <p>Apartados V.2. Tema 1: A favor</p> <p>Apartados V.2. Tema 2: A favor</p> <p>Apartados V.3. Tema 1: A favor</p> <p>Apartados V.3. Tema 2: A favor</p> <p>Apartados V.4. Tema 1: A favor</p> <p>Apartados V.4. Tema 2: A favor</p> <p>Apartados V.7 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.8 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.9 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.10 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.11 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.12 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.13 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.14 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.15 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.16 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.17 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.18 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.19 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.20 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.21 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.22 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.23 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.24 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.25 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.26 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.27 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.28 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.29 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.30 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.31 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.32 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.33 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.34 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.35 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.36 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.37 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.38 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.39 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.40 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.41 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.42 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.43 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.44 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.45 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.46 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.47 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.48 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.49 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.50 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.51 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.52 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.53 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.54 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.55 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.56 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.57 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.58 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.59 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.60 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.61 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.62 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.63 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.64 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.65 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.66 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.67 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.68 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.69 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.70 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.71 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.72 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.73 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.74 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.75 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.76 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.77 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.78 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.79 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.80 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.81 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.82 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.83 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.84 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.85 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.86 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.87 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.88 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.89 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.90 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.91 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.92 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.93 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.94 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.95 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.96 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.97 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.98 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.99 de efectos: A favor</p> <p>Apartados V.100 de efectos: A favor</p>	<p>Legitimación: mayoría de 7 votos a favor de la propuesta, con voto en contra de la señora Ministra Bares Guadarrama, el señor Ministro Laynez Potisek, quien anuncia voto particular, el señor Ministro Pérez Dayán, la señora Ministra Ríos Farjat, con reserva de voto.</p> <p>Apartado V.2. Tema 1: Unanimidad de votos a favor de la propuesta, salvo por lo que se refiere a la fracción X del artículo 31 B, en relación con la cual existe una mayoría de ocho votos a favor del proyecto, con voto en contra de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, por declarar inidada esta fracción y el señor Ministro González Alcázar Carrancá, por lo que se refiere a la porción normativa "e intervenciones de control", así como en relación con la fracción XXIV del artículo 31 B, en relación con la cual existe mayoría de nueve votos; con voto en contra de la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, quien vota por la invalidez de su porción normativa "y celebrar", incluso, también (en suplencia) por el 31 A, párrafo tercero, en la porción normativa que indica "que lo representará"; el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena, en contra de la metodología; la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, en contra de consideraciones y con adicionales que precisará en un voto concurrente.</p> <p>Apartado V.2. Tema 3: unanimidad de diez votos; por lo que se refiere a la propuesta de invalidez del artículo 31 D, párrafo segundo, en la porción normativa "de dos hasta diez días hábiles" existe mayoría de nueve votos, con voto en contra de la señora Ministra Presidenta Piña Hernández; y por lo que se refiere a la propuesta de invalidez del artículo 37 de la Ley impugnada, en la porción normativa "de dos hasta diez días hábiles" existe mayoría de nueve votos, con voto en contra de la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, quien anuncia voto particular, el señor Ministro Pérez Dayán, la señora Ministra Ríos Farjat, con reserva de voto.</p> <p>Apartado V.2. Tema 1: por lo que se refiere a la propuesta de reconocimiento de validez del artículo 27, fracciones II, fracción XX, XII y XXIII, existe unanimidad de once votos; en cuanto a la fracción X, mayoría de nueve votos con voto en contra de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena y González Alcázar Carrancá en cuanto a la porción normativa indicada "de intervención de control"; y, en cuanto a la fracción XXIV, mayoría de diez votos con voto en contra de la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, quien incluso, en extensión, la invalidez del 35, párrafo tercero, en la porción normativa precisada; la señora Ministra Bares Guadarrama, con anuncio de voto concurrente en cuanto a la fracción II con consideraciones diversas; la señora Ministra Esquivel Mossa, con precisiones en los párrafos 207, 224 y 304, y la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, en contra de algunas consideraciones y con adicionales.</p> <p>Apartado V.2. Tema 3: unanimidad de once votos por lo que se refiere a la propuesta de validez del artículo 29, párrafo segundo, en la porción normativa "Las y los servidores públicos del órgano garante estarán obligados a proporcionar la información, permitirla la revisión y atender los requerimientos que les presente el órgano garante".</p>
<p>Controversia Constitucional 116/2021</p> <p>Ponente: Ministra Ortiz Ahf</p> <p>Resuelto: 25/06/2024</p>	<p>Constitucional y electoral</p>	<p>¿Cesaron los efectos del artículo 272 I, numeral 4), de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua?</p> <p>¿El impugnado artículo 272 m, numeral 1), inciso cc), al prever como atribución directa del órgano interno de control, la de concertar y celebrar en los casos que estime necesarios, convenios de coordinación con las instancias que requiera con el propósito de apoyar y hacer más eficiente la fiscalización, sin detrimento de sus atribuciones, contraviene el régimen de distribución de competencias previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y vulnera la autonomía del Instituto Estatal Electoral?</p>	<p>PRIMERO. Es parcialmente procedente, pero ineficaz la presente controversia constitucional.</p> <p>SEGUNDO. Se sobreesime la presente controversia constitucional respecto del artículo 272 I, numeral 4), de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.</p> <p>TERCERO. Se reconoce la validez del artículo 272 m, numeral 1), inciso cc), de la referida Ley Electoral del Estado de Chihuahua.</p> <p>CUARTO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, fijación de las normas, actos u omisiones reclamadas, oportunidad, legitimación activa y legitimación pasiva: A favor.</p> <p>Causales de improcedencia y sobreesimiento: A favor</p> <p>Estudio: A favor</p> <p>Efectos: A favor</p> <p>Resolutivos: A favor</p>	<p>Sin comentarios.</p>	<p>Apartados de competencia, fijación de las normas, actos u omisiones reclamadas, oportunidad, legitimación activa y legitimación pasiva: Unanimidad de votos.</p> <p>Causales de improcedencia y sobreesimiento: mayoría de diez votos en sus términos a favor de la propuesta; la señora Ministra Esquivel Mossa y el señor Ministro Pardo Rebolloso, se apartan de las consideraciones del cambio de sentido normativo, al igual que la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, quien vota también por el sobreesimiento adicional de diversos numerales ante la ausencia de conceptos de invalidez.</p> <p>Estudio: mayoría de diez votos a favor de la propuesta con voto en contra de la señora Ministra Presidenta Piña Hernández; específicamente, por la porción normativa "y celebrar", y anuncia voto particular.</p> <p>Resolutivos: Unanimidad de votos.</p>

<p>Controversia Constitucional 117/2021</p> <p>Ponente: Ministra Ortiz Ahlf</p> <p>Resuelto: 27/06/2024</p>	<p>Constitucional</p>	<p>Invalidez de diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de dicha entidad, publicada en el Periódico Oficial local de 7 de agosto de 2021, mediante Decreto LVXV/RFLE/1039/2021 XII P.E.</p>	<p>¿El artículo 22 B, fracción II, impugnado, prevé indebidamente que el órgano interno de control tiene la facultad de fiscalizar y verificar el ejercicio del gasto de esa Comisión, pues dicha atribución le compete, a la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua?</p> <p>¿El artículo 22 B, fracción X, que da facultad al órgano interno de control de solicitar la información, efectuar visitas de inspección e intervenciones de control a las áreas y órganos de la Comisión Estatal para el cumplimiento de sus funciones, se aleja de la distribución de competencias que realiza la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del diseño de los sistemas anticorrupción?</p> <p>¿El artículo 22 B, fracción XXII, impugnado, vulnera la esfera de competencias del órgano actor y atenta contra los principios de autonomía y autogobierno de los goza al facultar al órgano interno de control para emitir reglamentos, lineamientos, manuales, guías y disposiciones de carácter general?</p> <p>¿La atribución otorgada al órgano interno de control para nombrar y remover libremente a su personal, prevista en el artículo 22 B, fracción XIX, impugnado, es violatoria de su autonomía y que incide adversamente en la libertad de autogobierno con la que cuenta?</p> <p>¿El artículo 22 D, párrafos segundo y tercero, de la Ley impugnada excede el parámetro previsto en el artículo 96 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, dado que acorta los plazos para atender los requerimientos dirigidos a los servidores públicos de la Comisión?</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente controversia constitucional.</p> <p>SEGUNDO. Se reconoce la validez de los artículos 22 B, fracciones II, X, XVII, XIX y XXII, 22 D, párrafo segundo, en su porción normativa "las y los servidores públicos de la comisión estatal estarán obligados a proporcionar la información, permitir la revisión y atender los requerimientos que les presente el órgano interno de control", y 22 H de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua.</p> <p>TERCERO. Se declara la invalidez del artículo 22 D, párrafos segundo, en su porción normativa "de dos hasta diez días hábiles", y tercero, de la referida Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua.</p> <p>CUARTO. Se declara la invalidez, por extensión, del numeral 2.1, párrafo primero, en su porción normativa "hasta de diez días hábiles", de la guía de auditoría pública, vistas de inspección e intervenciones de control del órgano interno de control de la comisión estatal de los Derechos Humanos, emitida mediante el acuerdo n° 002/2024, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el tres de abril de dos mil veinticuatro.</p> <p>QUINTO. Las declaratorias de invalidez decretadas surtirán sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutive del congreso del estado de chihuahua, en la inteligencia de que, en tanto se subana el vicio advertido respecto del plazo que tienen las personas servidoras públicas para atender los requerimientos que formule el órgano interno de control, en el orden jurídico de dicho estado será aplicable directamente lo establecido en el artículo 96, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.</p> <p>SEXTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, fijación de las normas, actos u omisiones reclamadas, oportunidad, legitimación activa, legitimación pasiva y causas de improcedencia y sobreesimiento: A favor</p> <p>VI. 1 Parámetro de regularidad constitucional y VI. 2 Análisis de los conceptos de invalidez Tema 1: A favor</p> <p>Tema 2: A favor</p> <p>Tema 3: A favor</p> <p>Efectos: A favor</p> <p>Resolutivos: A favor</p>	<p>Sin comentarios.</p>	<p>Apartados de competencia, fijación de las normas, actos u omisiones reclamadas, oportunidad, legitimación activa, legitimación pasiva y causas de improcedencia y sobreesimiento: Unanimidad de votos</p> <p>VI. 1 Parámetro de regularidad constitucional y VI. 2 Análisis de los conceptos de invalidez Tema 1: unanimidad de diez votos a favor de la propuesta por lo que se refiere al reconocimiento de validez de las fracciones II, XIX y XXII del artículo 22 B impugnado; y mayoría de ocho votos en cuanto a la fracción X con voto en contra de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena y González Alcántara Carrancá, por la invalidez de la porción normativa respectiva, la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, en contra de diversas consideraciones, incluso de los párrafos 90 a 108.</p> <p>Tema 2: unanimidad de diez votos por lo que se refiere al reconocimiento de validez del artículo 22 D; unanimidad de diez votos a favor de la propuesta por lo que se refiere al reconocimiento de validez de las fracciones II, XIX y XXII del artículo 22 B impugnado; y mayoría de diez votos en contra de la propuesta de validez de "de dos hasta diez días hábiles" con voto en contra de la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, quien vota en contra de consideraciones y anuncia voto concurrente.</p> <p>Tema 3: Unanimidad de votos, con voto concurrente Ministra Piña Hernández.</p> <p>Efectos: <i>Mayoría de nueve votos a favor de la propuesta y un voto en contra de la señora Ministra Presidenta Piña Hernández.</i></p>
<p>Controversia Constitucional 120/2021</p> <p>Ponente: Ministra Ortiz Ahlf</p> <p>Resuelto: 27/06/2024</p>	<p>Constitucional</p>	<p>Invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del mencionado Estado, reformada mediante Decreto LXVI/RFLE/1039/2021 XII P.E., publicado en el Periódico Oficial de esa entidad de 7 de agosto de 2021.</p>	<p>¿Procede sobreesir en la controversia constitucional, dado que las normas impugnadas ya fueron motivo de pronunciamiento por este Tribunal Pleno, en la diversa acción de inconstitucionalidad 113/2021?</p>	<p>PRIMERO. Se sobreesir en la presente controversia constitucional.</p> <p>SEGUNDO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, fijación de las normas, actos u omisiones reclamadas, oportunidad, legitimación activa y legitimación pasiva: A favor</p> <p>Causales de improcedencia: A favor</p> <p>Resolutivos: A favor</p>	<p>Sin comentarios.</p>	<p>Apartados de competencia, fijación de las normas, actos u omisiones reclamadas, oportunidad, legitimación activa y legitimación pasiva: Unanimidad de votos</p> <p>Causales de improcedencia: mayoría de ocho votos a favor del proyecto en su término; voto en contra del señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena y voto parcialmente a favor de la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, quien únicamente está a favor del sobreesimiento respecto de los preceptos en relación con los cuales se invoca en la acción de inconstitucionalidad previa y anuncia voto particular.</p> <p>Resolutivos: Unanimidad de votos.</p>
<p>Controversia Constitucional 54/2024</p> <p>Ponente: Ministro Perez Dayán</p> <p>Resuelto: 01/07/2024</p>	<p>Constitucional</p>	<p>Invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Ingresos del Municipio de Castaños, del mencionado Estado para el ejercicio fiscal de 2024, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad de 27 de diciembre de 2023, mediante Decreto 603.</p>	<p>¿Las normas impugnadas que disponen el cobro por el otorgamiento de permisos, ya sea para construcción o la remodelación de pozos incluyendo aquellos verticales o direccionales, establecidos para la extracción de hidrocarburos que se encuentren en la roca reservorio, invaden la competencia del Congreso de la Unión prevista en artículo 73, fracción X, constitucional para legislar en toda la República sobre hidrocarburos?</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y fundada la controversia constitucional.</p> <p>SEGUNDO. Se declara la invalidez del artículo 21, fracciones XV y XVI, de la Ley de Ingresos del Municipio de Castaños, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro.</p> <p>TERCERO. La declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutive al Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza y conforme a los efectos precisados en el apartado VII de esta determinación.</p> <p>CUARTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de la norma impugnada, oportunidad, legitimación activa, legitimación pasiva y causas de improcedencia y sobreesimiento: A favor</p> <p>Estudio: A favor.</p> <p>Efectos: A favor.</p> <p>Resolutivos: A favor.</p>	<p>Sin comentarios.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de la norma impugnada, oportunidad, legitimación activa, legitimación pasiva y causas de improcedencia y sobreesimiento: Unanimidad de votos.</p> <p>Estudio: Unanimidad de votos.</p> <p>Efectos: Unanimidad de votos.</p> <p>Resolutivos: Unanimidad de votos.</p>
<p>Acción de Inconstitucionalidad 158/2021</p> <p>Ponente: Ministra Esquivel Mossa</p> <p>Resuelto: 01/07/2024</p>	<p>Seguridad Pública</p>	<p>Invalidez de diversas disposiciones de la Constitución Política y de las Leyes de Seguridad Pública y Organización de la Fiscalía General de Justicia, todas del mencionado Estado, publicadas en el Periódico Oficial de esa entidad de 21 y 23 de septiembre de 2021, mediante Decretos LXIV-800, LXV-821 y LXIV-822.</p>	<p>¿El derecho de las personas que causaron baja en la Fiscalía General de Justicia del Estado, a que se les proporcionen medidas de seguridad y protección, resulta constitucional, al enmarcarse en las facultades que tienen las entidades federativas en materia de seguridad pública?</p> <p>¿Resultan contrarias a los principios de honradez y eficiencia en el ejercicio del gasto público las normas locales impugnadas que obligan a brindar a ciertos exservidores públicos medidas de protección y seguridad adecuadas y suficientes, o bien, en las condiciones y proporción en que los fueron asignadas, por un tiempo igual al que ocuparon sus respectivos cargos, al impedir que las autoridades encargadas de su aplicación puedan valorar la situación particular de cada exservidor público, así como la existencia, las características y la fuente del riesgo que se ha identificado en su caso, a fin de definir, de manera casuística el tempo necesario en que deberán mantenerse las medidas de seguridad y protección?</p> <p>¿Las normas que establecen la posibilidad de prorrogar las medidas de seguridad y protección a ciertos exservidores públicos del Estado de Tamaulipas, en tanto las condiciones de riesgo lo ameritan son incompatibles con el principio de seguridad jurídica, por no establecer qué debe entenderse por "condiciones de riesgo"?</p>	<p>PRIMERO. Es procedente pero infundada la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada.</p> <p>SEGUNDO. Se reconoce la validez del artículo 19 Bis, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, así como del 26, fracción I, de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas y 71, fracción II, párrafos primero y segundo, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.</p> <p>TERCERO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad, legitimación activa y sobreesimiento: A favor</p> <p>Metodología: A favor</p> <p>Apartado VI.2: Por la invalidez del artículo 71, fracción II, párrafos primero y segundo, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.</p> <p>Apartado VI.3.A: A favor con consideraciones distintas.</p> <p>Resolutivos: A favor (se modificar)</p>	<p>Yo estaría en contra de declarar la validez del artículo 71, fracción II, párrafo primero, en cuanto a que considero que otorgar privilegios para que funcionarios públicos cuenten con medidas de seguridad, cuando ya hayan dejado el cargo, es contrario al principio de igualdad establecido en el artículo 1º, en relación con el artículo 21 de nuestra Constitución Federal porque tal medida discriminaría a la población que no fue servidores públicos en el área de procuración de justicia, coludándose en un plano de desigualdad con relación a su derecho humano a la seguridad pública que debe garantizar el Estado a todas las personas.</p> <p>No parece existir justificación constitucional para dar medidas de seguridad a las personas exservidoras públicas que se desempeñaron en algún cargo en el área de la procuración de justicia. No debe confundirse la relación del Estado con las y los servidores públicos en funciones en el ámbito de la procuración de justicia, a quienes se debe garantizar las condiciones necesarias y efectivas para desempeñar su cargo, con la obligación que tiene el Estado de garantizar el derecho humano a la seguridad pública a toda la ciudadanía, incluyendo funcionarios, en el entendido de que el Estado cuenta con esa obligación de otorgar mecanismos de protección a todas las personas.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad, legitimación activa y sobreesimiento: Unanimidad de votos.</p> <p>Metodología: Mayoría de cinco votos.</p> <p>Apartado VI.2: por lo que se refiere a la propuesta de validez del artículo 71, fracción II, párrafo primero, existe una mayoría de ocho votos a favor de la propuesta del proyecto con voto en contra de la señora Ministra Batres Guadarrama; y por lo que se refiere a la propuesta de validez de las respectivas disposiciones de invalidez, existe una mayoría de seis votos en contra de la propuesta y por el reconocimiento de validez de las normas impugnadas.</p> <p>Apartado VI.3: mayoría de seis votos en contra de la propuesta y por el reconocimiento de validez con anuncio de voto concurrente de la señora Ministra Ríos Farjat.</p> <p>Resolutivos: Unanimidad de votos. (se modificar)</p>
<p>Recurso de revisión en materia de seguridad nacional 4/2023</p> <p>Ministro Pérez Dayán</p> <p>Resuelto: 2/07/2024</p>	<p>Seguridad nacional</p>	<p>Resolución de 3 de octubre de 2023, dictada por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el recurso de revisión *****.</p>	<p>¿Difundir la versión pública de la resolución correspondiente al trámite unificado de cambio de uso de suelo forestal identificada con número *****, correspondiente al proyecto denominado "Construcción de una Base Aérea Militar y el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto Tulum, Quinta Roo" pone en riesgo la seguridad nacional?</p>	<p>PRIMERO. Es procedente pero infundado el presente recurso de revisión en materia de seguridad nacional.</p> <p>SEGUNDO. Se confirma el sentido de la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dictada en el recurso de revisión *****, en sesión celebrada el tres de octubre de dos mil veintitrés.</p>	<p>Apartados de competencia, procedencia, legitimación, oportunidad y materia del recurso: A favor.</p> <p>Apartado VI, A y B: En contra.</p> <p>Apartado VII: A favor.</p> <p>Tema 1: En contra.</p> <p>Resolutivos: A favor.</p>	<p>Esta Corte debería actuar con responsabilidad en este caso para garantizar la integridad del Estado Mexicano y su soberanía.</p>	<p>Apartados de competencia, procedencia, legitimación, oportunidad y materia del recurso: Unanimidad de votos.</p> <p>Apartado VI, A y B: Mayoría de ocho votos a favor de la propuesta modificada del proyecto; la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, en contra del párrafo 63; voto en contra de las señoras Ministras Ortiz Ahlf y Batres Guadarrama.</p> <p>Apartado VII: mayoría de nueve votos a favor de la propuesta; la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, en contra de la primera parte del párrafo 84 y la nota al pie de página preciosa; con voto en contra de la Ministra Ortiz Ahlf.</p> <p>Tema 1: mayoría de siete votos a favor de la propuesta; el señor Ministro González Alcántara Carrancá, en contra del párrafo 138; el señor Ministro Aguilar Morales, en contra de los párrafos 127, 138, 141 y 144; la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, en contra de los párrafos 130 a 135, con razones adicionales; y en contra de diversas, con anuncio de voto concurrente; voto en contra de las señoras Ministras Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf y Batres Guadarrama.</p> <p>Resolutivos: Unanimidad de votos</p>
<p>Recurso de revisión en materia de seguridad nacional 5/2023</p> <p>Ministro Pérez Dayán</p> <p>Resuelto: 2/07/2024</p>	<p>Seguridad nacional</p>	<p>Resolución de 3 de octubre de 2023, dictada por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el recurso de revisión *****.</p>	<p>¿Difundir la versión pública de la resolución dictada en el trámite unificado de cambio de uso de suelo forestal, modalidad B, con riesgo, número *****, recaída al proyecto denominado "Construcción de una Base Aérea Militar y el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto Tulum Quintana Roo", pone en riesgo la seguridad nacional?</p>	<p>PRIMERO. Es procedente pero infundado el presente recurso de revisión en materia de seguridad nacional.</p> <p>SEGUNDO. En la materia del recurso se confirma el sentido de la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dictada en el recurso de revisión *****, en sesión celebrada el tres de octubre de dos mil veintitrés.</p>	<p>Apartados de competencia, procedencia, legitimación, oportunidad y materia del recurso: A favor.</p> <p>Apartado VI, VI, VII y Tema 1: En contra.</p> <p>Resolutivos: A favor.</p>	<p>Apartados de competencia, procedencia, legitimación, oportunidad y materia del recurso: A favor.</p> <p>Apartados VI, VII, VIII, y Tema 1: En contra, porque se permite entregar información con carácter reservado, por razones de seguridad nacional que da cuenta de antecedentes, actuaciones, consideraciones, instrumentaciones, planeación, descripción, identificación, evaluaciones, estimaciones y pronósticos sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, obra prioritaria y estratégica del Estado Mexicano.</p> <p>Gracias.</p>	<p>Apartados de competencia, procedencia, legitimación, oportunidad y materia del recurso: Unanimidad de votos</p> <p>Apartado VI, VI, VII y Tema 1: mayoría de siete votos a favor de la propuesta del proyecto; el señor Ministro González Alcántara Carrancá, en contra del párrafo 148; el señor Ministro Aguilar Morales, en contra de los párrafos 56, 135, 146, 148, 151, 155; la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, en contra de los párrafos 67 y 88, incluyendo la nota 44, 135, 132 y 143, con razones adicionales, y anuncio de voto concurrente; con voto en contra de las señoras Ministras Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf y Batres Guadarrama quien precisa las razones de su voto.</p> <p>Resolutivos: A favor.</p>

<p>Controversia Constitucional 230/2021</p> <p>Ponente: Ministro Perez Dayán</p> <p>Resuelto: 04/07/2024</p>	<p>Constitucional</p>	<p>Invalidez de los artículos 79 y 138 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de dicha entidad, publicados en la Gaceta Oficial local de 2 de septiembre de 2021, así como el "Acuerdo 64/2021 por el que se expiden los lineamientos para regular el diseño, especificaciones y demás elementos relacionados con el balizamiento de los vehículos oficiales de la policía de proximidad destinados a realizar funciones de seguridad ciudadana en las dependencias, órganos descentrados, entidades y alcaldías de la Ciudad de México", publicado en la mencionada Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 18 de noviembre de 2021.</p>	<p>¿El decreto legal y el acuerdo administrativo impugnados violan la esfera de competencia de la Alcaldía actora prevista en la Constitución Federal, al imponer un balizamiento homologado en todos los vehículos utilizados para llevar a cabo labores de seguridad pública?</p> <p>¿El decreto legal y el acuerdo administrativo impugnados transgreden el principio de autonomía presupuestal de la alcaldía, al imponerle el deber de destinar recursos asignados a su orden de gobierno para cumplir con la obligación de implementar el balizamiento conforme a las especificaciones técnicas exigidas por el Gobierno de la Ciudad de México?</p>	<p>PRIMERO. Es procedente pero infundada la presente controversia constitucional.</p> <p>SEGUNDO. Se reconoce la validez de todos los actos impugnados.</p> <p>TERCERO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como en el semanario judicial de la Federación y su gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión del acto impugnado y oportunidad: A favor.</p> <p>Apartado de causas de improcedencia y sobreseimiento: A favor</p> <p>Estudio parte I: En contra</p> <p>A favor de la propuesta modificada del proyecto.</p> <p>Estudio parte II y III: En contra</p> <p>Resolutivos: A favor</p>	<p>ESTUDIO PARTE I: GRACIAS, MINISTRA PRESIDENTA. Yo estoy en contra del proyecto que se nos propone porque busca declarar la invalidez de diversas disposiciones del decreto y acuerdo impugnados relativos a la obligación de balizar de manera homologada los vehículos oficiales de la policía de la Ciudad de México, dado que, contrario a lo que se afirma, no se viola la autonomía presupuestaria, en este caso, de la Alcaldía Álvaro Obregón.</p> <p>El proyecto sostiene que de manera implícita las normas impugnadas obligan a las demarcaciones territoriales a destinar ingresos propios para implementar el balizamiento homologado porque las alcaldías tienen la carga de contratar los servicios particulares para encomendar la realización de los trabajos pertinentes, como se señala en el párrafo 155; sin embargo, lo que dice el primer párrafo del artículo noveno del Acuerdo Impugnado es que a solicitud de las unidades administrativas policiales, el Gobierno de la Ciudad de México es responsable del balizamiento de los vehículos oficiales a través de las direcciones generales correspondientes; asimismo, cuando en el párrafo segundo del artículo noveno impugnado se dice que las alcaldías y demás dependencias que correspondan podrán llevar a cabo la contratación de servicios de particulares para el balizamiento de los vehículos oficiales destinados a funciones</p>	<p>Apartados de competencia, precisión del acto impugnado y oportunidad: Unanimidad de votos con voto concurrente de Ministra Piña.</p> <p>Apartado de causas de improcedencia y sobreseimiento: Unanimidad de votos.</p> <p>Estudio parte I: Unanimidad de votos a favor de la propuesta modificada del proyecto; el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena reserva su derecho a formular voto concurrente; la señora Ministra Ríos Farfán, así como el señor Ministro Laynez Potisek, con precisiones; la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, con consideraciones diversas y anuncio de voto concurrente.</p> <p>Estudio parte II y III: Mayoría de siete votos en contra, por lo que se refiere a los artículos 138, párrafo tercero, última parte y quinto transitorio, decreto con el voto a favor del señor Ministro Aguilar Morales y del señor Ministro Pérez Dayán; y, por lo que se refiere a los artículos noveno transitorio, párrafo segundo, décimo primer transitorio y quinto transitorio, existe una mayoría de seis votos en contra de la propuesta de invalidez.</p> <p>Resolutivos: Unanimidad de votos.</p>
<p>Controversia Constitucional 3/2022</p> <p>Ponente: Ministro Perez Dayán</p> <p>Resuelto: 04/07/2024</p>	<p>Constitucional</p>	<p>Invalidez del "Acuerdo 64/2021 por el que se expiden los lineamientos para regular el diseño, especificaciones y demás elementos relacionados con el balizamiento de los vehículos oficiales de la policía de proximidad destinados a realizar funciones de seguridad ciudadana en las dependencias, órganos descentrados, entidades y alcaldías de la Ciudad de México" y su Anexo Técnico, publicado en la mencionada Gaceta Oficial local de 18 de noviembre de 2021.</p>	<p>¿El acuerdo administrativo impugnado viola la esfera de competencia de la Alcaldía actora prevista en la Constitución Federal, al pormenorizar la obligación del balizamiento homologado en todos los vehículos utilizados para llevar a cabo labores de seguridad pública?</p> <p>¿El acuerdo impugnado transgrede el principio de autonomía presupuestaria previsto en el artículo 122, apartado A, fracción VI, segundo párrafo, de la Ley Fundamental, al imponer a las alcaldías el deber de destinar recursos asignados a su orden de gobierno, para cumplir con la obligación de implementar el balizamiento conforme a las especificaciones técnicas exigidas por el Gobierno de la Ciudad de México?</p>	<p>PRIMERO. Es procedente pero infundada la presente controversia constitucional.</p> <p>SEGUNDO. Se reconoce la validez del Acuerdo 64/2021.</p> <p>TERCERO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como en el semanario judicial de la Federación y su gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión del acto impugnado y oportunidad: A favor</p> <p>Apartado de causas de improcedencia y sobreseimiento: A favor</p> <p>Estudio parte I: En contra</p> <p>A favor de la propuesta modificada del proyecto.</p> <p>Estudio parte II y III: En contra</p> <p>Resolutivos: A favor</p>	<p>Se reiteran las consideraciones por ser similar al proyecto anterior.</p>	<p>Se reiteran las consideraciones por ser similar al proyecto anterior.</p>
<p>Controversia Constitucional 163/2021</p> <p>Ponente: Ministro Perez Dayán</p> <p>Resuelto: 08/07/2024</p>	<p>Constitucional</p>	<p>Invalidez de los artículos 79 y 138 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de dicha entidad, publicada en la Gaceta Oficial local de 2 de septiembre de 2021.</p>	<p>¿Se impone sobreseer en la controversia constitucional por lo que hace a los artículos 138, párrafo tercero, última parte, de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y quinto transitorio del decreto de reforma publicado en la Gaceta Oficial de 2 de septiembre de 2021?</p> <p>¿El acuerdo administrativo impugnado viola la esfera de competencia de la Alcaldía actora prevista en la Constitución Federal, al imponer un balizamiento homologado en todos los vehículos utilizados para llevar a cabo labores de seguridad pública?</p> <p>¿Debe desestimarse el argumento relativo a que el decreto legal impugnado transgrede el principio de autonomía presupuestal de las alcaldías, ya que los preceptos legales respecto de los cuales subsiste la materia de fondo no se vinculan con temas presupuestales?</p> <p>¿El decreto legal impugnado transgrede el principio de jerarquía normativa, al desconocer la independencia de gestión administrativa de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México?</p>	<p>PRIMERO. Es procedente pero infundada la presente controversia constitucional.</p> <p>SEGUNDO. Se reconoce la validez del Decreto por el que se modifican los párrafos primero y segundo del artículo 79 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y se adicionan tres párrafos a dicho precepto legal, publicado en la gaceta oficial de dicha entidad federativa el dos de septiembre de dos mil veintiuno.</p> <p>TERCERO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como en el semanario judicial de la Federación y su gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión del acto impugnado, oportunidad, legitimación y causas de improcedencia y sobreseimiento: A favor</p> <p>Estudio: A favor</p> <p>Resolutivos: A favor</p>	<p>Sin comentarios.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión del acto impugnado, oportunidad, legitimación y causas de improcedencia y sobreseimiento: Unanimidad de votos</p> <p>Estudio: Unanimidad de votos</p> <p>Resolutivos: Unanimidad de votos</p>
<p>Controversia Constitucional 4/2022 y Controversia Constitucional 5/2022</p> <p>Ponente: Ministro Perez Dayán</p> <p>Resuelto: 08/07/2024</p>	<p>Constitucional</p>	<p>Invalidez del "Acuerdo 64/2021 por el que se expiden los lineamientos para regular el diseño, especificaciones y demás elementos relacionados con el balizamiento de los vehículos oficiales de la policía de proximidad destinados a realizar funciones de seguridad ciudadana en las dependencias, órganos descentrados, entidades y alcaldías de la Ciudad de México" y su Anexo Técnico, publicado en la mencionada Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 18 de noviembre de 2021.</p>	<p>¿El acuerdo administrativo impugnado viola la esfera de competencia de la Alcaldía actora prevista en la Constitución Federal, al pormenorizar la obligación del balizamiento homologado en todos los vehículos utilizados para llevar a cabo labores de seguridad pública?</p> <p>¿El acuerdo impugnado transgrede el principio de autonomía presupuestaria previsto en el artículo 122, apartado A, fracción VI, segundo párrafo, de la Ley Fundamental, al imponer a las alcaldías el deber de destinar recursos asignados a su orden de gobierno, para cumplir con la obligación de implementar el balizamiento conforme a las especificaciones técnicas exigidas por el Gobierno de la Ciudad de México?</p>	<p>PRIMERO. Es procedente, pero infundada la presente controversia constitucional.</p> <p>SEGUNDO. Se reconoce la validez del Acuerdo 64/2021, por el que se expiden los lineamientos para regular el diseño, especificaciones y demás elementos relacionados con el balizamiento de los vehículos oficiales de la policía de proximidad, destinados a realizar funciones de seguridad ciudadana en las dependencias, órganos descentrados, entidades y alcaldías de la Ciudad de México, publicado en la gaceta oficial de dicha entidad federativa el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno.</p> <p>TERCERO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión del acto impugnado, oportunidad, legitimación: A favor</p> <p>Estudio: A favor de los proyectos modificados</p> <p>Resolutivos: A favor</p>	<p>Yo quisiera hacer una observación. Me quisiera pronunciar en contra del proyecto, en cuanto a que propone declarar la invalidez, bueno, en la parte original del proyecto anterior, ¿verdad?, ya no modificado, por medio del cual se expidieron los lineamientos que regulaban la invalidación. Particularmente, tiene un tema aquí que si quisiera, nada más, dejar anotado, aunque se esté reconsiderando, que es esta parte, de una forma un poco extraña, que se hace al considerar que es parte de un sistema normativo. Parte del razonamiento que se hace en los proyectos, que estuvieron a nuestra consideración hasta ahorita, era que se podía extender hasta un ámbito jerárquico superior esa invalidación normativa. Entonces, proponía pasar del decreto no solamente a nuestra facultad del artículo 41, fracción IV, de la Ley Reglamentaria, que nos permite que, cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán extenderse a todas las normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada. Y aquí se nos proponía que se</p>	<p>Apartados de competencia, precisión del acto impugnado, oportunidad, legitimación: Unanimidad de votos</p> <p>Estudio: Mayoría de siete votos a favor de la propuesta modificadas</p> <p>Resolutivos: A favor</p>
<p>Controversia Constitucional 58/2022</p> <p>Ponente: Ministro González Alcántara Carrancá</p> <p>Resuelto: 09/07/2024</p>	<p>Constitucional</p>	<p>Invalidez del artículo 50 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de esa entidad, reformado mediante Decreto 74, publicado en el Periódico Oficial local de 9 de febrero de 2022.</p>	<p>¿El artículo 50, impugnado, al establecer la aplicación de tarifas y cuotas especiales o diferenciadas del cincuenta por ciento (50%) por los servicios que prestan las juntas municipales de agua potable y alcantarillado, para las personas que caigan en el supuesto normativo consistente en ser pensionados, jubilados, personas adultas mayores o personas con discapacidad, viola el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, desatendiendo la prohibición constitucional de establecer exenciones o subsidios en relación con las contribuciones que constitucionalmente se establecen como ingresos exclusivos de los municipios por la prestación de un servicio público?</p> <p>¿Procede declarar la invalidez del segundo y tercer artículo transitorio del Decreto respectivo, en virtud de que forman parte del mismo sistema normativo al facultar a los Ayuntamientos a proponer iniciativas relativas al cobro de cuotas y tarifas especiales?</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y fundada la presente controversia constitucional.</p> <p>SEGUNDO. Se declara la invalidez del artículo 50, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, reformado mediante el Decreto número 74, publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa el nueve de febrero de dos mil veintidós, así como de los transitorios segundo y tercero del referido decreto, la cual surtirá sus efectos únicamente entre las partes a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al congreso de dicho estado.</p> <p>TERCERO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas, actos y omisiones reclamadas, la existencia del acto impugnado, la oportunidad, la legitimación activa y la legitimación pasiva: A favor</p> <p>Estudio: En contra</p> <p>Efectos: En contra</p> <p>Resolutivos: A favor</p>	<p>ESTUDIO: Muchas gracias, Ministro Presidente: Estoy en contra del proyecto porque propone declarar la invalidez parcial del artículo 50 de la ley de agua local, así como de los artículos transitorios segundo y tercero del Decreto 74, que regulan tarifas y cuotas especiales o diferenciadas por el servicio de agua potable en favor de personas pensionadas, jubiladas, adultas mayores y personas con discapacidad; pues, contrario a lo que se afirma, no se encuentran dentro de las restricciones del artículo 115, fracción IV, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La norma constitucional referida prohíbe que las leyes estatales establezcan exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de las contribuciones municipales, es decir, se trata de una limitación específicamente acotada a las dos figuras referidas, que no podrá extenderse por interpretación a cualquier beneficio fiscal; sin embargo, el proyecto interpreta que dicha disposición sí prohíbe cualquier figura por medio de la cual se deje de pagar total o parcialmente la obligación tributaria de una contribución municipal. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece qué debe entenderse por exención, pero se puede</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas, actos y omisiones reclamadas, la existencia del acto impugnado, la oportunidad, la legitimación activa y la legitimación pasiva: Unanimidad de votos</p> <p>Estudio: Mayoría de seis votos a favor de la propuesta; el señor Ministro Aguilar Morales, en contra de los párrafos indicados; con voto en contra de las señoras Ministras Esquivel Mossa y Batres Guadarrama</p> <p>Efectos: Mayoría de seis votos</p> <p>Resolutivos: Unanimidad de votos</p>

<p>Acción de Inconstitucionalidad 167/2022</p> <p>Ponente: Ministro Ortiz Ahlf</p> <p>Resuelto: 11/07/2024</p>	<p>Constitucional</p>	<p>Invalidez del artículo 35 Quáter, fracciones XIII, XIV y XV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad de 30 de noviembre de 2022.</p>	<p>¿El Congreso Local omitió celebrar una consulta indígena antes de la aprobación de las normas combatidas?</p>	<p>PRIMERO. Es procedente pero infundada la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se reconoce la validez del artículo 35 quater, fracciones XIII, XIV y XV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.</p> <p>TERCERO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el periódico Oficial del Estado de Chihuahua, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de la norma reclamada, oportunidad, legitimación y causas de improcedencia y sobreseimiento: A favor</p> <p>Estudio: En contra</p> <p>Resolutivos: A favor</p>	<p>Estudio: Yo estaría a favor del parámetro de regularidad que se plantea en el punto VI.1, sin embargo, si me pronunciara en contra de los puntos VI.2, sobre la afectación de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, y en contra del punto VI.3, sobre el ejercicio consultivo a los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes.</p> <p>Considero, bueno, estos puntos consideran que las normas impugnadas afectan a los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes al establecer atribuciones de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas de Chihuahua, encargada de determinar políticas públicas para garantizar sus derechos, pues, contrario a lo que expresa el proyecto o, más bien, considero contrario a lo que piensa el proyecto que estas normas no afectan a las comunidades indígenas, en tanto que se trata de una mera distribución de competencias que tiene el Ejecutivo de esta entidad federativa.</p> <p>Las fracciones XIII, XIV y XV del artículo 35 Quáter de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua establecen algunas de las bases de funcionamiento de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas que, por sí mismas, no producen una afectación a los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, ya que se refieren a atribuciones que tendría la institución para establecer, promover y vigilar estas políticas.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de la norma reclamada, oportunidad, legitimación y causas de improcedencia y sobreseimiento: Unanimidad de votos</p> <p>Estudio: Mayoría de siete votos en contra de la propuesta y por reconocer la validez de las normas impugnadas.</p> <p>Resolutivos: Unanimidad de votos.</p>
<p>Acción de Inconstitucionalidad 200/2020</p> <p>Ponente: Ministro Luis María Aguilar Morales</p> <p>Resuelto: 05/08/2024</p>	<p>Constitucional</p>	<p>Invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes para el estado de Oaxaca, publicada en el periódico oficial de esa entidad de veintidós de febrero de dos mil veinte, mediante Decreto 1291.</p>	<p>1. ¿El proceso realizado por el Congreso local satisface las fases y los requisitos materiales de la consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes? 2. ¿El artículo 9, fracciones I a V, impugnado, se ajusta a lo establecido en los tratados internacionales y lo determinado por este Alto Tribunal respecto de los supuestos en los que se requiere del consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes? 3. ¿Puede reconocerse la validez del artículo 3, párrafo primero, impugnado, a partir de una interpretación conforme, de modo que se entienda cuál es la finalidad de los procesos de consultas? 4. ¿El artículo 35, párrafo primero, impugnado, resulta válido al disponer que, para determinar el tipo de consulta y el procedimiento, se debe tomar como base el objetivo y la materia de la medida, así como las particularidades de los pueblos y comunidades correspondientes 5. ¿El artículo 35, párrafo segundo, resulta inconstitucional, ya que, a partir de las finalidades de la consulta, determina a priori los tipos de consulta, lo cual hace nugatorio el carácter flexible de este mecanismo? 6. ¿Los artículos 61, párrafo último, y 65, segundo párrafo, impugnados, son inconstitucionales al establecer que la finalidad de las consultas sobre medidas legislativas se reduce a obtener opiniones y propuestas; y que, de las medidas administrativas, consiste en alcanzar acuerdos u obtener su consentimiento. 7. ¿Los artículos 50 y 68 de la Ley de Consulta, en la porción normativa "La decisión de las comunidades de no otorgar su consentimiento, será vinculante para la Autoridad Representativa, resultan inconstitucionales por otorgar un carácter vinculante a la</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se reconoce la validez de los artículos 3, párrafo primero, 9, párrafo primero y fracciones de la I a V, y 35, párrafo primero, de la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes para el estado de Oaxaca, expedida mediante el Decreto número 1291, publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa el veintidós de febrero de dos mil veinte.</p> <p>TERCERO. Se declara la invalidez de los artículos 4, fracción XIV, en su porción normativa "negativas", 8, 35, párrafo segundo, y fracciones I, II y III, 50, 61, párrafo último, 65, párrafo segundo, 68, en su porción normativa "la decisión de las comunidades de no otorgar su consentimiento, será vinculante para la autoridad responsable", del 68 al 77 y 79, de la referida Ley de Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes para el estado de Oaxaca.</p> <p>CUARTO. Se declara la invalidez, por extensión, de los artículos 10, párrafo último, y 66 de la citada ley de consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes para el estado de Oaxaca.</p> <p>QUINTO. La declaratoria de invalidez surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del estado de Oaxaca.</p> <p>SEXTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del estado de Oaxaca, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Periodo de receso de la ministra Lenia Batres Guadarrama.</p>	<p>Periodo de receso de la ministra Lenia Batres Guadarrama.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad, legitimación y causas de improcedencia y sobreseimiento: Unanimidad de votos.</p> <p>VI.1. VI.2.</p> <p>VI.3. tema 1: Por lo que se refiere a la propuesta de reconocimiento de validez del artículo 9, existe mayoría de ocho votos con voto en contra de la señora Ministra Presidenta Piña Hernández; por lo que se refiere al artículo 3, párrafo primero, existe una mayoría de ocho votos a favor del reconocimiento de validez de la totalidad de este precepto, la señora Ministra Presidenta Piña Hernández vota por la invalidez parcial por lo que se refiere a la porción normativa "o, en su caso, emitir opiniones y propuestas"; por lo que se refiere a la propuesta de validez del artículo 35, párrafo primero, existe unanimidad de nueve votos y por lo que se refiere a la propuesta de invalidez del 35, párrafo segundo, fracciones I, II y III, existe una mayoría de ocho votos a favor de la propuesta, con voto en contra de la señora Ministra Esquivel Mossa; por lo que se refiere a la propuesta de invalidez del artículo 61, párrafo último, mayoría de ocho votos, con voto en contra de la señora Ministra Esquivel Mossa; y por lo que se refiere a la propuesta de invalidez del artículo 65, párrafo segundo, existe una mayoría de siete votos, con voto en contra del señor Ministro González Alcántara Carranza y la señora Ministra Esquivel Mossa. Del párrafo 35, párrafo primero, es una mayoría de ocho votos porque hay voto por la invalidez parcial de la señora Ministra Presidenta Piña Hernández en las porciones "determinar el tipo de consulta y el procedimiento".</p>
<p>Contradicción de Criterios 255/2022</p> <p>Ponente: Ministro Pérez Dayán</p> <p>Resuelto: 06/08/2024</p>	<p>Amparo</p>	<p>Suscitada entre la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver, por una parte, el amparo directo en revisión 2283/2013 y, por la otra, los amparos directos en revisión 3788/2013, 440/2014, 1168/2014, 957/2014 y 1408/2014.</p>	<p>¿Existe la contradicción en torno a los requisitos mínimos deben cumplir las partes cuando se propone en los conceptos de violación que se ejerza el control de constitucionalidad y convencionalidad ex officio?</p>	<p>ÚNICO. Es inexistente la contradicción de criterios denunciada.</p>	<p>Periodo de receso de la ministra Lenia Batres Guadarrama.</p>	<p>Periodo de receso de la ministra Lenia Batres Guadarrama.</p>	<p>Apartados de competencia, legitimación y criterios denunciados: Unanimidad de votos.</p> <p>Inexistencia de contradicción: Unanimidad de votos.</p> <p>Resolutivos: Unanimidad de votos.</p>
<p>Contradicción de Criterios 285/2022</p> <p>Ponente: Ministro Pérez Dayán</p> <p>Resuelto: 06/08/2024</p>	<p>Amparo</p>	<p>Suscitada entre la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver, por una parte, el amparo directo en revisión 2283/2013 y, por la otra, los amparos directos en revisión 3788/2013, 440/2014, 1168/2014, 957/2014 y 1408/2014.</p>	<p>¿Existe la contradicción en torno a los requisitos mínimos deben cumplir las partes cuando se propone en los conceptos de violación que se ejerza el control de constitucionalidad y convencionalidad ex officio?</p>	<p>ÚNICO. Es improcedente la contradicción de criterios denunciada.</p>	<p>Periodo de receso de la ministra Lenia Batres Guadarrama.</p>	<p>Periodo de receso de la ministra Lenia Batres Guadarrama.</p>	<p>Apartados de competencia y legitimación: Unanimidad de votos</p> <p>Improcedencia de criterios: Unanimidad de votos con voto aclaratorio del Ministro Pardo</p>
<p>Acción de Inconstitucionalidad 26/2024</p> <p>Ponente: Ministro Gutiérrez Ortiz Mena</p> <p>Resuelto: 08/08/2024</p>	<p>Constitucional</p>	<p>Invalidez de diversas disposiciones de Leyes de Ingreso de los Municipios de Campeche y de Carmen, ambos del Estado de Campeche, para el ejercicio fiscal de 2024, publicadas en el Periódico Oficial de esa entidad de 22 de diciembre de 2023.</p>	<p>1. ¿Las normas impugnadas, en cuanto prevén cobros desde 0.17 a unidad de medida y actualización (UMA), hasta 0.59 UMA, por la emisión de copias simples por hoja, resultan contrarias al principio de proporcionalidad tributaria? 2. ¿Las cuotas previstas en las normas impugnadas por expedición de copias certificadas guardan una relación razonable con el costo de los materiales para la prestación del servicio? 3. ¿El legislador local delegó en una autoridad administrativa autorizar la tarifa aplicable a los derechos por la prestación del servicio de agua potable, en contravención a los principios de legalidad y de reserva de ley en materia tributaria? 4. ¿El legislador local omitió justificar mediante bases objetivas el costo de los materiales utilizados para la expedición de copias simples y certificadas de documentos, así como la reproducción de documentos en medios magnéticos relacionados con el derecho de acceso a la información pública?</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se declara la invalidez de los artículos 47, letras f y h, inciso c), numeral 2, 48, numerales 1, 2 y 3, y 54, fracción XI, en su porción normativa "copias simples por hoja 0.17", de la Ley de Ingresos del Municipio de Carmen y 71, párrafo último, y 110, fracciones I, II y III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Campeche, Campeche, para el ejercicio fiscal 2024, expedidas mediante los decretos números 293 y 294, publicados en el periódico oficial de dicha entidad federativa el veintidós de diciembre de dos mil veintitrés.</p> <p>TERCERO. Se declara la invalidez, por extensión, del artículo 26, fracción III, de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche.</p> <p>CUARTO. Las declaratorias de invalidez decretada surtirán sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del estado de Campeche en los términos precisados en el apartado VII de esta determinación.</p> <p>QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del estado de Campeche, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Periodo de receso de la ministra Lenia Batres Guadarrama.</p>	<p>Periodo de receso de la ministra Lenia Batres Guadarrama.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad, legitimación y causas de improcedencia y sobreseimiento: Quedan aprobados por Unanimidad de Votos de los presentes con las reservas establecidas por los ministros Layme y por la ministra Esquivel.</p> <p>Estudio de fondo tema VI.1: Por lo que se refiere a la propuesta de invalidez de los artículos 47, letra F, y 54, fracción XI, de la Ley de Ingresos del Municipio de Carmen, existe una mayoría de ocho votos a favor de la propuesta con voto en contra del señor Ministro Layme Potisek; en cambio, por lo que se refiere a la propuesta de invalidez del artículo 47, letra H, inciso c), numeral 2, de la Ley de Ingresos del Municipio de Carmen, Estado de Campeche, relacionada con copias certificadas, existe una mayoría de siete votos con voto en contra del señor Ministro Layme Potisek y del señor Ministro Pérez Dayán.</p> <p>Tema VI.2.: Unanimidad de votos.</p> <p>Tema VI.3.: Unanimidad de votos.</p> <p>Efectos: Unanimidad de votos a favor de la propuesta, salvo por lo que se refiere a la extensión de invalidez en relación con el artículo 26, fracción III, respecto de la cual, en sus términos, existen tres votos a favor; el voto de la señora Ministra Presidenta Piña Hernández es solo por la porción normativa indicada; además, la señora Ministra Presidenta vota por la extensión de invalidez al voto concreto que se</p>
<p>Controversia Constitucional 65/2024</p> <p>Ponente: Ministro González Alcántara Carranza</p> <p>Resuelto: 08/08/2024</p>	<p>Constitucional</p>	<p>Invalidez del artículo 22, fracciones XXXI y XXXII de la Ley de Ingresos del Municipio de Acuña, del mencionado Estado para el ejercicio fiscal de 2024, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad de 22 de diciembre de 2023, mediante Decreto 599.</p>	<p>¿Las normas impugnadas que disponen el cobro por el otorgamiento de permisos, ya sea para construcción o la remodelación de pozos incluyendo aquellos verticales o direccionales, establecidos para la extracción de hidrocarburos que se encuentren en la roca reservoria, invaden la competencia del Congreso de la Unión prevista en artículo 73, fracción X, constitucional para legislar en toda la República sobre hidrocarburos?</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y fundada esta controversia constitucional.</p> <p>SEGUNDO. Se declara la invalidez del artículo 22, fracciones XXXI y XXXII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2024, expedida mediante el Decreto 599, publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa el veintidós de diciembre de dos mil veintitrés.</p> <p>TERCERO. La declaratoria de invalidez surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, en los términos precisados en el apartado VIII de esta determinación.</p> <p>CUARTO. Publíquese esta resolución en el diario oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del estado de Coahuila de Zaragoza, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Periodo de receso de la ministra Lenia Batres Guadarrama.</p>	<p>Periodo de receso de la ministra Lenia Batres Guadarrama.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas impugnadas, oportunidad, legitimación activa, legitimación pasiva y causas de improcedencia: Unanimidad de votos.</p> <p>Fondo: Unanimidad de votos.</p> <p>Efectos: Unanimidad de votos.</p> <p>Resolutivos: Unanimidad de votos.</p>

<p>Acciones de Inconstitucionalidad 43/2024 y su acumulada 51/2024</p> <p>Ponente: Ministerio Pérez Dayán</p> <p>Resultado: 12/08/2024</p>	<p>Constitucional</p>	<p>1. ¿El artículo 90 de la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, al establecer el cálculo individualizado del servicio de alumbrado público tomando en consideración el fin al cual está destinado el predio vulnera los principios de proporcionalidad y equidad tributarios?</p> <p>2. ¿Las diversas disposiciones contenidas en leyes de ingresos municipales impugnadas por cobrar injustificados por la reproducción de información pública en copias simples, impresiones, copias certificadas y reproducción en medios magnéticos o discos compactos, en relación con el derecho de acceso a la información pública?</p> <p>3. ¿El cobro de derechos por los servicios que presten los distintos municipios por la expedición de copias simples y certificadas, así como la legalización de firmas y la entrega de información a través de medios digitales y por su impresión, vulneran el principio de proporcionalidad por que las tarifas repercuten realmente el costo de la prestación de dichos servicios?</p> <p>4. ¿La imposición de una tasa adicional del 4% a las personas contribuyentes de los impuestos predial y sobre traslado, resulta contraria al principio de proporcionalidad tributaria?</p> <p>5. ¿El cobro de un derecho por la emisión de un permiso para que los gobernados tengan reuniones o eventos sociales transgrede el derecho a la libertad de reunión al condicionar el ejercicio de éste al pago para la obtención del permiso respectivo?</p> <p>6. ¿El cobro por el registro a destiempo de nacimientos transgrede el derecho humano a la identidad y la gratuidad en la emisión de la primera acta de nacimiento?</p> <p>7. ¿Las diversas disposiciones que prevén una multa a quienes participen en juegos de cualquier índole en la vía pública vulneran el principio de legalidad en su vertiente de favorabilidad?</p>	<p>PRIMERO. Es parcialmente procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada.</p> <p>SEGUNDO. Se sobrese en la acción de inconstitucionalidad 45/2024, respecto de los artículos diecinueve de la Ley de Ingresos del estado de Chihuahua, así como 26 y 27 de la Ley de Ingresos del municipios de Delicias, Chihuahua, ambas para el ejercicio fiscal de 2024.</p> <p>TERCERO. Se declara la invalidez de diversas disposiciones de las leyes de ingresos de distintos municipios del estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal de 2024, publicadas en el periódico oficial de dicha entidad federativa el treinta de diciembre de dos mil veintitrés.</p> <p>CUARTO. La declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Chihuahua, en los términos precisados en el apartado VII de esta determinación.</p> <p>QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Periodo de receso de la ministra Lemia Batres Guadarrama.</p>	<p>Periodo de receso de la ministra Lemia Batres Guadarrama.</p>	<p>Apartados de competencia, oportunidad y legitimación. Unanimidad de votos.</p> <p>Causas de improcedencia: Unanimidad de votos por lo que se refiere a la imposición de una multa a quienes participen en juegos de cualquier índole en la vía pública y a la imposición de una tasa adicional del 4% a las personas contribuyentes de los impuestos predial y sobre traslado, y mayoría de seis votos por lo que se refiere a sobreseer respecto del artículo diecinueve de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua; el señor Ministro González Alcántara Carrancá, con anuncio de voto particular; la señora Ministra Presidenta Píña Hernández, en contra de las consideraciones de los párrafos 41 y 48, y anuncio de voto concurrente.</p> <p>Precisión de las normas impugnadas: Unanimidad de votos.</p> <p>Fondo tema I: Unanimidad de votos.</p> <p>Tema II: unanimidad de nuevos votos a favor de la propuesta y mayoría de ocho votos por lo que se refiere a los numerales precedidos de la Ley de Ingresos del Municipio de Saucilla, al realizar su participación por el señor Ministro Pardo Rebollo y anuncio de voto concurrente de la señora Ministra Presidenta Píña Hernández y del Ministro Gutiérrez Ortiz Mena.</p> <p>Tema III: unanimidad de votos a favor de la propuesta con las siguientes salvedades: no tomas en consideración los desahucios por</p>
<p>Acción de Inconstitucionalidad 154/2023</p> <p>Ponente: Ministro Pardo Rebollo</p> <p>Resultado: 13/08/2024</p>	<p>Constitucional</p>	<p>1. ¿El artículo 610, las fracciones II y IV, en la porción normativa "que hubiere cumplido la edad exigida por la legislación sustantiva de cada Entidad Federativa", en virtud de que autoriza a las entidades federativas para que, bajo un parámetro de "edad", se determine la posibilidad de ejercicio del derecho de pedir y recibir cuentas de la persona tutora, transgrede el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser sujetos de derecho con autonomía progresiva, así como de no ser discriminados por razón de edad?</p> <p>2. ¿El vocablo "menor" empleado en la fracción II del artículo 610 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, es inconstitucional, en virtud de que otorga a las niñas, niños y adolescentes una condición de incapacidad, aunado a que conlleva una situación relacional que siempre habrá un mayor, y con ello, los limita en su autonomía?</p> <p>3. ¿El artículo 638, fracción III, del Código impugnado al condicionar la restitución de una niña, niño o adolescente a que no hubieren transcurrido más de tres años desde que fue presentada la solicitud de restitución, transgrede el principio de interés superior de las infancias y adolescencias que reposita en la protección de la familia, pues permite que el solo transcurso del tiempo legitime al acontecimiento legal de la sustracción, soslayando las particularidades del caso?</p> <p>4. ¿El artículo 554 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en su segunda parte, al definir la violencia vicaria como la violencia ejercida contra las mujeres a través de sus hijos, es inconstitucional toda vez que no tiene como objeto erradicar todas las formas de violencia que tienen lugar en el seno familiar y las relaciones intrafamiliares, con independencia del sujeto que las ejerza, ante su levedad para los integrantes de la familia, en especial de las niñas y adolescentes?</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se reconoce la validez de los artículos 554 en su porción normativa "entendida como la violencia ejercida contra las mujeres a través de sus hijos" y 610, fracción II, en su porción normativa "el mismo menor" del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares expedido mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés.</p> <p>TERCERO. Se declara la invalidez de los artículos 638, fracciones II y IV en sus porciones normativas "que hubiere cumplido la edad exigida por la legislación sustantiva de cada entidad federativa" y 638, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares expedido mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso de la Unión, conforme a lo expuesto en los apartados sexto y séptimo de esta decisión.</p> <p>CUARTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, oportunidad, precisión de las normas reclamadas, legitimación y causas de improcedencia: A favor.</p> <p>Estudio de fondo I: A favor.</p> <p>Estudio de fondo II: A favor del proyecto, con las modificaciones señaladas.</p> <p>Estudio de fondo III: A favor.</p> <p>Estudio de fondo IV: A favor.</p>	<p>Estudio de fondo IV: Muchas gracias, Ministra Presidenta. Yo estoy a favor de este apartado que reconoce que la definición de la "violencia vicaria" como violencia ejercida en contra de las mujeres a través de los hijos, no es discriminatoria en tanto que la distinción o exclusión basada en el género masculino se justifica en garantizar el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia.</p> <p>La finalidad de la norma es correspondiente con el contenido de los artículos 1 y 4", párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer porque busca garantizar el efectivo cumplimiento y respeto del derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia. El Congreso de la Unión realizó un tratamiento diferenciado con el fin de garantizar la protección para las mujeres y sus hijos e hijas en caso de violencia vicaria. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a partir de la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, se dio a conocer la magnitud de diversos tipos de violencia contra las mujeres. Al menos, el 70% (setenta por ciento) de mujeres mayores de 15 años ha experimentado algún tipo de violencia en su vida.</p>	<p>Apartados de competencia, oportunidad, precisión de las normas reclamadas, legitimación y causas de improcedencia: Unanimidad de votos.</p> <p>Estudio de fondo I: Unanimidad de votos.</p> <p>Estudio de fondo II: unanimidad de votos a favor del sentido de la propuesta modificada; el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena anuncio voto concurrente; el señor Ministro González Alcántara Carrancá, en contra de los párrafos 95 a 97; la señora Ministra Esquivel Mossa, con consideraciones adicionales; el señor Ministro Aguilar Morales, en contra de los párrafos 95 a 97; la señora Ministra Presidenta Píña Hernández, por consideraciones diversas, anuncia voto concurrente y en contra de los párrafos 91 y 100.</p> <p>Estudio de fondo III: Unanimidad de votos.</p> <p>Estudio de fondo IV: Unanimidad de votos.</p>
<p>Acción de Inconstitucionalidad 222/2023</p> <p>Ponente: Ministra Esquivel Mossa</p> <p>Resultado: 19/08/2024</p>	<p>Constitucional</p>	<p>1. ¿Los artículos 6, fracción V, y 25, fracciones II, III, IV y V, impugnados invaden la facultad exclusiva del Congreso de la Unión, prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Federal, dado que inciden en el estatus migratorio o condición jurídica de las personas migrantes, o bien, con las atribuciones de la Federación para establecer políticas en ese rubro?</p> <p>2. ¿El artículo 20 impugnado restringe o limita el derecho de las personas migrantes a recibir atención médica, al condicionarlo únicamente a prevista por el sector público?</p> <p>3. ¿El artículo 23 impugnado, al disponer "en tanto el Instituto Nacional de Migración determina su condición migratoria", invadía la facultad del Congreso prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Federal?</p> <p>4. ¿Los artículos 4, fracción XI, 24, fracción VII, 29 y 30 impugnados, por lo que se implementó un registro estatal de migrantes de carácter confidencial y que tiene por objeto la inscripción voluntaria de datos personales de los y las migrantes, como el nombre, procedencia, domicilio en su lugar de origen y todos aquellos datos que pudieran facilitar su ubicación o la de sus familiares, invaden igualmente la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de emigración e inmigración?</p> <p>5. ¿Los artículos 21, 22, 23, salvo por la porción que se declararía inválida en apartado previo, 24, fracción XX y 26, impugnados, aun cuando replican disposiciones de la Ley de Migración, invaden la competencia federal?</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se reconoce la validez de los artículos 21, 22, 23, salvo la porción normativa "en tanto el Instituto Nacional de Migración determina su condición migratoria", 24, fracción VII, y 26 de la Ley para la Protección de los Derechos de las personas migrantes del estado de Aguascalientes, expedida mediante el Decreto número 451, publicado en el periódico oficial de esa entidad el seis de noviembre de dos mil veintitrés.</p> <p>TERCERO. Se declara la invalidez de los artículos 4, fracción XI, 6, fracción V, 20, párrafo último, en la porción normativa "prevista por el sector público", 23, en la porción normativa "en tanto el Instituto Nacional de Migración determina su condición migratoria", 24, fracción VII, 25, fracciones II a V, y 29 y 30 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas Migrantes del estado de Aguascalientes.</p> <p>CUARTO. Las declaratorias de invalidez surtirán sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del estado de Aguascalientes.</p> <p>QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del estado de Aguascalientes, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, oportunidad, legitimación, precisión de normas, y causas de improcedencia y sobreseimiento: En contra de la legitimación de la CNDH.</p> <p>Estudio de fondo: PUES, obligada por la mayoría, me pronuncio, en este caso, a favor de la invalidez. De acuerdo con el proyecto modificado.</p> <p>Estudio de fondo segundo apartado: A favor.</p> <p>Efectos: En contra.</p>	<p>Legitimación Gracias, Ministra Presidenta. Yo me manifiesto en contra de la legitimación para la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque lo que se está considerando (pues) es un tema de invasión de facultades con base en el artículo 105, fracción II, de nuestra Constitución, no un tema de derechos humanos, que es el que corresponde a la competencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, creo que la naturaleza del fondo de este asunto (pues) es de una controversia constitucional, no de una acción de inconstitucionalidad y, en este caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que alega que se invaden facultades de la Comisión del Congreso de la Unión (pues) no tendría por qué haber interpuesto una acción de inconstitucionalidad. Gracias.</p> <p>Efectos: Si, gracias. Bueno..., bueno, a mí me sorprende, más bien, que estemos notificando los resolutivos por separado. Finalmente, el acto jurídico que nosotros emitimos es la sentencia, que debería ser notificada en su conjunto, es decir, el engorse porque, si no, estamos separando una parte de ese acto, que es esta parte ejecutiva de la propia sentencia. Entonces, me parecería que es obvio que debería ser a partir del engorse que, además, es el que indica (pues) la motivación de la propia sentencia.</p>	<p>Apartados de competencia, oportunidad y legitimación. Unanimidad de votos.</p> <p>Estudio de fondo: En relación con los artículos 4, fracción XI, y como 29 y 30, existe una mayoría de nuevos votos a favor de la propuesta de invalidez con voto en contra del señor Ministro Pardo Rebollo y la señora Ministra Rosa Farjat. De esos tres, con el señor mismo tema.</p> <p>Después, por lo que se refiere el artículo 6, fracción V, existe unanimidad de once votos por la invalidez. En cuanto al artículo 20, párrafo primero, en la porción normativa impugnada, existe, en los términos de la propuesta, mayoría de nuevos votos por la invalidez de la porción, con invalidez total del señor Ministro Aguilar Morales y de la señora Ministra Presidenta Píña. Y, por lo que se refiere al artículo 23, porción normativa, cuyas consideraciones de la propuesta modificadora, existe una mayoría de ocho votos por la invalidez en sus términos; la señora Ministra Presidenta Píña, por la invalidez total de ese artículo 23.</p> <p>Por lo que se refiere el artículo 24, ya lo reportamos. Y, en cuanto al artículo 25, en cuanto a la fracción V, mayor de diez votos con voto en contra de la señora Ministra Esquivel Mossa, con consideraciones adicionales.</p>
<p>Acciones de Inconstitucionalidad 143/2021 y su acumulada 144/2021</p> <p>Ponente: Ministro Gutiérrez Ortiz Mená</p> <p>Resultado: 22/08/2024</p>	<p>Constitucional</p>	<p>1. ¿Debe sobreseerse en la acción de inconstitucionalidad respecto de los artículos 31, 43, 84, 93, 124, 131, 157 y Quinto transitorio, a falta de conceptos de invalidez?</p> <p>2. ¿También debe sobreseerse respecto de los diversos artículos 24, 25, 26, 30, 41, 42, 54, fracciones III, IV y V, 85, 89, 125 y 143, último párrafo, al haber cesado sus efectos?</p> <p>3. ¿Se vulneraron las reglas del procedimiento legislativo, porque no se contempló en la exposición de motivos o el dictamen la estimación del impacto presupuestal, en contravención a los principios de certeza y seguridad jurídica contenidos en el artículo 16 de la Constitución General?</p> <p>4. ¿El artículo 54 impugnado omite establecer los expedientes de las denuncias y procedimientos de juicio político ante el Congreso del Estado como supuesto para clarificar la información como reservada, o fin de proteger los intereses generales que se pueden ver afectados por la divulgación de dicha información?</p> <p>5. ¿Los artículos 78, 79, 80, 87 y 90, impugnados, al no proporcionar los datos por replicar la obligación prevista en el artículo 40 de la Ley General, referente a otorgar un presupuesto adecuado y suficiente a los organismos garantes para su funcionamiento efectivo?</p> <p>6. ¿El artículo 90 de la ley local, al disponer que la designación de los Comisionados estará a cargo del Congreso del Estado con facultad soberana, sin establecer la participación del Poder Ejecutivo del Estado en el procedimiento de designación relativo, resulta contrario al mandato constitucional que otorga poderes para la designación de los integrantes del órgano garante del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en las entidades federativas?</p> <p>7. ¿El artículo Cuarto transitorio del Decreto impugnado, viola la autonomía del órgano</p>	<p>PRIMERO. Es parcialmente procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada.</p> <p>SEGUNDO. Se sobrese en la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada, respecto a los artículos 24, 25, 26, 30, 31, 421, 42, 54, fracciones III, IV y V, 55, 84, 89, 93, 124, 131, 135, 143, párrafo último, 157 y transitorio quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y buen gobierno del estado de Oaxaca, expedida mediante el Decreto número 2582, publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa el cuatro de septiembre de dos mil veintinueve, así como en relación con las omisiones legislativas alegadas y precisadas en el apartado V de esta decisión.</p> <p>TERCERO. Se reconoce la validez de los artículos 54, con las salvedades precisadas en el resolutorio anterior, 78, 79, 80, 87 y 90 de la referida Ley de Transparencia.</p> <p>CUARTO. Se declara la invalidez del artículo transitorio cuarto de la citada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y buen gobierno del estado de Oaxaca, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al congreso de dicho estado.</p> <p>QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, oportunidad y legitimación: A favor.</p> <p>Precisión de las normas impugnadas: A favor.</p> <p>Causas de sobreseimiento e improcedencia: A favor.</p> <p>Estudio de fondo tema 1: A favor.</p> <p>Estudio de fondo tema 2: A favor.</p> <p>Estudio de fondo tema 3: A favor.</p> <p>Estudio de fondo tema 4: A favor.</p> <p>Estudio de fondo apartado 5: En contra.</p> <p>Efectos: En contra.</p> <p>Resolutivos: A favor.</p>	<p>Apartados de competencia, oportunidad y legitimación: A favor.</p> <p>Precisión de las normas impugnadas: A favor.</p> <p>Causas de sobreseimiento e improcedencia: A favor.</p> <p>Estudio de fondo apartado 5: Gracias, Ministra Presidenta. También me voy a manifestar en contra de este tema V del estudio de fondo del proyecto que propone declarar la invalidez del artículo Cuarto Transitorio del decreto impugnado, ya que esta disposición no establece una remoción de los comisionados y comisionadas que se encontraban en funciones al momento de que se publicó la ley impugnada. El primero de enero de dos mil veintinueve se publicó en el Periódico Oficial de la entidad el Decreto 2473 aprobado por la LXIV legislatura el catorce de abril de ese año, mediante el cual se reformó en la Constitución local para establecer el órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca, en vez del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca.</p> <p>Datos Personales del Estado de Oaxaca.</p> <p>El artículo Segundo de ese decreto ordenó al Congreso de la entidad federativa emitir una nueva Ley de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca. Por lo tanto, al tratarse de la creación de un nuevo organismo, necesariamente una nueva ley tendría que establecer una disposición transitoria para regular su primera integración. En ese sentido, el Cuarto transitorio impugnado no establece una causa de excepción como excepción al principio de</p>	<p>Apartados de competencia, oportunidad y legitimación. Unanimidad de votos.</p> <p>Precisión de las normas impugnadas: Unanimidad de votos.</p> <p>Causas de sobreseimiento e improcedencia: mayoría de nuevos votos a favor de la propuesta, con voto en contra de la señora Ministra Esquivel Mossa; con precisiones en cuanto a las consideraciones del señor Ministro Pardo Rebollo, por lo que se refiere a sobreseimiento en relación con los artículos 93 y 124, al igual que la señora Ministra Presidenta Píña Hernández, por causas diversas en cuanto al Quinto transitorio; la señora Ministra Ortiz AHF, también propone el sobreseimiento respecto del artículo Cuarto transitorio.</p> <p>En cuanto al apartado VII. Cesación de efectos, existe unanimidad de diez votos, por el señor Ministro Pardo Rebollo y el señor Ministro Presidenta Píña Hernández, por el sobreseimiento respecto de la totalidad del artículo 54; el señor Ministro González Alcántara Carrancá, también en relación con el artículo 90; y en contra del criterio de cambio de sentido normativo, la señora Ministra Esquivel Mossa, el señor Ministro Pardo Rebollo y la señora Ministra Presidenta Píña Hernández.</p> <p>En cuanto al apartado VIII, en cuanto a lo que se refiere a sobreseer respecto a la omisión relacionada con aumento e incremento presupuestal al Instituto autor, mayoría de nuevos votos, con voto en contra del señor Ministro Aguilar Morales; unanimidad de diez votos por lo que se refiere a la diversa omisión; la señora Ministra Presidenta Píña Hernández, también se pronuncia sobre el estudio de diversa consideración planteada por el IMN y, finalmente, una mayoría de diez votos por lo</p>
<p>Acción de Inconstitucionalidad 238/2020</p> <p>Ponente: Ministro Laynez Poblete</p> <p>Resultado: 22/08/2024</p>	<p>Constitucional</p>	<p>1. ¿El legislador local, al establecer como uno de los fines que deberá tener la educación impartida por el Estado de Nuevo León, invade la constitucional por que pretende adicional al establecido actualmente en una ideología única respecto del momento en que comienza y termina la vida, la cual, además tiene connotaciones religiosas?</p> <p>2. ¿Dicha norma resulta incompatible con los precedentes de la Suprema Corte en cuanto a la definición de la vida desde la concepción y la prohibición del aborto?</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se declara la invalidez del artículo 7, fracción XII, en su porción normativa "desde la concepción hasta la muerte natural" de la Ley de Educación del Estado de Nuevo León, reformado mediante el Decreto número 311, publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa el veinticuatro de julio de dos mil veinte, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al congreso de dicho estado.</p> <p>TERCERO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Estudio de fondo: A favor del proyecto, obviamente, en respeto de la educación laica y con absoluto respeto a la libertad de pensamiento, religión y creencias en nuestro país.</p> <p>Efectos: A favor.</p> <p>Resolutivos: A favor.</p>	<p>Estudio de fondo: No, estoy totalmente de acuerdo con la posición manifestada por el presidente. Creo que con esa claridad de violaciones de estos distintos derechos humanos, podíamos estar votando el proyecto. Gracias.</p>	<p>Apartados de requisitos procesales, competencia, oportunidad y legitimación, precisión de las normas reclamadas, y causas de improcedencia y sobreseimiento: Unanimidad de votos.</p> <p>Estudio de fondo: Unanimidad de votos a favor del resolutorio de la propuesta; el señor Ministro González Alcántara Carrancá, la señora Ministra Esquivel Mossa y la Ministra Ortiz AHF anuncian voto concurrente; el señor Ministro Aguilar Morales y el señor Ministro Pardo Rebollo, en contra de consideraciones, con anuncio de voto concurrente; la señora Ministra Batres Guadarrama anuncia consideraciones; el señor Ministro Pérez Dayán, en contra de consideraciones e invalidez solo por incompetencia; y la señora Ministra Presidenta Píña Hernández, con algunas salvedades y anuncio de voto concurrente.</p> <p>Efectos: Unanimidad de votos.</p> <p>Resolutivos: Unanimidad de votos.</p>

<p>Acción de Inconstitucionalidad 75/2024</p> <p>Ponente: Ministerio Pérez Dayán</p> <p>Resuelto: 26/08/2024</p>	<p>Constitucional</p>	<p>1. ¿Los artículos impugnados prevén cobros injustificados y desproporcionados por la expedición de documentos en copias y certificaciones (no relacionados con acceso a la información pública)?</p> <p>2. ¿Las normas que prevén infracciones por generar escándalo en la vía pública o molestias, resultan en un amplio margen de apreciación de la autoridad para determinar de manera discrecional y subjetiva qué tipo de conducta encuadraría en el supuesto normativo sancionado para que el presunto infractor sea acreedor a una multa?</p> <p>3. ¿Las diversas disposiciones que prevén sanciones con multa a quienes agreden verbalmente o físicamente a una autoridad, cometa faltas contra la integridad moral, injurie personas que asistan a un espectáculo público, o cometa faltas que contraríen la moral y los buenos costumbres, resultan igualmente inconstitucionales?</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se declara la invalidez de diversos artículos de las leyes de ingresos de distintos municipios del estado de Oaxaca, para ejercicio fiscal 2024, publicadas en el periódico oficial de dicha entidad federativa el dos de marzo de dos mil veinticuatro.</p> <p>TERCERO. La declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al congreso del estado de Oaxaca y conforme a los efectos precisados en el apartado VII de esta determinación.</p> <p>CUARTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del estado de Oaxaca, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad, legitimación, y causas de improcedencia: A favor.</p> <p>Estudio de fondo A): En contra.</p> <p>Estudio de fondo B): A favor.</p> <p>Efectos: A favor, con consideraciones respecto al segundo efecto.</p>	<p>Estudio de fondo A): Yo estaría votando en contra de este apartado, dado que se propone invalidar porciones normativas de Leyes de Ingresos de diversos Municipios de Oaxaca, relativas a las tarifas por copias simples y certificadas, considerándose desproporcionales. En el proyecto se considera que las tarifas por la reproducción de copias simples o certificadas no son acordes con los montos exigidos por los municipios para brindar el servicio; sin embargo, no se expone ningún parámetro utilizado para llegar a esta conclusión; es decir, no se indica cuál es el costo verdadero que representaría para la autoridad el sacar las copias (ya sean simples o certificadas), y conocer esa medida sería indispensable para determinar si, en efecto, las tarifas referidas son desproporcionadas o no. Debería tomarse en cuenta que el costo de las copias también puede incluir el salario de las personas servidoras públicas por el tiempo que tardan en expedir un documento, así como el desgaste que sufre los equipos utilizados para ese fin cuando son propiedad de un municipio, o la renta que se paga al arrendador de equipos o el pago de servicios como: electricidad, internet, licencias de software, etcétera.</p> <p><i>Continúa a la siguiente sesión del organismo. La reproducción de copias</i></p> <p>Apartados de competencia, oportunidad, legitimación, causas de improcedencia y delimitación de la litis: Gracias, Ministra Presidenta. Yo estoy a favor del proyecto que propone reconocer la legitimación de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit; sin embargo, considero que ese reconocimiento debe ir dirigido únicamente con relación a los conceptos de invalidez relacionados con una probable violación a los derechos humanos de los trabajadores que, según la metodología que utilizó el proyecto, se agruparon en el tema de la precisión de la litis, relacionado con el régimen de pensiones, sin embargo, estoy en contra de reconocer legitimación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit para controvertir artículos de la ley impugnado con motivo de una probable invasión de facultades exclusivas del Congreso de la Unión, de violaciones al procedimiento legislativo o de disposiciones relacionadas con temas meramente orgánicos del fondo de ahorro. En ese sentido, tanto en la legitimación como en las causas de improcedencia relacionadas con esta impugnación, estaría votando parcialmente a favor. Gracias.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad, legitimación, y causas de improcedencia: Unanimidad de votos.</p> <p>Estudio de fondo A): mayoría de nueve votos a favor de la propuesta; la señora Ministra Ortiz Ahlf, por razones distintas; la señora Ministra Ríos Farjat, por razones concurrentes adicionales; voto en contra de la señora Ministra Batres Guadarrama y del señor Ministro Laynez Potesek, quien anuncia voto particular.</p> <p>Estudio de fondo B): Unanimidad de votos.</p> <p>Efectos: Unanimidad de votos, con la separación expresa tanto del Ministro González Alcántara, como de la Ministra Batres, en cuanto al segundo efecto precisado en cuanto a la exhortación al Congreso local.</p>
<p>Acción de Inconstitucionalidad 99/2023 y su acumulada 100/2023</p> <p>Ponente: Ministerio Pérez Dayán</p> <p>RETORNO: 26/08/2024</p>	<p>Constitucional</p>	<p>1. ¿El Congreso del Estado de Nayarit carece de atribuciones para legislar en materia de sistemas de ahorro para el retiro y sus participantes y, en consecuencia, para regular aspectos atinentes a la constitución, organización y funcionamiento del Fondo de Ahorro para el Retiro Digno de las Trabajadoras y Trabajadores del Estado Libre y Soberano de Nayarit?</p> <p>2. ¿El Congreso del Estado de Nayarit carece de atribuciones para prever como sujetos del régimen previsional de la Ley del Fondo de Ahorro para el Retiro Digno de las Trabajadoras y de los Trabajadores del Estado Libre y Soberano de Nayarit, a los trabajadores de entidades privadas [régimen obligatorio] o a los trabajadores independientes [régimen voluntario]?</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada.</p> <p>SEGUNDO. Se declara la invalidez de la Ley del Fondo de Ahorro para el Retiro Digno de las Trabajadoras y de los Trabajadores del Estado Libre y Soberano de Nayarit decretada mediante el Decreto publicado en el Periódico Oficial del estado de Nayarit el dieciséis de marzo de dos mil veinticuatro.</p> <p>TERCERO. La declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos a los seis meses siguientes a la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Nayarit, dando lugar a la revisibilidad a la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado abrogada mediante referido decreto.</p> <p>CUARTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del estado de Nayarit, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, oportunidad, legitimación, causas de improcedencia y delimitación de la litis: Parcialmente a favor de la legitimación.</p> <p>Estudio: En contra.</p>	<p>Apartados de competencia, oportunidad, legitimación, causas de improcedencia y delimitación de la litis: Gracias, Ministra Presidenta. Yo estoy a favor del proyecto que propone reconocer la legitimación de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit; sin embargo, considero que ese reconocimiento debe ir dirigido únicamente con relación a los conceptos de invalidez relacionados con una probable violación a los derechos humanos de los trabajadores que, según la metodología que utilizó el proyecto, se agruparon en el tema de la precisión de la litis, relacionado con el régimen de pensiones, sin embargo, estoy en contra de reconocer legitimación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit para controvertir artículos de la ley impugnado con motivo de una probable invasión de facultades exclusivas del Congreso de la Unión, de violaciones al procedimiento legislativo o de disposiciones relacionadas con temas meramente orgánicos del fondo de ahorro. En ese sentido, tanto en la legitimación como en las causas de improcedencia relacionadas con esta impugnación, estaría votando parcialmente a favor. Gracias.</p>	<p>Apartados de competencia, oportunidad, legitimación, causas de improcedencia y delimitación de la litis: Unanimidad de votos a favor de estos apartados, salvo por el que se refiere a la legitimación y causas de improcedencia, en relación con los cuales existe voto en contra de la señora Ministra Batres Guadarrama, por lo que se refiere a las comisiones de derechos humanos acontecidas.</p> <p>Estudio: Mayoría de nueve votos en contra de la propuesta del proyecto; con precisiones del señor Ministro Pardo Rebollo y de la señora Ministra Presidenta Piña Hernández.</p> <p>RETORNO</p>
<p>Acción de Inconstitucionalidad 176/2023</p> <p>Ponente: Ministra Ortiz Ahlf</p> <p>RETIRADO: 02/09/2024</p>	<p>Constitucional</p>	<p>Invalidez de los artículos 66 sexies y 29 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del mencionado Estado, publicadas en el Periódico Oficial de esa entidad de 6 de julio de 2023, mediante Decretos 65-614 y 65-615.</p> <p>¿Se actualiza la violación al procedimiento legislativo consistente en el incumplimiento de la votación necesaria para la aprobación del Decreto 65-615, con potencial invalidez suficiente para declarar su invalidez?</p>	<p>PRIMERO. Es parcialmente procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se sobreescribe en la presente acción de inconstitucionalidad respecto del Decreto no. 65-614, mediante el cual se adiciona el artículo 66 sexies a la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa el seis de julio de dos mil veintitrés.</p> <p>TERCERO. Se declara la invalidez del Decreto no. 65-615, mediante el cual se reforma el artículo 29 de la Ley Sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa el seis de julio de dos mil veintitrés, el cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al congreso de dicho estado.</p> <p>CUARTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, así como en el semanario Judicial de la Federación y su gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad y legitimación: A favor.</p> <p>Causas de improcedencia y sobreescribimiento: A favor.</p> <p>Estudio de fondo: En contra.</p>	<p><i>Tratado: Gracias, Presidenta. Yo estaría votando en contra de este apartado.</i></p> <p>Yo estaría pronunciándome en contra del apartado VI.1, respecto del estudio de presuntas violaciones al procedimiento legislativo. Específicamente, me separo de la metodología que anuncian los párrafos 64 y 65 del proyecto, en los que se propone estudiar de manera preponderante el procedimiento legislativo</p> <p>Y, solo en caso de que no se actualicen las violaciones aducidas, realizar el análisis de constitucionalidad del artículo reclamado. No comparto esta metodología porque, como he manifestado antes, creo que ninguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta a esta Suprema Corte para revisar el procedimiento legislativo en sí mismo, pues solo tiene facultades para determinar si el contenido de una norma general es contradictorio con el texto Constitucional.</p> <p>En ese sentido, la Suprema Corte tendría que privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procesales, como mandata el artículo 17, párrafo tercero, de la propia Constitución y avocarse al estudio del fondo del asunto, es decir, determinar si el contenido de la norma general impugnada contraviene o no a alguna disposición de la propia Constitución en vez de analizar cuestiones procedimentales.</p> <p><i>Adicionalmente, estaría votando en contra de</i></p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad y legitimación: Unanimidad de votos.</p> <p>Causas de improcedencia y sobreescribimiento. Por lo que se refiere a la propuesta contenida en el numeral 1, existe mayoría de nueve votos con voto en contra del señor Ministro González Alcántara Carrancá y la señora Ministra Esquivel Mossa; por lo que se refiere al numeral 2, en cuanto a desestimar la causa de improcedencia sobre extemporaneidad, mayoría de diez votos con voto en contra de la señora Ministra Esquivel Mossa; por lo que se refiere al numeral 3, desestimar cesación de efectos en cuanto al 2º, numeral 1, mayoría de siete votos con voto en contra del señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena, la señora Ministra Esquivel Mossa, la señora Ministra Ríos Farjat y el señor Ministro Laynez Potesek; en cuanto al artículo 2º, numeral 2, mayoría de ocho votos en cuanto a desestimar la improcedencia con voto en contra de la señora Ministra Esquivel Mossa y de la señora Ministra Presidenta Piña Hernández; y, por lo que se refiere a la propuesta de sobreescribimiento por cesación de efectos del artículo 66 SEXIES, mayoría de diez votos con voto en contra de la señora Ministra Esquivel Mossa.</p> <p>Estudio: Mayoría de siete votos a favor de la propuesta del proyecto con voto en contra de la señora Ministra Esquivel Mossa por el sobreescribimiento; del señor Ministro Pardo Rebollo, por el sobreescribimiento; la señora Ministra Batres Guadarrama y la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, por sobreescribimiento.</p>
<p>Controversia Constitucional 70/2024</p> <p>Ponente: Ministra Ríos Farjat</p> <p>Resuelto: 02/09/2024</p>	<p>Constitucional</p>	<p>Invalidez del artículo 20, fracciones IX y X de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, para el ejercicio fiscal de 2024, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad de 22 de diciembre de 2023, mediante Decreto 616.</p> <p>¿Los preceptos impugnados que prevén el cobro de un derecho por la expedición de permisos para la construcción y remodelación de pozos destinados a la extracción de hidrocarburos, invaden la competencia exclusiva de la Federación para regular, aprovechar y explotar los bienes dominio de la Nación?</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y fundada la presente controversia constitucional.</p> <p>SEGUNDO. Se declara la invalidez del artículo 20, fracciones IX y X, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2024, expedida mediante el decreto 616, publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa el veintidós de diciembre de dos mil veintitrés.</p> <p>TERCERO. La declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, en los términos precisados en el apartado VIII de esta determinación.</p> <p>CUARTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas impugnadas, oportunidad, legitimación activa, legitimación pasiva y causas de improcedencia y sobreescribimiento: A favor.</p> <p>Estudio de fondo: Unanimidad de votos.</p> <p>Efectos: A favor, pero en contra del exhorto.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas impugnadas, oportunidad, legitimación activa, legitimación pasiva y causas de improcedencia y sobreescribimiento: A favor.</p> <p>Estudio de fondo: Unanimidad de votos.</p> <p>Efectos: Si. Únicamente, obviamente estoy a favor, nada más estaría en contra de este último exhorto, dado que me parece que es un exceso porque no tiene sustento en nuestras atribuciones. Tiene, incluso, un dejo (me parece) de soberbia y, además, es absolutamente injusta, dado que se trata de una legislación anual; pero, además, de una autoridad cambiante, permanentemente cambiante. Entonces, me parece que no tiene ningún sentido porque, incluso, si se cumple ese exhorto, pues estamos obligados, igualmente, a hacer el análisis que corresponde conforme a nuestras facultades.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas impugnadas, oportunidad, legitimación activa, legitimación pasiva y causas de improcedencia y sobreescribimiento: Unanimidad de votos.</p> <p>Estudio de fondo: Unanimidad de votos.</p> <p>Efectos: Unanimidad de votos a favor de la propuesta y mayoría de seis votos a favor del exhorto respectivo.</p>
<p>Acción de Inconstitucionalidad 201/2023</p> <p>Ponente: Ministra Ortiz Ahlf</p> <p>RETIRADO: 17/09/2024</p>	<p>Constitucional</p>	<p>Invalidez del Decreto 65-626 mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas; de la Ley para el Desarrollo Económico y la Competitividad, de la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos asignados a los Poderes, Órganos y Ayuntamientos, de la Ley Estatal de Mejora Regulatoria para Tamaulipas y sus municipios; de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas; de la Ley Orgánica del Poder Judicial; de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, todas del mencionado Estado, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad de 23 de agosto de 2023.</p>	<p>PRIMERO. Es parcialmente procedente, pero infundada la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se sobreescribe en la presente acción de inconstitucionalidad respecto del artículo 28, párrafo 1, fracción IV, de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas, reformado mediante el decreto número 65-626, publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés.</p> <p>TERCERO. Se reconoce la validez del decreto número 65-626, publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés.</p> <p>CUARTO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas impugnadas, oportunidad, legitimación activa, legitimación pasiva y causas de improcedencia y sobreescribimiento: A favor.</p> <p>Estudio de fondo: Unanimidad de votos.</p> <p>Efectos: A favor, pero en contra del exhorto.</p>	<p>PRIMERO. Es parcialmente procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se declara la invalidez del artículo 20, fracciones IX y X, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2024, expedida mediante el decreto 616, publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa el veintidós de diciembre de dos mil veintitrés.</p> <p>TERCERO. Se declara la invalidez decretada surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, en los términos precisados en el apartado VIII de esta determinación.</p> <p>CUARTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad, legitimación, causas de improcedencia y delimitación de la litis: Parcialmente a favor de la legitimación.</p> <p>Estudio: En contra.</p>

<p>Acción de Inconstitucionalidad 233/2023</p> <p>Ponente: Ministra Ortiz Ahl</p> <p>Resuelto: 19/09/2024</p>	<p>Constitucional</p>	<p>Invalidez de diversas disposiciones de leyes de ingresos de municipios del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal de 2024, publicadas en el Periódico Oficial de esa entidad de 29 y de 30 de noviembre de 2023.</p>	<p>1. ¿Los preceptos impugnados que establecen cobros por servicios de reproducción de información no relacionada con el derecho de acceso a la información pública violan el principio de proporcionalidad tributaria? 2. ¿Los preceptos impugnados que establecen cobros por proporcionar información derivada de solicitudes realizadas en términos de la Ley de Transparencia Local violan el principio de gratuidad en la materia?</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se declara la invalidez de diversas disposiciones de las leyes de ingresos de distintos municipios del estado de Tlaxcala para ejercicio fiscal 2024, publicadas en el periódico oficial de dicha entidad federativa el veintinueve y el treinta de noviembre de dos mil veintitrés.</p> <p>TERCERO. La declaratoria de invalidez surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutive al congreso del estado de Tlaxcala, en los términos precisados en el apartado VII de esta determinación.</p> <p>CUARTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el periódico oficial del estado de Tlaxcala, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de los preceptos impugnados, oportunidad y legitimación: A favor.</p> <p>Causales de improcedencia: A favor.</p> <p>Estudio de fondo VI.1: En contra.</p> <p>Estudio de fondo VI.2: En contra.</p> <p>Efectos: En contra.</p> <p>Resolutivos: A favor.</p>	<p>Estudio de fondo VI.1: Si. Gracias, Ministra. Yo quisiera comentar que en esta parte del estudio de fondo me manifesté en contra, dado que se propone invalidar las peticiones normativas de las Leyes de Ingresos de dieciocho Municipios de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2024, relativas a las tarifas para copias certificadas no relacionadas con el acceso a la información pública, porque considera que dichas cuotas son desproporcionadas en tanto que no guardan una relación razonable con el costo de los materiales para la prestación del servicio, y me permito expresar tres motivos por los cuales me manifiesta en contra.</p> <p>En primer lugar, parece que no es posible determinar si la cuota que se cobra por el servicio de fotocopiado es proporcional al costo que representa para el municipio, pues la Suprema Corte y el proyecto correspondiente desonace ese parámetro. En segundo lugar, los derechos derivados de la prestación de un servicio público se deben cuantificar en función del costo que representa para el Estado brindar dicho servicio, y no en proporción a la capacidad económica del contribuyente. Y en tercer lugar, (pues) se perjudica a las finanzas públicas de los municipios más pobres y ello impide que se oriente el presupuesto a las actividades que benefician al mayor número de habitantes.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de los preceptos impugnados, oportunidad y legitimación: Unanimidad de votos.</p> <p>Causales de improcedencia: Unanimidad de votos.</p> <p>Estudio de fondo VI.1: mayoría de ocho votos a favor de la propuesta de invalidez, con voto en contra de la señora Ministra Bates Guadarrama, el señor Ministro Aguilar Morales, el señor Ministro Pardo Rebollo, y el señor Ministro Pérez Dayán.</p> <p>Estudio de fondo VI.2: mayoría de diez votos, con voto en contra de la señora Ministra Bates Guadarrama; el señor Ministro González Alcántara Carrandá, en contra del párrafo 63; el señor Ministro Pardo Rebollo, en contra de los párrafos 106 y 107; la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, en contra de los párrafos 63, 80 y 88.</p> <p>Efectos: mayoría de diez votos, con voto en contra de la señora Ministra Bates Guadarrama; y en cuanto al exhorto que se propone en el proyecto, mayoría de ocho votos, con voto en contra del señor Ministro González Alcántara Carrandá, la señora Ministra Bates Guadarrama y el señor Ministro Pérez Dayán.</p> <p>Resolutivos: Unanimidad de votos.</p>
<p>Acción de Inconstitucionalidad 41/2024</p> <p>Ponente: Ministra Ortiz Ahl</p> <p>Resuelto: 19/09/2024</p>	<p>Constitucional</p>	<p>Invalidez de diversas disposiciones de leyes de ingresos de municipios del Estado de Sonora, para el ejercicio fiscal de 2024, publicadas en el Periódico Oficial de esa entidad de 28 de diciembre de 2023.</p>	<p>1. ¿Los preceptos impugnados que establecen cobros por la organización y celebración de bailes, fiestas, espectáculos o festividades, vulneran el derecho a la libertad de reunión? 2. ¿Los preceptos impugnados que prevén multas derivadas de faltas que atentan contra las buenas costumbres, la moral y la libertad sexual, son violatorias del principio de seguridad jurídica? 3. ¿Los preceptos que establecen multas por participar en juegos y deportes en la vía pública transgreden el principio de seguridad jurídica? 4. ¿Los preceptos impugnados que prevén cobros por búsqueda de información y la emisión de certificaciones, son violatorios del principio de proporcionalidad y de gratuidad por acceso a información pública? 5. ¿Los preceptos que establecen el cobro por la prestación del servicio de alumbrado público transgreden los principios tributarios de proporcionalidad y equidad? 6. ¿Los preceptos que establecen multas por pelear en la vía pública o lotes baldíos son discriminatorios? 7. ¿Los preceptos que prevén multas por pelear en estado de ebriedad o bajo el influjo de tóxicos en interiores de vehículos o en la vía pública son violatorios del principio de seguridad jurídica?</p>	<p>PRIMERO. Es parcialmente procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se sobresee en la presente acción respecto del artículo 39 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Bacoachi, Sonora, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro.</p> <p>TERCERO. Se declara la invalidez de diversas disposiciones de leyes de ingresos y presupuesto de ingresos de los ayuntamientos de distintos municipios del estado de sonora para el ejercicio fiscal de 2024, publicadas en el boletín oficial de dicha entidad federativa el veintiocho de diciembre de dos mil veintitrés.</p> <p>CUARTO. La declaratoria de invalidez surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutive al congreso del estado de Sonora, en los términos precisados en el apartado VII de esta determinación.</p> <p>QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de los preceptos impugnados, oportunidad y legitimación: A favor.</p> <p>Causales de improcedencia y sobreesimio: A favor.</p> <p>Estudio de fondo VI.1: A favor pero contra la metodología.</p> <p>Estudio de fondo VI.2: A favor.</p> <p>Estudio de fondo VI.3: A favor.</p> <p>Estudio de fondo VI.4: En contra.</p> <p>Estudio de fondo VI.5: Parcialmente a favor, en los términos que acabo de expresar. Gracias.</p> <p>Estudio de fondo VI.6: A favor.</p> <p>Efectos: A favor, con excepción del párrafo 195 del proyecto de resolución.</p>	<p>Estudio de fondo VI.1: Gracias, Ministra Presidenta. En este caso, yo me manifiesto a favor, pero me separo de la metodología utilizada a través del test de proporcionalidad y estoy de acuerdo con que el proyecto que propone invalidar diversas normas de leyes de ingresos de los Municipios de Arizpe y Agua Prieta, relacionadas con el cobro de multas por realizar sin permiso bailes, fiestas, espectáculos, festividades o eventos de cualquier tipo, pues ello restringe de manera injustificada el ejercicio del derecho a la libertad de reunión. Coincido con esta apreciación, sin embargo, me separo de los párrafos 44 y 55, en los que se utiliza el test de proporcionalidad y, como he mencionado en otros precedentes, la aplicación acrítica (considero) de una metodología del test de proporcionalidad, confunde la labor de la Suprema Corte, pues se asume que en la mayoría de los casos existe una colisión de derechos que puede resolverse mediante la ponderación; sin embargo, se trata de una metodología que provoca que uno de los derechos inevitablemente ceda ante otro con base en una decisión judicial que, además, puede ser fuertemente subjetiva al incluir consideraciones principialistas de carácter ético-moral en la interpretación jurídica, en lugar de asumir que los derechos pueden ser suprimidos o derrotados, según sea el caso correspondiente.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de los preceptos impugnados, oportunidad y legitimación: Unanimidad de votos.</p> <p>Causales de improcedencia y sobreesimio: Unanimidad de votos.</p> <p>Estudio de fondo VI.2: unanidad de cinco votos a favor de la propuesta, salvo por lo que se refiere al artículo 56, fracción IX, de la Ley de Ingresos de Municipio de Fronteras con mayoría de diez votos; voto en contra de la señora Ministra Esquivel Mossa y precisiones de la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, en cuanto a los artículos 46, inciso c), fracción XXXII, artículo XLVI, inciso d), fracción o numeral i) y con diversas consideraciones y adicionales señaladas por la señora Ministra Presidenta.</p> <p>Estudio de fondo VI.3: Unanimidad de votos.</p> <p>Estudio de fondo VI.4: Mayoría de diez votos a favor de la propuesta, la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, en contra del párrafo 195, y voto en contra de la señora Ministra Bates Guadarrama.</p> <p>Estudio de fondo VI.5: por lo que se refiere a la declaración de invalidez del artículo 39 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Bacoachi, Sonora, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro.</p> <p>Apartados de antecedenencia, competencia, precisión de la litis, existencia del acto impugnado, oportunidad, legitimación activa, legitimación pasiva y causas de improcedencia: Unanimidad de votos.</p> <p>Estudio de fondo A y B: mayoría de ocho votos a favor de la propuesta; el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena anuncia voto concurrente; la señora Ministra Esquivel Mossa, en contra del apartado A; la señora Ministra Ortiz Ahl, con consideraciones distintas; y la señora Ministra Bates Guadarrama, con aclaraciones; la señora Ministra Ros Farjat, con precisiones; y con el voto en contra de la señora Ministra Piña Hernández, quien anuncia voto particular.</p> <p>Resolutivos: Unanimidad de votos.</p>
<p>Controversia Constitucional 32/2024</p> <p>Ponente: Ministra Ríos Farjat</p> <p>Resuelto: 23/09/2024</p>	<p>Constitucional</p>	<p>Invalidez de la asignación presupuestaria para dos mil veinticuatro, contenida en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio de 2024 y su anexo veintidós, publicados en el Periódico Oficial de esa entidad de 29 de diciembre de 2023.</p>	<p>¿El Congreso local, sin fundamentación ni motivación, realizó una reducción al proyecto de presupuesto elaborado por el organismo autónomo actor?</p>	<p>PRIMERO. Es procedente, pero infundada la presente controversia constitucional.</p> <p>SEGUNDO. Se reconoce la validez de la asignación presupuestaria al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, contenida en el presupuesto de egresos del gobierno del estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y su anexo 22, expedidos mediante el Decreto número mil seiscientos veintinueve, publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa el veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés.</p> <p>TERCERO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartados de antecedenencia, competencia, precisión de la litis, existencia del acto impugnado, oportunidad, legitimación activa, legitimación pasiva y causas de improcedencia: A favor.</p> <p>Estudio de fondo A y B: A favor con aclaraciones.</p> <p>Resolutivo: A favor.</p>	<p>Apartados de antecedenencia, competencia, precisión de la litis, existencia del acto impugnado, oportunidad, legitimación activa, legitimación pasiva y causas de improcedencia: A favor.</p> <p>Estudio de fondo A y B: A favor con aclaraciones.</p> <p>Resolutivo: A favor.</p>	<p>Apartados de antecedenencia, competencia, precisión de la litis, existencia del acto impugnado, oportunidad, legitimación activa, legitimación pasiva y causas de improcedencia: Unanimidad de votos.</p> <p>Estudio de fondo A y B: mayoría de ocho votos a favor de la propuesta; el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena anuncia voto concurrente; la señora Ministra Esquivel Mossa, en contra del apartado A; la señora Ministra Ortiz Ahl, con consideraciones distintas; y la señora Ministra Bates Guadarrama, con aclaraciones; la señora Ministra Ros Farjat, con precisiones; y con el voto en contra de la señora Ministra Piña Hernández, quien anuncia voto particular.</p> <p>Resolutivos: Unanimidad de votos.</p>
<p>Controversia Constitucional 14/2024</p> <p>Ponente: Ministra Ortiz Ahl</p> <p>Resuelto: 24/09/2024</p>	<p>Constitucional</p>	<p>Invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Ingresos de dicho Municipio, para el ejercicio fiscal de esa entidad, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad de 29 de noviembre de 2023, mediante Decreto 280.</p>	<p>1. ¿El Congreso local contravino el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que omitió cumplir con su deber de motivación objetiva y razonable para sustentar la modificación entre la propuesta municipal y lo aprobado por el Congreso Estatal en el sentido de cambiar las cuotas establecidas para la inscripción en el padrón de industria y comercio, el refrendo de las licencias de funcionamiento, la expedición de dictámenes por la Coordinación Municipal de Protección Civil y la expedición de permisos relacionados con la materia ambiental? 2. ¿La eliminación de los preceptos relativos al derecho de alumbrado público de la iniciativa de Ley de Ingresos propuesta por el Municipio actor se encuentra motivado objetiva y razonablemente?</p>	<p>PRIMERO. Es parcialmente procedente y parcialmente fundada la presente controversia constitucional.</p> <p>SEGUNDO. Se sobresee en la presente controversia constitucional respecto del artículo primero transitorio de la Ley de Ingresos del municipio de Apizaco, Tlaxcala, para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro.</p> <p>TERCERO. Se declara la invalidez de los artículos 30, 31 y 32 de la Ley de Ingresos para el municipio de Apizaco, Tlaxcala, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, publicada en el periódico oficial de esa entidad federativa el veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés.</p> <p>CUARTO. La declaración de invalidez decretada en este fallo surtirá sus efectos a los treinta días naturales siguientes a la notificación de los puntos resolutive de esta sentencia al congreso del estado de Tlaxcala.</p> <p>QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del estado de Tlaxcala, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas cuya invalidez se demanda, oportunidad, legitimación activa, legitimación pasiva y causas de improcedencia y sobreesimio: A favor.</p> <p>Estudio de fondo: En contra.</p> <p>Efectos: En contra.</p> <p>Resolutivos: A favor.</p>	<p>¿Sobre presión de normas? Aquí se plantea, del andrós, obviamente, del Decreto 280, que contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Apizaco, los artículos 30, 31 y 32, que se propone se declaren inválidos, pero, de acuerdo con la demanda, también se planteó la eliminación o está combatiéndose la eliminación de los artículos 49 a 49 Bis 11, que contemplaban en la Ley de Ingresos (propuesta por el municipio actor) el cobro de derechos por el servicio de alumbrado público y aquí se planteó justamente como omisión legislativa, entonces, yo propondría (pues) que se incluyan también por parte de la litis.</p> <p>Estudio de fondo: Si, gracias, Ministra Presidenta. Yo estaría en contra del proyecto en cuanto propone declarar la invalidez de los artículos 30, 31 y 32 de la Ley de Ingresos del Municipio de Apizaco para el Ejercicio Fiscal 2024, que establecen cuotas para la expedición de licencias, dictámenes y constancias.</p> <p>Los argumentos del municipio accionante, que se consideran infundados porque no alegan una violación directa a la esfera competencial; se refiere, de acuerdo con la fracción IV del artículo 115 de la Constitución, que establece que los municipios administran libremente su presupuesto, con excepción de los que se refieren a las actividades que son de competencia estatal.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas cuya invalidez se demanda, oportunidad, legitimación activa, legitimación pasiva y causas de improcedencia y sobreesimio: Unanimidad de votos.</p> <p>Estudio de fondo: por lo que se refiere a la propuesta de invalidez de los artículos 30, 31 y 32, existe una mayoría de nueve votos a favor de la propuesta; y por lo que se refiere a la propuesta de declarar infundada la eliminación de los artículos 49, 49 Bis, mayoría de seis votos a favor de la propuesta, con voto en contra del señor Ministro Aguilar Morales, la señora Ministra Bates Guadarrama, la señora Ministra Ros Farjat y del señor Ministro Pérez Dayán.</p> <p>Efectos: me permito informarle que existe mayoría de nueve votos a favor de la propuesta, con voto en contra de la señora Ministra Bates Guadarrama.</p> <p>Resolutivos: Unanimidad de votos.</p>
<p>Controversia Constitucional 33/2024</p> <p>Ponente: Ministra Ortiz Ahl</p> <p>Resuelto: 24/09/2024</p>	<p>Constitucional</p>	<p>Invalidez del artículo 43, fracción IV, de la Ley de Ingresos de dicha entidad, publicado en el Periódico Oficial local de 30 de diciembre de 2023, mediante Decreto 519.</p>	<p>¿El Congreso de Zacatecas contravino el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al incumplir con la motivación objetiva y razonable que le resultaba exigible para cambiar la tasa de impuesto predial para plantas de beneficio y establecimientos metalúrgicos, y sujeta al municipio a la realización de convenios de pago, así como la eliminación del impuesto industrial y a poseedores de bienes inmuebles con actividad minera?</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y fundada la controversia constitucional.</p> <p>SEGUNDO. Se declara la invalidez del artículo 43, fracción IV, de la Ley de Ingresos para el municipio de Morelos, Zacatecas, correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro, publicada en el periódico oficial de esa entidad federativa el treinta de diciembre de dos mil veintitrés, así como la eliminación de las fracciones IV y VI, contenidas en la iniciativa de ley de ingresos propuesta, en los que se regulaba, en la primera, un impuesto predial para inmuebles industriales y, en la segunda, un impuesto predial a poseedores de bienes inmuebles con actividad minera.</p> <p>TERCERO. La declaración de invalidez decretada en este fallo surtirá sus efectos a los treinta días naturales siguientes a la notificación de los puntos resolutive de esta sentencia al Congreso del Estado de Zacatecas.</p> <p>CUARTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el periódico oficial del estado de Zacatecas; así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de la norma cuya invalidez se demanda, oportunidad, legitimación activa, legitimación pasiva y causas de improcedencia y sobreesimio: A favor.</p> <p>Estudio de fondo: En contra.</p> <p>Efectos: En contra.</p> <p>Resolutivos: A favor.</p>	<p>Estudio de fondo: Si, gracias, Ministra Presidenta. En este caso también me voy a manifestar en contra de la invalidez del artículo 43, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelos, Zacatecas, correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro.</p> <p>El proyecto propone invalidar la norma impugnada porque el Congreso local no cumplió con el parámetro de motivación objetiva y razonable para apartarse de la iniciativa de ley de ingresos presentada por el municipio actor y modificar su contenido; sin embargo, no existe norma constitucional o disposición legal que exija al Congreso estatal una justificación objetiva y razonable cuando decida apartarse de las iniciativas de ingresos municipales ya que como lo establece el artículo 51, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, el Congreso no está obligado a aprobar las iniciativas en los términos en que sean presentadas pues solamente representa el inicio de un proceso legislativo.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de la norma cuya invalidez se demanda, oportunidad, legitimación activa, legitimación pasiva y causas de improcedencia y sobreesimio: Unanimidad de votos.</p> <p>Estudio de fondo: mayoría de nueve votos a favor de la propuesta; con salvedades en cuanto al párrafo 103, apartándose de este el señor Ministro Pardo Rebollo y la señora Ministra Presidenta Piña Hernández y voto en contra de la señora Ministra Bates Guadarrama.</p> <p>Efectos: mayoría de nueve votos a favor de la propuesta, con el voto en contra de la señora Ministra Bates Guadarrama.</p> <p>Resolutivos: Unanimidad de votos.</p> <p>En este sentido, el Congreso está facultado para verificar que las iniciativas sean congruentes tanto con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como con la Constitución Política del Estado de Zacatecas.</p>

<p>Contradicción de criterios 9/2024</p> <p>Ponente: Ministra Ortiz Ahí</p> <p>Resuelto: 26/09/2024</p>	<p>Constitucional</p>	<p>Posible contradicción entre el criterio sostenido por la Primera Sala, al resolver un recurso de revisión en incidente de suspensión y un amparo en revisión, y el sostenido por la Segunda Sala, al fallar un recurso de revisión en incidente de suspensión.</p>	<p>Posible contradicción entre el criterio sostenido por la Primera Sala, al resolver un recurso de revisión en incidente de suspensión y un amparo en revisión, y el sostenido por la Segunda Sala, al fallar un recurso de revisión en incidente de suspensión.</p>	<p>ÚNICO. Es inexistente la contradicción de criterios denunciada.</p>	<p>Apartados de competencia, legitimación y criterios denunciados: A favor.</p> <p>Apartado IV: A favor.</p> <p>Resolutivos: A favor.</p>	<p>Sin comentarios.</p>	<p>Apartados de competencia, legitimación y criterios denunciados: Unanimidad de votos.</p> <p>Apartado IV: Unanimidad de votos.</p> <p>Resolutivos: Unanimidad de votos.</p>
<p>Contradicción de criterios 28/2024</p> <p>Ponente: Ministra Ortiz Ahí</p> <p>Resuelto: 26/09/2024</p>	<p>Constitucional</p>	<p>Posible contradicción de criterios entre las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y entre Tribunales Colegiados de diferentes Regiones, cuya temática se relaciona con la facultad de reencauzar la vía de los recursos intentados en los juicios de amparo cuando se interpongan los que resulten incorrectos.</p>	<p>Posible contradicción de criterios entre las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y entre Tribunales Colegiados de diferentes Regiones, cuya temática se relaciona con la facultad de reencauzar la vía de los recursos intentados en los juicios de amparo cuando se interpongan los que resulten incorrectos.</p>	<p>PRIMERO. Se desecha la presente contradicción por lo que hace a los criterios sostenidos por la primera y la segunda salas de este alto tribunal.</p> <p>SEGUNDO. Es inexistente la contradicción de criterios denunciada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.</p>	<p>Apartados de competencia, legitimación y criterios denunciados: A favor.</p> <p>Apartado IV: A favor.</p> <p>Resolutivos: A favor.</p>	<p>Sin comentarios.</p>	<p>Apartados de competencia, legitimación y criterios denunciados: Unanimidad de votos.</p> <p>Apartado IV: mayoría de cinco votos a favor de la propuesta, la señora Ministra Ortiz Ahí, en contra de consideraciones; y por la improcedencia el señor Ministro Pérez Dayán y la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, con anuncio de voto particular.</p> <p>Resolutivos: Unanimidad de votos.</p>
<p>Acción de inconstitucionalidad 56/2024</p> <p>Ponente: Ministra Ortiz Ahí</p> <p>Resuelto: 30/09/2024</p>	<p>Constitucional</p>	<p>Invalidez del Decreto 709/2023, por el que se emite el Presupuesto de Egresos del Gobierno del mencionado Estado, para el ejercicio fiscal 2024, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad de 28 de diciembre de 2023.</p>	<p>¿La modificación por parte del Ejecutivo local del presupuesto que la Comisión promoviente había solicitado, en las porciones normativas reclamadas, es violatoria del principio de legalidad y de la autonomía presupuestal del referido órgano?</p>	<p>PRIMERO. Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas reclamadas y oportunidad: A favor.</p> <p>Apartado relativo a causas de improcedencia y sobroseimiento: A favor.</p>	<p>Sin comentarios.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las normas reclamadas y oportunidad: Unanimidad de votos.</p> <p>Apartado relativo a causas de improcedencia y sobroseimiento: Mayoría de seis votos en contra de la propuesta y por el sobroseimiento.</p>
<p>Controversia Constitucional 46/2024</p> <p>Ponente: Ministra Ortiz Ahí</p> <p>Resuelto: 30/09/2024</p>	<p>Constitucional</p>	<p>Invalidez del artículo 21, fracciones XI y XII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Nava, del mencionado Estado, para el ejercicio fiscal de 2024, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad de 22 de diciembre de 2023.</p>	<p>¿El precepto impugnado, al prever el cobro de derechos por la expedición de un permiso de construcción y remodelación de pozos por la extracción de cualquier hidrocarburo, invade la competencia exclusiva del Congreso de la Unión para regular la exploración y extracción de hidrocarburos?</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y fundada la presente controversia constitucional.</p> <p>SEGUNDO. Se declara la invalidez del artículo 21, fracciones XI y XII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Nava, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2024, expedida mediante el periódico oficial de dicha entidad federativa el veintidós de diciembre de dos mil veintitres.</p> <p>TERCERO. La declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al congreso del estado de Coahuila de Zaragoza, en los términos precisados en el apartado VII de esta determinación.</p> <p>CUARTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como en el semanario judicial de la federación y su gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión y existencia de la norma cuya invalidez se demanda, oportunidad, legitimación y causas de improcedencia y sobroseimiento: A favor.</p> <p>Estudio de fondo: A favor.</p> <p>Efectos: A favor y en contra del exhorto.</p> <p>Resolutivos: A favor.</p>	<p>St. Yo estoy a favor del proyecto en cuanto a la declaración de invalidez del artículo 21, fracciones XI y XII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Nava, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2024, que establecen el cobro por la expedición de permisos de construcción y remodelación de pozos en materia de hidrocarburos, pues las fracciones citadas podrían ser violatorias del artículo 73, fracciones X y XXX, numeral 2, en relación con el artículo 27, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que facultan al Congreso de la Unión para legislar en toda la República en materia de hidrocarburos, efectivamente, así como para establecer contribuciones sobre su aprovechamiento y explotación.</p> <p>El artículo 27, párrafo sexto, de la Constitución establece, además, respecto de estos recursos que el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y que su explotación, uso y aprovechamiento por los particulares o por sociedades, constituidas conforme a las leyes mexicanas, requiere concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal. En tal sentido, para que la norma impugnada fuera válida, debería prever, como requisito para otorgar el permiso de construcción o remodelación de pozos de hidrocarburos, el consentimiento del Comido con la primera parte del proyecto que señala que la petición de los promoventes no podría ser admitida con base en el artículo 11, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque no se pretende disminuir un conflicto derivado de alguna obligación contractual sino que se busca examinar a través de un pretendido escrutinio constitucional la validez formal y material de la reforma constitucional en materia de poder judicial, publicada el quince de septiembre pasado.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión y existencia de la norma cuya invalidez se demanda, oportunidad, legitimación y causas de improcedencia y sobroseimiento: Unanimidad de votos.</p> <p>Estudio: Unanimidad de votos.</p> <p>Efectos: Unanimidad de votos a favor de la propuesta de efectos y, en cuanto a la exhortación al Congreso local, mayoría de seis votos en contra de la propuesta. Se suprime.</p> <p>Resolutivos: Unanimidad de votos.</p>
<p>Consulta a trámite 4/2024</p> <p>Ponente: Ministro González Alcántara Carranca</p> <p>3/10/2024</p>	<p>Constitucional</p>	<p>Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial.</p>	<p>¿Cuál es el trámite que debe seguir la controversia planteada por diversos magistrados y magistrados de Circuito, así como jueces y jueces de Distrito, con fundamento en el artículo 11, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para controvertir la reciente reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación?</p>	<p>ÚNICO. Devuélvanse los autos a la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, atendiendo a lo determinado en esta resolución, provea lo conducente respecto de la solicitud que dio origen a la presente consulta a trámite.</p>	<p>Sentido de la propuesta: En contra.</p> <p>Resolutivo: En contra.</p>	<p>Estoy en contra de la segunda parte del proyecto que propone interpretar la fracción XXII del artículo 11 de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como la vía idónea para procesar una petición como la que motivó la presente consulta a trámite: uno, porque excede la materia de la consulta al estudiar una vía distinta a la cuestionada por la ministra presidenta, generando una especie de suplencia de la deficiencia de la solicitud, absolutamente injustificada, pues los promoventes son peritos en derecho. Y dos, porque se nos propone ampliar el sentido de la fracción XXII, e incluso del primer párrafo del artículo 11 de la ley orgánica al pretender que una fracción circunscrita expresamente a controversias</p>	<p>Sentido de la propuesta: Mayoría de ocho votos a favor de la propuesta, con el voto en contra de las Ministras Batres Guadarrama, Esquivel Mossa y Ortiz Ahí.</p> <p>Resolutivo: Mayoría de ocho votos a favor de la propuesta, con el voto en contra de las Ministras Batres Guadarrama, Esquivel Mossa y Ortiz Ahí.</p>
<p>Consulta a trámite 5/2024</p> <p>Ponente: Ministra Esquivel Mossa</p> <p>7/10/2024</p>	<p>Constitucional</p>	<p>Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial.</p>	<p>¿Cuál es la vía procedente que se hace valer en la controversia de origen, en la cual se da una respuesta jurídica ya sea de procedencia y, en su caso, de fondo, a la pretensión de control constitucional respecto de una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?</p>	<p>PRIMERO. Es procedente la presente consulta a trámite.</p> <p>SEGUNDO. La Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe deschar por notoriamente improcedente la solicitud a que se refiere este expediente.</p>	<p>Apartados de competencia: A favor.</p> <p>Consideraciones y fundamentos: A favor.</p>	<p>Yo voy a votar a favor de este proyecto, con consideraciones adicionales. Comparto el sentido del proyecto que propone deschar por notoriamente improcedente en la solicitud realizada por diversas personas secretarías del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y del Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, para que esta Suprema Corte analice el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al poder judicial, por estimar que vulnera el principio de división de poderes, la autonomía de uno de los poderes de la unión, así como la esencia de la República. Lo anterior, porque no se ajustan a los alcances previstos en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para su procedencia, pues esta Suprema Corte no tiene competencia para analizar y mucho menos para generar una resolución de fondo (de ser el caso). Admitir la solicitud que se analiza, implicaría violar flagrantemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al atribuirnos una competencia que no nos ha sido otorgada por la propia constitución o por alguna ley. La fracción XVII del artículo 11 de la ley orgánica únicamente establece una facultad administrativa del pleno para resolver controversias</p>	<p>Apartados de competencia: Unanimidad de votos.</p> <p>Consideraciones y fundamentos: Mayoría de ocho votos en contra de la propuesta, con voto a favor de la señora Ministra Esquivel Mossa, quien anuncia voto particular; la señora Ministra Ortiz Ahí, quien anuncia voto particular; la señora Ministra Batres Guadarrama, con consideraciones adicionales.</p> <p>RETORNO</p>

<p>Consulta a trámite 6/2024</p> <p>Ponencia: Ministra Esquivel Mossa</p> <p>7/10/2024</p>	<p>Constitucional</p>	<p>Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial.</p>	<p>¿Cuál es la vía procedente que se hace valer en la controversia de origen, en la cual se da una respuesta jurídica ya sea de procedencia y, en su caso, de fondo, a la pretensión de control constitucional respecto de una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?</p>	<p>PRIMERO. Es procedente la presente consulta a trámite.</p> <p>SEGUNDO. La Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación debe desear, por notoriamente improcedente, la solicitud a que se refiere este expediente.</p>	<p>Apartados de competencia: A favor.</p> <p>Consideraciones y fundamentos: A favor.</p>	<p>Sin comentarios.</p>	<p>Apartados de competencia: Unanimidad de votos.</p> <p>Consideraciones y fundamentos: Mayoría de ocho votos en contra de la propuesta, con voto a favor de la señora Ministra Esquivel Mossa, quien anuncia voto particular; la señora Ministra Batres Guadarrama, con consideraciones adicionales.</p> <p>RETORNO</p>
<p>Consulta a trámite 7/2024</p> <p>Ponencia: Ministra Esquivel Mossa</p> <p>7/10/2024</p>	<p>Constitucional</p>	<p>Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial.</p>	<p>¿Cuál es la vía procedente que se hace valer en la controversia de origen, en la cual se da una respuesta jurídica ya sea de procedencia y, en su caso, de fondo, a la pretensión de control constitucional respecto de una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?</p>	<p>PRIMERO. Es procedente la presente consulta a trámite.</p> <p>SEGUNDO. La Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación debe desear, por notoriamente improcedente, la solicitud a que se refiere este expediente.</p>	<p>Apartados de competencia: A favor.</p> <p>Consideraciones y fundamentos: A favor.</p>	<p>Sin comentarios.</p>	<p>Apartados de competencia: Unanimidad de votos.</p> <p>Consideraciones y fundamentos: Mayoría de ocho votos en contra de la propuesta, con voto a favor de la señora Ministra Esquivel Mossa, quien anuncia voto particular; la señora Ministra Batres Guadarrama, con consideraciones adicionales.</p> <p>RETORNO</p>
<p>Consulta a trámite 2/2024</p> <p>Ponencia: Ministra Batres Guadarrama</p> <p>7/10/2024</p>	<p>Constitucional</p>	<p>Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial.</p>	<p>¿La Presidencia de este Alto Tribunal, al conocer de un asunto de los previstos en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, puede pronunciarse sobre la procedencia de la o las medidas cautelares que se hagan valer?</p>	<p>PRIMERO. Es improcedente la concesión de medidas cautelares en las controversias previstas en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.</p> <p>SEGUNDO. Devuélvanse los autos a la Presidencia de esta Suprema Corte para que, atendiendo a lo determinado en esta resolución, provea lo conducente respecto de la solicitud de la asociación nacional de magistrados de circuito y jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación, A.C., en relación con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del poder judicial.</p>	<p>Precisión de la consulta: A favor.</p> <p>Estudio de la consulta: A favor.</p> <p>Cambio de resolutive: En contra.</p>	<p>En este apartado se precisa cuál fue la consulta realizada por la Presidencia de esta Suprema Corte al pleno. Esta consulta versó sobre la posibilidad, efectivamente, de que al conocer de un asunto de los previstos en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Presidencia se pronuncie sobre la procedencia de la o las medidas cautelares que se hagan valer.</p> <p>Primero, se analiza el contenido de la fracción XVII del artículo 11 de la ley orgánica. Se concluye que este pleno es competente única y exclusivamente para conocer respecto de alguna controversia suscitada entre las salas de la Suprema Corte o al interior del Poder Judicial de la Federación con motivo de las competencias otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a los órganos de este poder y por la interpretación y aplicación de los artículos 94, 97, 100 y 101, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que abordan cuestiones competenciales, y es respecto de esto que se pronuncia el propio proyecto.</p> <p>En el apartado IV del proyecto se desarrolla el estudio de la consulta. En principio, se expone la naturaleza de las medidas cautelares, se analiza la naturaleza de las controversias a las que se refieren, y se plantea, como único punto en el apartado 4 del estudio de fondo, se propone declarar sin materia.</p>	<p>Precisión de la consulta: Mayoría de ocho votos a favor de la propuesta; el Ministro Gutiérrez Ortiz Mensa realiza precisiones en cuanto a la materia de análisis; el Ministro González Alcántara Carrancá, en contra de los párrafos 6 al 19; el Ministro Pardo Rebollo, en contra de los párrafos 6 al 19; la Ministra Tíos Farjat, con precisiones y anuncio de voto concurrente en contra de algunas consideraciones; el Ministro Laynez Potisek, en contra de los párrafos 6 al 19; la Ministra Presidenta Piña Hernández, en contra de los párrafos 6 al 19; con voto en el sentido de que carece de materia: la Ministra Esquivel Mossa, el Ministro Aguilar Morales y el Ministro Pérez Dayán.</p> <p>Estudio de la consulta: Mayoría de seis votos en contra de la propuesta, expresada por los señores Ministros González Alcántara Carrancá, Aguilar Morales, Pardo Rebollo, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Ministra Presidenta Piña Hernández, en el sentido de que ha quedado sin materia el asunto de origen.</p> <p>Se vota para cambio de resolutive. Mayoría de ocho votos a favor del punto resolutive propuesto.</p>
<p>Consulta a trámite 1/2024</p> <p>Ponencia: Ministra Batres Guadarrama</p> <p>7/10/2024</p>	<p>Constitucional</p>	<p>Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial.</p>	<p>¿La Presidencia de este Alto Tribunal, al conocer de un asunto de los previstos en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, puede pronunciarse sobre la procedencia de la o las medidas cautelares que se hagan valer?</p>	<p>PRIMERO. Queda sin materia la presente consulta a trámite.</p> <p>SEGUNDO. Devuélvanse los autos a la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales conducentes.</p>	<p>Precisión de la consulta: A favor.</p> <p>Estudio de la consulta: A favor.</p> <p>Cambio de resolutive: En contra.</p>	<p>De todas formas, no obstante que no estoy de acuerdo en el sentido que se ha votado, en una consulta muy similar a la anterior y, de cualquier forma, pues, de dejar sin materia, con otras consideraciones, porque obviamente, he repetido la opinión de que no es posible de que la Presidencia de esta corte, al conocer de un asunto de los previstos en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, resuelva sobre el otorgamiento de medidas cautelares, porque así se hizo la solicitud de la consulta a trámite y, en términos generales, igual que la anterior.</p>	<p>Cambio de resolutive: ÚNICO. Devuélvanse los autos a la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que, atendiendo a lo determinado en esta resolución, específicamente, en cuanto a que ha quedado sin materia el asunto de origen provea lo conducente. Aprobado por unanimidad.</p>
<p>Consulta a trámite 3/2024</p> <p>Ponencia: Ministra Batres Guadarrama</p> <p>7/10/2024</p>	<p>Constitucional</p>	<p>Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial.</p>	<p>¿La Presidencia de este Alto Tribunal, al conocer de un asunto de los previstos en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, puede pronunciarse sobre la procedencia de la o las medidas cautelares que se hagan valer?</p>	<p>PRIMERO. Queda sin materia la presente consulta a trámite.</p> <p>SEGUNDO. Devuélvanse los autos a la Presidencia de esta Suprema Corte para los efectos legales conducentes.</p>	<p>Precisión de la consulta: A favor.</p> <p>Estudio de la consulta: A favor.</p> <p>Cambio de resolutive: En contra.</p>	<p>En el mismo sentido que el anterior, está proponiéndose en el proyecto que no se asuma que existe competencia por parte de la Presidencia de esta Suprema Corte, que al conocer de un asunto de los previstos en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se acepte que se tiene competencia para resolver sobre el otorgamiento de medidas cautelares, porque así se presentó la consulta, entonces, se está asumiendo pues, en el mismo sentido que el proyecto anterior (sin materia), por la resolución previa o, por lo menos, el sentido de ella, del proyecto, de la consulta de trámite 2/2024; entonces, entendería que tendríamos que repetir la votación anterior.</p>	<p>Antecedentes, competencia y precisión de la consulta. Aprobados por unanimidad.</p> <p>Cambio de resolutive: ÚNICO. Devuélvanse los autos a la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que, atendiendo a lo determinado en esta resolución, específicamente, en cuanto a que ha quedado sin materia el asunto de origen provea lo conducente. Aprobado por unanimidad con voto concurrente de la señora Ministra Batres Guadarrama.</p>
<p>Controversia constitucional 73/2024</p> <p>Ponencia: Ministra Ortiz Ahí</p> <p>08/10/2024</p>	<p>Administrativa</p>	<p>Artículo 19, fracciones VIII, IX y XIV, numerales 1 y 2, de la Ley de Ingresos del Municipio General Cepeda, del mencionado Estado, para el ejercicio fiscal de 2024, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad de 22 de diciembre de 2023.</p>	<p>1. ¿El precepto impugnado que prevé el cobro de derechos por la expedición de un permiso de construcción y remodelación de pozos por la extracción de cualquier hidrocarburo, invade la competencia exclusiva del Congreso de la Unión para regular la explotación, exploración y extracción de hidrocarburos?</p> <p>2. ¿El precepto que establece el cobro de derechos por la expedición de licencias para la instalación de antenas, misiles, bases de comunicación, telefonía, radiopéridoras o similares, invade la competencia de la Federación para legislar en materia de vías generales de comunicación, tecnologías de la información y telecomunicaciones?</p>	<p>PRIMERO. Es procedente y fundada la presente controversia constitucional.</p> <p>SEGUNDO. Se declara la invalidez del artículo 19, fracciones VIII, IX y XIV, numerales 1 y 2, de la Ley de Ingresos del Municipio General Cepeda, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2024, publicada en el periódico oficial de dicha entidad federativa el veintidós de diciembre de dos mil veintitrés.</p> <p>TERCERO. La declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutive al Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza y conforme a los efectos precisados en el apartado VII de esta determinación.</p> <p>CUARTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartado de competencia, oportunidad y legitimación: A favor.</p> <p>Consideraciones: En contra.</p> <p>Efectos: A favor.</p>	<p>Usted lo está sometiendo a la, ya a las consideraciones que nos plantee quien determine, pues va a elaborar o a presentar ante lo que se va a votar, va a votar a favor del proyecto, pero por consideraciones distintas, dado que se busca declarar la invalidez del artículo 19, fracciones VIII y IX de la ley de ingresos del Municipio General Cepeda, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2024, el cual establece el cobro por la expedición de permisos de construcción y remodelación de pozos en materia de hidrocarburos. // El proyecto considera que las fracciones impugnadas invaden la esfera competencial de la Federación al transgredir los artículos 73, fracción X, en relación con el 27, cuarto párrafo, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que facultan al Congreso de la Unión para legislar en toda la república en materia de hidrocarburos; no obstante, el artículo 96, párrafo tercero, de la ley de hidrocarburos establece que la Federación, los gobiernos de los estados y de los municipios contribuirán al desarrollo de proyectos de exploración y extracción, así como de transporte y distribución por ductos y almacenamiento, mediante procedimientos y bases de coordinación que agilicen y garanticen el otorgamiento de los permisos y autorizaciones en el ámbito de su competencia, como dice textualmente.</p>	<p>Apartado de competencia, oportunidad y legitimación: Unanimidad con el proyecto.</p> <p>Consideraciones: Mayoría de ocho votos a favor de la propuesta de invalidez del numeral 1 de la fracción XIV del artículo 19; y unanimidad de diez votos, por lo que se refiere a la propuesta de invalidez del numeral 2 de dicha fracción; el señor ministro Pardo Rebollo anuncia voto concurrente; la señora Ministra Batres Guadarrama, en contra de consideraciones, igual que en el apartado previo.</p> <p>Efectos: Aprobado por unanimidad.</p>

<p>Acción de Inconstitucionalidad 8/2016 y acumulada 9/2016</p> <p>Ponencia: Ministro Aguilar Morales</p> <p>15/10/2024</p>	<p>Seguridad social</p>	<p>Invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Social del mencionado Estado, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad de 31 de diciembre de 2015, mediante Decreto 294.</p>	<p>1. Posible sobreesimiento por cesación de efectos respecto de los artículos 6, fracciones I y II, 55, 63, fracción IV, 64 y 98, fracción III, impugnados.</p> <p>2. Violación al procedimiento legislativo.</p> <p>3. Análisis de los argumentos relacionados con la violación al principio de progresividad.</p> <p>3.1. Aumento de la cuota que corresponde a los trabajadores y la edad para acceder a una pensión.</p> <p>3.2. Cuota adicional para ascendientes.</p> <p>3.3. Derecho del trabajador de dar aviso de un accidente.</p> <p>4. Análisis de los argumentos relacionados con la violación al principio de irretroactividad de la ley.</p> <p>4.1. Beneficio de transición únicamente para los pensionados, y no para los trabajadores, y restricción de derechos.</p> <p>4.2. Condiciones para el retiro del saldo de la cuenta individual.</p> <p>4.3. Plazo para resolver sobre la procedencia de las pensiones.</p> <p>5. Análisis de los argumentos relacionados con la diferencia de trato entre trabajadoras y trabajadores.</p> <p>6. Análisis de los argumentos relacionados con las condiciones de acceso y disfrute de las pensiones.</p> <p>6.1. Sueldo regulador.</p> <p>6.2. Liquidación de adeudos con el Instituto.</p> <p>6.3. Tope máximo de las pensiones.</p> <p>6.4. Incompatibilidad de pensión con el reintegro al servicio activo.</p> <p>6.5. Atribución del Instituto de emitir los documentos que se emiten al derecho de</p>	<p>PRIMERO. Es parcialmente procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada.</p> <p>SEGUNDO. Se sobreesie en la presente acción de inconstitucionalidad respecto los artículos 6, fracciones I y II, 55, 63, fracción IV, 64 y 98 fracción III, de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco.</p> <p>TERCERO. Se reconoce la validez de los artículos 3, fracciones XVIII y XIX, 7, párrafo último, 10, 18, 30, fracción V (con la salvedad precisada con el resolutive cuarto de este fallo), 33, 34, 62, 66, 67, 70, 72, 73, 75, 78, 80, 82, del 86 al 90, 95, 103, 107, párrafo segundo, 122, 123, 131 y 132, de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, expedida mediante el decreto 294.</p> <p>CUARTO. Se declara la invalidez del artículo 2, párrafo último, 6, fracción VII, en su porción normativa "para el caso de la prestación médica, el asegurado deberá convenir con el ISSET, el incremento de su sueldo base en un porcentaje adicional, mismo que será establecido en el reglamento de ISSET", 23, fracción XII, 30, fracción v, en su porción normativa "pensiones caídas", 76, 106, párrafo segundo, en su porción normativa "y en general los que autorice la junta de gobierno", y 130, párrafo segundo, de la ley de seguridad social del estado de tabasco, expedida mediante el decreto 294, publicado en el periódico oficial de dicha entidad federativa el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, así como respecto del transitorio octavo del decreto 294, conforme a lo expuesto en el apartado vi de esta ejecutoria.</p> <p>QUINTO. La declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutive al Congreso del Estado de Tabasco, en los términos precisados en el apartado VII de esta determinación.</p> <p>SEXTO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el periódico oficial del estado de tabasco, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Ausente</p>	<p>Sin comentarios.</p>	<p>Apartados de competencia, precisión de las disposiciones impugnadas, oportunidad y legitimación: Aprobados por unanimidad de votos de los presentes.</p> <p>Aparato V: Unanimidad de votos a favor de la propuesta. Y también se pronuncian por sobreeser respecto de los artículos séptimo transitorio las señoras Ministras Esquivel Mossa y Ortiz Ahif, y la señora Ministra Esquivel Mossa, incluso, por el noveno, al igual que la Ministra Ortiz Ahif, por el décimo primero transitorio; y la señora Ministra Ortiz Ahif, incluso, por el segundo transitorio.</p> <p>Apartado VI.2.1: Por lo que se refiere al reconocimiento de validez del artículo 88, existe unanimidad de diez votos, por lo que se refiere al reconocimiento de validez del artículo 86, mayoría de nueve votos, con voto en contra de la señora Ministra Ortiz Ahif, en la porción normativa relativa a los treinta y cinco años o más; y, por lo que se refiere al transitorio séptimo, mayoría de ocho votos, y votos por el sobreesimiento de las señoras Ministras Esquivel Mossa y Ortiz Ahif, y por razones adicionales la Ministra Presidenta.</p> <p>Apartado VI.2.2: Mayoría de nueve votos a favor de la propuesta modificada; el señor Ministro Layme Potosiek, reserva su derecho a formular voto concurrente; la señora Presidenta piña Hernández, pues ya no hay consideraciones adicionales; y voto en contra de la señora Ministra Ortiz Ahif.</p> <p>Apartado VI.2.3: Unanimidad de votos de los presentes.</p>
<p>Acción de Inconstitucionalidad 47/2024 y acumulada 62/2024</p> <p>Ponencia: Ministra Ríos Farjat</p> <p>14/10/2024 y 17/10/2024</p> <p>RETIRADO</p>	<p>Electoral</p>	<p>Invalidez del artículo 25, fracción I de la base A, de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad de 30 de diciembre de 2023, mediante Decreto 1624.</p>	<p>1. ¿El decreto impugnado impacta de forma específica y diferenciada en los derechos e intereses de la ciudadanía perteneciente a las comunidades indígenas, por lo que se actualizaba la obligación de consultarlas?</p> <p>2. ¿El decreto impugnado, al establecer que la Gobernatura electa en el año dos mil veintiocho será por un periodo dos años, con la finalidad de lograr la concurrencia de su renovación con los comicios federales, contraviene el mandato de que la Gobernatura del estado de Oaxaca tenga una duración de seis años, según se desprende de los artículos 116 de la Constitución General y 69 de la Constitución local?</p> <p>3. ¿El decreto impugnado, por sí mismo, contraviene el principio constitucional de paridad de género y los derechos de participación política de las mujeres?</p>	<p>PRIMERO. Es procedente pero infundada la presente acción de inconstitucionalidad.</p> <p>SEGUNDO. Se reconoce la validez del Decreto Número 1624, Mediante el cual se Reforma la Fracción I, de la base A, del artículo 25, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.</p> <p>TERCERO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.</p>	<p>Apartados de competencia, oportunidad y legitimación: Ausente.</p> <p>Aparto 5.1: A favor, apartándose de consideraciones.</p>	<p>Con relación a este punto 5.1 sobre el incumplimiento del deber de consulta previa a comunidades indígenas, voy a votar a favor, apartándome de algunas consideraciones. Comparto el sentido del proyecto que propone reconocer la validez de la reforma de la fracción I de la base A del artículo 25 de la Constitución de Oaxaca, el cual establece que las elecciones de dicha entidad se celebrarán de manera concurrente con las elecciones federales, así como de su régimen transitorio que establece que el periodo de la próxima gubernatura será de dos años por única ocasión.</p> <p>El proyecto considera (bueno, me separaré más adelante de este periodo, pero lo comentaremos en su momento) que no es necesario efectuar una consulta indígena con relación a la periodicidad de los procesos para la renovación de los cargos de elección popular o la duración de sus mandatos, porque dicha modificación es susceptible de afectar de manera especial y diferenciada a los pueblos y comunidades indígenas frente al resto de la población, pues esta decisión tiene implicaciones para la ciudadanía en general de la entidad, con independencia de que se pertenezca o no a un grupo indígena, porque implica el ejercicio pleno de derechos de votar y ser votado.</p>	<p>Apartados de competencia, oportunidad y legitimación: Unanimidad con el sentido del proyecto.</p> <p>Apartado 5.1: Aprobado por unanimidad de votos.</p> <p>Estudio de fondo. Tema 3: Retirado.</p>